



Foro de los Países  
de América Latina  
y el Caribe sobre el  
**DESARROLLO  
SOSTENIBLE**  
Ciudad de México  
26 a 28 de abril **2017**

Distr.  
SOLO PARA PARTICIPANTES  
PARTICIPANTS ONLY  
DOCUMENTO DE REFERENCIA  
REFERENCE DOCUMENT  
20 de abril de 2017  
20 April 2017  
17-00282

Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Ciudad de México, 26 a 28 de abril de 2017

**APORTES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS AL PRIMER INFORME ANUAL  
SOBRE EL PROGRESO Y LOS DESAFÍOS REGIONALES DE LA AGENDA 2030  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

**CONTRIBUTIONS OF THE UNITED NATIONS SYSTEM TO THE FIRST ANNUAL REPORT  
ON REGIONAL PROGRESS AND CHALLENGES IN RELATION TO THE 2030 AGENDA  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN**

Este documento no ha sido sometido a revisión editorial. Estos y otros aportes también están disponibles en el sitio web de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible [en línea] <http://foroalc2030.cepal.org/2017/es>.

This document has not undergone formal editing. These and other contributions are available on the website of the first meeting of the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable Development [online] <http://foroalc2030.cepal.org/2017/en>.



NACIONES UNIDAS



## ÍNDICE

	<i>Página</i>
I. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION.....	3
II. APORTES DE LOS ORGANISMOS, FONDOS Y PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS / CONTRIBUTIONS OF UNITED NATIONS AGENCIES FUNDS AND PROGRAMMES.....	5
ACNUDH: OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS/ OHCHR: OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS.....	7
ACNUR: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS / UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) .....	15
FAO: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS .....	19
OCHA: OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS / OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS.....	26
OIM: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES / IOM: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION .....	30
OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO / ILO: INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION .....	34
ONU-MUJERES: ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES / UN-WOMEN: UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN .....	37
ONUSIDA: PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA / JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS .....	44
OPS: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / PAHO: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION .....	49
PMA: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS / WFP: WORLD FOOD PROGRAMME.....	54
PNUD: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO / UNDP: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME .....	58
PNUMA: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE / UNEP: UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME.....	78
UNESCO: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA / UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION .....	85
UNFPA: FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS / UNFPA: UNITED NATIONS POPULATION FUND .....	94
UNICEF: FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA / UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND .....	102
UNISDR: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES / UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION.....	104

## I. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION

En la resolución 700(XXXVI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en virtud de la cual se estableció el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros solicitaron a la Secretaría de la CEPAL que emitiera un informe anual sobre los progresos y desafíos regionales en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En cumplimiento de dicho mandato, la Secretaría ha preparado el *Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe*<sup>1</sup> en el que, entre otros, se describen y examinan los diferentes formatos institucionales y el conjunto de normas e instrumentos que los distintos países de la región se han dado para promover los ODS. Para dicho análisis fue esencial la contribución de los distintos organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. A continuación se reproducen dichos aportes íntegramente como fueron recibidos.

In resolution 700(XXXVI) of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), which established the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable Development, the member States requested the secretariat of the Commission to issue an annual report on regional progress and challenges in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Pursuant to that request, the secretariat has prepared the *Annual report on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda for Sustainable Development in Latin America and the Caribbean*<sup>2</sup> which, among other things, describes and examines the different institutional arrangements and all the rules and instruments that the different countries of the region have at their disposal to promote the Sustainable Development Goals. The input of the various agencies, funds and programmes of the United Nations system in Latin America and the Caribbean was invaluable to that analysis. Their unedited contributions are reproduced in full below.

---

<sup>1</sup> LC/L.4268(FDS.1/3).

<sup>2</sup> LC/L.4268(FDS.1/3).



**II. APORTES DE LOS ORGANISMOS, FONDOS Y PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS /  
CONTRIBUTIONS OF UNITED NATIONS AGENCIES FUNDS AND PROGRAMMES**



**ACNUDH - OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  
LOS DERECHOS HUMANOS/ OHCHR: OFFICE OF THE UNITED NATIONS  
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS**

**PRIMERA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE**

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible marca un cambio paradigmático hacia un modelo de desarrollo más equilibrado que tiene como objetivo asegurar una vida libre de violencia y discriminación para todos y todas. Fuertemente basada en los estándares internacionales de derechos humanos, la Agenda va más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), abarcando no solamente temas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, sino también los civiles y políticos y el derecho al desarrollo. Los principios de no discriminación e igualdad son el eje transversal de la Agenda. El mensaje central de “no dejar a nadie atrás” ofrece importantes oportunidades para cerrar las brechas para las personas más marginalizadas y aquellas que sufren discriminación. De manera significativa, los países miembros acordaron implementar la Agenda “de manera compatible con los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional”<sup>1</sup>, incluido el derecho internacional de los derechos humanos. Con un mandato universal sumando a su alcance operacional en la región,<sup>2</sup> la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) está estratégicamente posicionada y técnicamente dotada para liderar los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas en esta área.

**OACNUDH y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible**

Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no están explícitamente formulados en el lenguaje de los derechos humanos, la mayoría de las metas encuentran un correlato directo en los estándares de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. De este modo, nuestro trabajo está inexorablemente vinculado con su logro.

OACNUDH juega un papel importante los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas para que la Agenda 2030 sea implementada en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. A nivel de cada país, se trabaja con las agencias gubernamentales responsables para la implementación y el seguimiento de los ODS, con la sociedad civil y con el sistema de las Naciones Unidas para integrar un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) en la implementación de los ODS específicos. Las actividades en esta área pueden ser generalmente agrupadas en tres tipos: (1) capacitación en la integración de los derechos humanos y los vínculos entre ellos y la Agenda 2030; (2) eventos y producción de materiales informativos para aumentar el conocimiento de los derechos humanos y los ODS; y (3) el trabajo con el sistema de las Naciones Unidas a nivel del país y de la región para garantizar un EBDH en su programación.

---

<sup>1</sup> A/RES/70/1 - Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, párrafo 18.

<sup>2</sup> En la región de América Latina y el Caribe, OACNUDH tiene presencia en 10 países (oficinas de país en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y México; el componente de derechos humanos de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH); asesores de derechos humanos en Jamaica, Paraguay y la República Dominicana; y una oficial de los derechos humanos nacional en Barbados. La Oficina Regional para América del Sur cubre Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras la Oficina Regional para América Central cubre Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

Por ejemplo, el año pasado la Oficina Regional para América del Sur capacitó 35 organizaciones de sociedad civil (OSC) en Ecuador sobre ODS y derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. Para complementar esta última iniciativa, el OACNUDH estableció una alianza estratégica con la Delegación de la Unión Europea en el Ecuador para asegurar la disponibilidad de fondos para que las OSC monitoreen los ODS a mediano y largo plazo. Para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asesora en Derechos Humanos en Paraguay lanzó un concurso fotográfico “DDHH: Para no dejar a nadie atrás” resaltando la interrelación estrecha entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Muchos ODS están cercanamente emparentados con los derechos económicos, sociales y culturales, incluidas la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad de la educación, la alimentación, la salud, el agua, la sanidad, la higiene y otros servicios relacionados con estos derechos. El Objetivo 6<sup>3</sup>, reflejado en el derecho al agua potable y al saneamiento<sup>4</sup>, es un buen ejemplo. En México este derecho fue incorporado en la Constitución nacional en 2011. Desde esta fecha, OACNUDH ha estado impulsando en el Congreso la legislación secundaria que permita la concreción e implementación de este derecho al agua. En Colombia, nuestra Oficina ha brindado asesoría técnica a Prosperidad Social, la entidad del Gobierno Nacional que tiene como objetivo formular, dirigir y ejecutar las políticas, para la superación de la pobreza y la inclusión social. Por ejemplo, durante el 2016, la Oficina concentró sus labores en el departamento de La Guajira, aportando un análisis sobre el derecho al agua potable del pueblo indígena Wayúu y el derecho a la alimentación adecuada, en particular, de sus niños, niñas y adolescentes. Prosperidad Social se comprometió a conformar, con la asistencia de la Oficina, un mecanismo de monitoreo de las políticas y programas implementados en favor del Pueblo Wayúu, que se fundamenten en la definición y seguimiento de indicadores de derechos humanos adaptados a la realidad del departamento de la Guajira con la participación de los titulares de derechos.

El Objetivo 16<sup>5</sup>, por otro lado, cubre varias dimensiones de los derechos civiles y políticos, incluidos la seguridad personal, el acceso a la justicia y “las libertades fundamentales.” Ejemplos de trabajo que desarrolla OACNUDH en esta área son: la cooperación técnica con los Gobiernos para fortalecer las instituciones nacionales de los derechos humanos (INDH), la asistencia en el establecimiento de los mecanismos nacionales de prevención y protocolos para combatir la tortura, la capacitación de jueces y fiscales y la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para facilitar el acceso a la justicia para grupos vulnerables. Como la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la obligación de la rendición de cuentas y del Estado de derecho es una de las prioridades de ACNUD a nivel global, la mayoría de las metas bajo el Objetivo 16 han sido desde hace mucho tiempo una parte crítica de nuestro trabajo en la región.

La Agenda 2030 tiene como objetivo luchar contra la desigualdad y la discriminación y “no dejar a nadie atrás,” reflejando quizás la lista más extensa de grupos<sup>6</sup> que hayan sido considerados con un enfoque especial de todos los documentos internacionales de este tipo. En la región, OACNUDH tiene un largo historial de trabajo en este campo, inclusive los derechos de las mujeres y de las personas indígenas, la temática de género, la inclusión de niños y de las personas discapacitadas y los derechos de los migrantes. Nuestro trabajo es particularmente importante en las áreas donde los ODS son limitados por derecho nacional y donde existen brechas como los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación contra la población LGBTI y los

<sup>3</sup> “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.”

<sup>4</sup> Resolución A/RES/64/292 (28 de julio de 2010) reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento y resalta que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

<sup>5</sup> “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.”

<sup>6</sup> Véase, por ejemplo, A/RES/70/1 - Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, párrafo 23.



derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en 2016 la Oficina de OACNUDH en Guatemala, a través del Programa Maya<sup>7</sup>, brindó asistencia técnica tanto a los titulares de derechos indígenas como a los portadores de obligaciones en el Gobierno en la aplicación de relevantes estándares internacionales en relación a 11 casos. La Oficina también ha organizado seminarios sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas para los magistrados y los asistentes jurídicos de la Corte Suprema de Justicia y para el equipo de la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial. Mientras, en Argentina y Panamá, varias organizaciones de los derechos de las mujeres y grupos LGBTI fortalecieron sus capacidades en la documentación de casos y presentación ante los mecanismos de protección a través de seminarios organizados por nuestras Oficinas Regionales para América Central y para América del Sur.

Los ODS no se alcanzarán si el progreso no se monitorea de una manera completa y transparente. Como aproximadamente la mitad de las metas ya están monitoreadas por los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, OACNUDH está trabajando para estimular los flujos de información y crear un ciclo virtuoso entre el monitoreo de los derechos humanos y los ODS. A tal fin, la Oficina Regional para América del Sur desarrolló una Matriz de Análisis que vincula los 17 objetivos con sus metas e indicadores junto con las recomendaciones emanadas del Examen Periódico Universal, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados. La Matriz fue concebida desde sus inicios como una herramienta concreta a través de la cual la Oficina Regional puede poner a disposición del Sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y otros interesados, una guía para tomar decisiones legales, políticas, jurisdiccionales y administrativas que favorezca la realización plena de los derechos humanos y en ese marco apoyen la consecución de los objetivos. Mientras la propuesta de la matriz ya ha sido compartida con Coordinadores Residentes e INDHs, la Oficina se encuentra en proceso de adaptación de la matriz para hacerla más amigable y poder compartirla y difundirla a través de su página web. La Oficina Regional para América Central ha elaborado una matriz similar en Costa Rica en cooperación con la Oficina de la Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en el país.

La oficina de OACNUDH en México es una oficina pionera a nivel mundial en la elaboración de indicadores sobre cumplimiento de derechos humanos. Actualmente más de 80 instituciones tienen indicadores en temas tales como juicio justo y acceso a la justicia, la vida, la libertad, la seguridad, la tortura, la salud, la educación, la libertad de expresión, violencia contra las mujeres, el impacto de capacitación en derechos humanos, el impacto de los programas sociales, la impunidad y la implementación de recomendaciones de derechos humanos. Estos se deberían incorporar en el monitoreo de todos los ODS. Particularmente en el tema de indicadores sobre derecho a un juicio justo y acceso a la justicia, ya adoptados por todos los Tribunales Superiores de Justicia del país y prontamente por todas las fiscalías, y son especialmente relevantes para el seguimiento del ODS 16. Se está trabajando con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para su difusión como buena práctica para otros países de la región.

---

<sup>7</sup> El Programa Maya es un programa de litigación estratégica que inició en 2009 con el apoyo del Gobierno de Noruega para contribuir a los esfuerzos históricos de los pueblos indígenas en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. El programa responde a una realidad histórica de exclusión reflejada en bajos índices de desarrollo humano y altos índices de pobreza, así como la escasa representación en los organismos del Estado.

### **Los principales desafíos para el alcance de los ODS en la región**

Hasta hace poco y con algunas excepciones, América Latina y el Caribe había vivido un periodo prolongado de crecimiento económico significativo y había logrado avances importantes en los indicadores de pobreza. Sin embargo, la región sigue teniendo unos de los índices más altos del mundo, lo cual hace que el logro de los ODS sea una tarea urgente pero también exigente. La desigualdad estructural y la discriminación han dado lugar a la condición de pobreza, desprotección y desventaja de ciertos grupos vulnerables como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, indígenas y afro-descendientes, entre varios otros. Abordar estos retos que excluyen a demasiadas personas en la región del acceso a los medios para satisfacer sus derechos fundamentales constituye quizás el desafío más complejo en el camino hacia el logro de los ODS en la región.

El trabajo hacia el alcance de los ODS será una prueba difícil de la capacidad institucional de muchos gobiernos en la región. La coordinación entre las diversas entidades involucradas tanto a nivel nacional/federal como a nivel provincial/estatal y entre ambos niveles será una necesidad crítica. Los programas de desarrollo y derechos humanos a todos los niveles gubernamentales deben alinearse con la Agenda 2030, incluidos los que hayan sido adoptados anteriormente como es el caso, por ejemplo, en Guatemala y en México. En muchos países hay un conocimiento muy limitado de los ODS a nivel local, lo que lleva a la posibilidad de que esta alineación sea un proceso complicado.

Tanto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, como la falta de estadísticas fiables y desagregadas siguen siendo un reto importante. Se requiere ir más allá de los balances basados en promedios y la evaluación sobre cómo mejora la calidad de vida de cada uno de los integrantes de la sociedad, aún cuando representen grupos minoritarios que, en mediciones “clásicas” o aritméticas, son invisibles. Buenas estrategias y políticas para la implementación de la Agenda 2030 necesitan basarse en estadísticas fiables e indicadores robustos. Aunque en muchos países ha habido avances, aún falta muchísimo camino por andar en la elaboración de información estadística y en la disponibilidad de datos desagregados, como apoyo para la elaboración de cualquier política pública y su posterior evaluación.

La movilización de recursos financieros para la implementación de los 17 objetivos será un reto para la región. En muchos países este reto se verá agravado por una grave crisis económica cuyo resultado han sido varios recortes del gasto público en los últimos años y un incremento exponencial de la deuda pública. Los ejemplos incluyen los recortes en Argentina y la reciente aprobación de la Enmienda Constitucional (PEC 55) para congelar por 20 años los gastos públicos en Brasil. Medidas como estas afectan directamente a los programas sociales y políticas públicas que benefician a los sectores más vulnerables de la población, perjudicando a quienes más dependen del sistema público de salud, educación y vivienda. Cuando las crisis políticas y/o económicas se suman con el desafío persistente de la corrupción, el uso eficiente de los recursos se hace particularmente difícil.

La situación medioambiental en relación con las industrias extractivas que han sostenido gran parte de las economías de los países en la región, representa un desafío mayor. Es de esperar que el compromiso de los países y las empresas se vaya robusteciendo y la actividad económica pueda ir mutando hacia una mayor sustentabilidad ambiental, en armonía con los derechos humanos de las personas, como los campesinos, pescadores, los pueblos indígenas y otros titulares de derechos.

Finalmente es imperioso alinear los compromisos jurídicos asumidos por los Estados con las agendas consensuadas en los últimos años, además de los ODS es sumamente importante tomar en cuenta el Acuerdo de París sobre cambio climático, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Nueva Agenda Urbana que surgió de la conferencia Hábitat III. Todas estas agendas solo podrán tener impacto real en la vida de las personas si la base de su implementación se funda en los derechos humanos.



## **FORUM OF THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

The 2030 Agenda for Sustainable Development marks a paradigm shift towards a more balanced model for sustainable development aiming to secure freedom from fear and freedom from want for all, without discrimination. Strongly grounded on international human rights standards, it goes far beyond the Millennium Development Goals (MDGs) by not only encompassing issues related to economic, social and cultural rights, but also civil and political rights and the right to development. The principles of non-discrimination and equality are embodied in two self-standing Goals and many other targets and commitments. The central message of “leaving no one behind” offers important opportunities to close the gaps for the most marginalized people and those suffering discrimination. Critically, Member States have resolved to implement the Agenda “in a manner that is consistent with the obligations of states under international law”,<sup>1</sup> including human rights law. With its universal mandate and operational reach in the region,<sup>2</sup> the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is uniquely placed to lead the UN system’s efforts in this area.

### **OHCHR and the 2030 Agenda for Sustainable Development**

Although the Sustainable Development Goals (SDGs) themselves are not framed explicitly in the language of human rights, most targets reflect the content of corresponding human rights standards. Our work at all levels is thus inexorably linked with their achievement.

OHCHR has an important role in leading the UN system’s efforts to ensure that the 2030 Agenda is implemented in line with international human rights law. At country-level, this means engaging with Government agencies responsible for the implementation and monitoring of the SDGs, civil society and the UN System to integrate a human rights-based approach into the implementation of specific SDGs. OHCHR work in this area consists of three key streams: (1) capacity-building activities on human rights mainstreaming and the links between human rights and the 2030 Agenda; (2) organisation of events and production of information materials to raise awareness on human rights and the SDGs; and (3) ensuring that the UN System at the country and regional levels implements a human rights-based approach in development programming.

---

<sup>1</sup> A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para 18.

<sup>2</sup> In the Latin America and the Caribbean region, OHCHR has in-country presence in 10 countries (Country Offices in Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras and Mexico; a Human Rights Component in the United Nations Stabilization Mission in Haiti; Human Rights Advisors in the Dominican Republic, Jamaica and Paraguay; and a National Human Rights Officer in Barbados. It also has a Regional Office for South America in Santiago de Chile, covering Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Peru, Uruguay and Venezuela, and a Regional Office for Central America in Panama City, covering Belize, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua and Panama.

For instance, last year OHCHR's Regional Office for South America (ROSA) provided training on human rights, including the right to development, to 35 civil society organizations (CSOs) in Ecuador. To complement this initiative, it established a strategic alliance with the European Union Delegation in the country to ensure funding for the CSOs to monitor SDG implementation in the medium to long-term. To celebrate Human Rights Day the Human Rights Advisor in Paraguay, launched the "Human Rights: Leaving no one behind" photo contest, highlighting the direct links between the SDGs and human rights. Some 200 pictures were submitted and the Ministry of Education declared this initiative as being of educational interest.

Many of the SDGs relate closely to economic, social and cultural rights, including availability, accessibility, affordability and quality of education, food, health, water, sanitation and hygiene and other services related to those rights. Goal 6,<sup>3</sup> mirrored by the right to safe drinking water and sanitation,<sup>4</sup> is one of many examples. In Mexico, where the right to water has been enshrined in the national Constitution since 2011, the Office has advocated with Congress to pass secondary legislation allowing for the realization of this right. In Colombia, OHCHR has provided technical assistance to *Prosperidad Social*, the Government agency responsible for poverty reduction and social inclusion policies. In 2016, the Office focused on the department of La Guajira, providing analysis of the rights to safe drinking water and to adequate food of the Wayúu indigenous people. *Prosperidad Social* then committed to set up, with the assistance of the Office, a mechanism to monitor the policies and programs implemented for the Wayúu people. The programmes would be built on human rights indicators, adapted to the local context with the participation of the rights-holders.

Goal 16<sup>5</sup> covers many dimensions of civil and political rights, including personal security, access to justice, and fundamental freedoms. Examples of OHCHR's work in this area include: technical cooperation with Governments to strengthen National Human Rights Institutions (NHRIs); assistance in establishing National Preventive Mechanisms and protocols to combat torture; capacity-building for judges and prosecutors; and cooperation with civil society to facilitate access to justice for vulnerable groups. With "combatting impunity and strengthening accountability and the Rule of Law" being one of the priorities for OHCHR at the global level, many targets under Goal 16 have long been central for our work in the region.

The 2030 Agenda aims to combat inequalities and discrimination and "leave no one behind" and includes perhaps the most expansive list of groups to be given special focus in comparison with any other similar international document.<sup>6</sup> In the region, OHCHR has a long-standing record of working with many of these marginalized groups, including women, indigenous peoples, children, persons with disabilities or migrants. OHCHR's work is especially critical in the areas where the SDGs are expressly limited by national law and in gap areas, such as sexual and reproductive health and rights, discrimination based on sexual orientation or gender identity, and indigenous peoples' rights. For instance, in 2016 OHCHR-Guatemala, through its strategic litigation programme known as the Maya Programme, provided technical assistance based on international standards regarding indigenous peoples in relation to 11 cases. The Office also organized seminars on indigenous peoples' rights for magistrates and legal clerks of the Supreme Court of Justice and the Indigenous Affairs Unit of the Judiciary. In Argentina and Panama,

<sup>3</sup> "Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all."

<sup>4</sup> Resolution A/RES/64/292 (28 July, 2010) explicitly recognized the human right to water and sanitation and acknowledged that clean drinking water and sanitation are essential to the realisation of all human rights.

<sup>5</sup> "Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels."

<sup>6</sup> For instance, A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para. 23.

women and LGBTI rights groups have strengthened their capacities for the documenting and reporting cases of alleged human rights violations to national and international protection mechanisms, through a series of seminars and webinars organised by OHCHR's Regional Offices for Central and South America.

The SDGs will not be achieved if progress is not monitored fully and transparently. An important number of SDG targets are directly linked with issues monitored by UN human rights bodies, so OHCHR is working to stimulate information flows and create a virtuous cycle between human rights and SDG monitoring. To that end, ROSA has developed a Matrix of Analysis which links the SDGs with country-specific recommendations from the Universal Periodic Reviews (UPR), Special Procedures and Treaty Bodies. The Matrix aims to serve as a concrete tool for the UN System, Governments, civil society and other stakeholders to facilitate decision-making so as to ensure the full realisation of human rights and the achievement of the Goals. The proposal has been shared with UN Resident Coordinators and NHRIs and ROSA is working to make the tool more user-friendly and share it online. OHCHR's Regional Office for Central America has developed a similar matrix in Costa Rica with the cooperation of the Office of the UN Resident Coordinator for the country.

OHCHR-Mexico has a particularly strong record in the development of human rights indicators. Over 80 institutions are currently using them to monitor areas, such as access to justice, life, liberty, security, torture, health, education, freedom of expression, violence against women, impact of capacity-building, discrimination, impact of social programmes, impunity and implementation of human rights recommendations. These should be integrated into monitoring for all the SDGs. Indicators on access to justice, which have already been adopted by all Superior Courts of Justice and will soon be followed by all public prosecutors' offices, will be shared with other countries in the region as best practice, and are particularly relevant to monitor progress regarding SDG 16.

### **Key challenges for the achievement of the SDGs in the region**

Until recently and with a few exceptions, the Latin America and the Caribbean region had experienced a sustained period of significant economic growth and achieved progress in poverty reduction. Yet it remains one of the most unequal regions of the world, rendering the achievement of the SDGs for all its people both urgent and challenging. Structural inequality and discrimination have resulted in the poverty, lack of protection and disadvantages for minorities and vulnerable groups, including women, children, LGBTI communities, indigenous people, people of African descent, as well as those living in rural areas. Addressing these issues, which impede far too many of people in the region from fulfilling their fundamental rights, is possibly the most complex challenge the region faces.

Working to implement the 2030 Agenda will test the institutional capacity of many Governments of the region. Effective coordination of the numerous Governmental entities involved in this process between and within national/federal and state/provincial and municipal levels will be required. Development and human rights strategies adopted by Governments prior to the endorsement of Agenda 2030, as was the case in Guatemala and Mexico, will need to be streamlined with the SDGs. In many countries, lack of awareness and understanding of the Agenda and the Goals at the local level is likely to make this streamlining process difficult.

Weak or non-existing monitoring and evaluation of public policies, as well as the lack of reliable and disaggregated data and statistics, represent another major challenge. It is necessary to go beyond measuring progress through averages and to ensure that persons belonging to minority or vulnerable groups are no longer rendered invisible in the analysis. Sound strategies and policies to implement Agenda 2030 need to be devised and implemented on the basis of reliable baselines and robust indicators.

Even though there has been progress in many countries, the region has a long way to go to generate the quality and disaggregated data required for effective decision-making and evaluation.

Mobilizing and effectively using the required financial resources to achieve the 17 Goals is a challenge faced by most countries in the region. In many countries the implementation will be affected by particularly severe economic crises which have led to numerous cuts in public spending in the past few years and an exponentially increasing public debt. Examples include the significant cuts in public spending in Argentina and the recent decision to freeze social spending for 20 years in Brazil. Such measures will affect the most vulnerable people most harshly, and will certainly hinder the achievement of the SDGs. When economic and/or political crises are coupled with the persistent issue of widespread corruption, using resources efficiently becomes very difficult.

Addressing the environmental impact of extractive industries which in large part have sustained the economies of many countries in the region is another demanding task. A more robust commitment and accountability of both Governments and businesses towards environmentally sustainable economies, in harmony with the human rights of peasants, fishermen, indigenous communities and other rights-holders they affect, will be essential.

Finally, it is imperative to align the legal commitments of States with the agendas adopted over the past few years: the SDGs, the Paris Agreement on climate change, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and the New Urban Agenda which emerged from the Habitat III Conference. All these agendas will only have a real impact on the lives of people if their implementation is grounded in human rights.

ACNUR: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS /  
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)



**Violence and human mobility**

**March 2017**

**Background:**

Situations of armed conflict and violence are today's major causes of refugee movements and forced displacement globally and in the Americas Region. The majority of these situations engender political, religious, ethnic, social, or gender persecution. This reality connected to limitations in legal and policy frameworks have led to a significant increase of displacement in the last years. The UNHCR Global Population Trends Report shows that by the end of 2015<sup>1</sup>, **1 person of 113 in the world are refugees, internally displaced, returnees and/or stateless people**. In absolute numbers, they are **65 millions of people, of whom almost 9 million are in America**. The armed conflict in Colombia (7 million people), the violence in Honduras, Guatemala and El Salvador (over 550.000 persons) and statelessness and risk of statelessness in the Caribbean (over 100.000 people affected) are main factors that impact the fluidity and intensity of human mobility in the region<sup>2</sup>.

**The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and/or its 1967 Protocol (1951 Convention)**<sup>3</sup> is the universal instrument directly applicable to civilians displaced by situations of armed conflict and violence, and **the Cartagena Declaration is the regional protection instrument, adopted in 1984**<sup>4</sup> by a group of experts from several Central and South American countries. The following **Declaration and Brazil Plan of Action (2014)**<sup>5</sup>, addresses the different needs of this population, including access to documentation, safe dignified self-reliance and livelihoods opportunities, education, health and social protection amongst other.

However, many of this uprooted individuals face tremendous challenges to enjoy human rights and equal development opportunities. This narrow protection space limits their capacity to contribute to the society, perpetuating poverty and marginalization, and fostering further displacement and statelessness. Certain groups of population such as women, girls, boys, and individuals with diverse sex, sexual orientation and/or gender identity, people with disabilities, indigenous or Afro-descendent are disproportionately affected due to the intersections of displacement, social inequity and discrimination.

<sup>1</sup> <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html>.

<sup>2</sup> <http://reporting.unhcr.org/population>.

<sup>3</sup> <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf>.

<sup>4</sup> <http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html>.

<sup>5</sup> <http://www.acnur.org/cartagena30/en/brazil-declaration-and-plan-of-action/>.

**“Leaving them behind” will make impossible the achievement of Sustainable Human Development and the Agenda 2030<sup>6</sup>, which has been already highlighted in Global and Regional processes.**

- i. The New York Declaration for Refugees and Migrants adopted on September 19, 2016<sup>7</sup> expresses the political will of world leaders to protect the rights of refugees and migrants, to save lives and share responsibility for large movements on a global scale. The World Bank and UNHCR launched a new study at the Summit, presenting **displacement as a development challenge** – and not just a humanitarian emergency. Many other agencies are taking path-breaking steps to engage in new ways to support solutions for refugees. The UN agency for Refugees is supporting the development of a consultative Global Compact for Refugees /Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) to promote clear direction of a new way forward to respond more effectively to large movements of refugees and to find solutions for those forced to flee their homes because of conflict or persecution, addressing the intersections with other vulnerabilities. Given the fact that refugees and migrants often travel the same routes and face the same risks on their journeys, the recommendation to develop a Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration is seen as a very positive initiative.
- ii. Also in 2016, the XIII Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean<sup>8</sup> approved the Regional Gender Agenda within the Sustainable Development Framework 2030” (hereinafter “The Montevideo Strategy) recognizing the intersection between gender and displacement, and highlighting the additional risks to which women and girls are exposed while in displacement. The Strategy also points out the additional challenges for women and girls with diverse sexual orientation and gender identity, and the need to address their needs through strengthened coordination between different nations, development and humanitarian actors. The Declaration of Panama in February 2017 of the Ministers and High Authorities of the National Mechanisms for the Advancement of Women towards the 61st period of sessions of the Commission on the Status of Women (CSW61) also points out the linkages between migration, development and equality<sup>9</sup>.

In line with the global and regional developments, **sub-regional and national processes are taking place simultaneously to address the issue of violence and human mobility**, and ensure legal, policy and social achievements towards Sustainable Human Development.

- i. In the **context of the Colombian armed conflict**, at the close of four years of intense negotiations with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), a final peace agreement was signed on 24 November 2016 with the Government of Colombia and entered into force on 1 December. Furthermore, the peace negotiations were launched on 8 February 2017 in Ecuador with the National Liberation Army (ELN), the second largest *guerrilla* in the country. However, the situation in Colombia remains volatile with ongoing displacement and violence and in several parts of the country, increased violence by new armed actors is leading to humanitarian and protection risks, such as killings, forced recruitment, sexual and gender-based violence, and limited access to education, water and sanitation, as well as mobility restrictions. In addition mixed flows in the country contribute to further deterioration in Colombia and the neighbouring countries. The Inter-Agency Humanitarian Clusters

<sup>6</sup> <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>.

<sup>7</sup> <http://www.unhcr.org/57e4f6504.pdf>.

<sup>8</sup> <http://conferenciamujer.cepal.org/13/en>.

<sup>9</sup> <http://lac.unwomen.org/en/noticias-y-eventos/articulos/2017/02/declaracion-de-panama>.



continue to work together to address root causes and specific population needs. The UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia, September 2015<sup>10</sup>, set forth the legal arguments for the recognition of the refugee status to the individuals fleeing the conflict.

- ii. As for the **violence in the Honduras, El Salvador and Guatemala, (Northern Triangle of Central America)**, the number of people fleeing violence in El Salvador, Guatemala and Honduras has surged to levels not seen since armed conflicts wracked the region in the 1980s. Today they are fleeing violence and persecution at the hands of gangs and other criminal groups as well as acute poverty. A high-level roundtable on 6-7 July 2016 in San José, Costa Rica, was organized by OEA with the support of UNHCR and the participation of governments, UN agencies, academia and civil society to explore opportunities for a coordinated response to this growing need for international protection. The round table concluded with the San Jose Statement, that is the basis for a coordinated response to the complexity of human mobility and violence in this area. The Regional Conference for Migration continues to work towards the improvement of standards to prevent and respond to the challenges of mixed migration flows, throughout the territory of member states, including Costa Rica, Mexico, Canada, U.S., Panama, Belize and Nicaragua. In order to support such an efforts, among other operational interventions, UNHCR has issued four main *Eligibility guidelines on Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016<sup>11</sup>, on *Eligibility of Asylum Seekers from El Salvador (2015)*<sup>12</sup> and *Honduras (2016)*<sup>13</sup> and *Refugee Claims Relating to Victims of Organized Gangs 2010*.<sup>14</sup>
- iii. **In the Caribbean, displacement and statelessness** are important elements that lead to low path development. Humanitarian Aid Actors and Development actors continue to make efforts to reduce the risk of displacement and statelessness and increase equal access to development opportunities for all individuals, including those at most risk, such as children, women survivors of Sexual and Gender-Based Violence and people with diverse sexual orientation and gender identity. With this spirit, on 23 March 2017 the Parliament of Haiti voted formally to join the international drive to end the tragedy of statelessness and to ensure the millions of innocent people around the world with no nationality get the help they need. The decision by the Haitian Parliament will make Haiti the third member state of the Caribbean Community (CARICOM) and the 69th country to accede to the 1961 Convention

<sup>10</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia*, September 2015, HCR/EG/COL/15/1, available at: <http://www.refworld.org/docid/560011fc4.html>.

<sup>11</sup> UN High Commissioner for Refugees, *Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12, <http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html>.

<sup>12</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador*, 15 March 2016, HCR/EG/SLV/16/01, available at: <http://www.refworld.org/docid/56e706e94.html>.

<sup>13</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras*, 27 July 2016, HCR/EG/HND/16/03, available at: <http://www.refworld.org/docid/579767434.html>.

<sup>14</sup> <http://www.refworld.org/pdfid/4bb21fa02.pdf>.

on the Reduction of Statelessness. The 1961 Convention requires states to establish safeguards in their nationality laws to ensure no person is made stateless at birth or later in life. It notably provides that children must acquire the nationality of the country in which they are born if they would otherwise be stateless.

The Haitian Parliament also voted Wednesday to accede to the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons, the international pact that defined statelessness and seeks to ensure stateless persons can enjoy basic human rights such as the right to education, employment and housing. The vote in Haiti comes after the UN Refugee Agency in November 2014 launched its global Campaign to End Statelessness in 10 Years and, in consultation with national governments, international organizations and civil society developed a Global Action Plan to End Statelessness: 2014-2024<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> <http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html>.

**FAO: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN  
Y LA AGRICULTURA / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION  
OF THE UNITED NATIONS**

**Contribución FAO al documento “Annual Report on the Progress and Regional Challenges  
of the 2030 Agenda for Sustainable Development”**

**Los desafíos para el cumplimiento de los ODS en el marco de trabajo de FAO**

***Principales retos en dimensiones económicas, sociales y ambientales:***

América Latina y el Caribe ha logrado importantes conquistas en la lucha contra el hambre y la pobreza. Gracias a innovadoras políticas públicas y compromiso político, fue la única región en desarrollo en cumplir las metas de reducción del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre Mundial de la Alimentación, reduciendo a menos de la mitad su número total y prevalencia de la subalimentación desde los niveles de 1990. Todas las estrategias, políticas y articulaciones puestas en marcha en este periodo son un verdadero patrimonio de la región y que deben ser bases para seguir enfrentando todas las formas del hambre y la malnutrición para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculando más fuertemente la seguridad alimentaria con sostenibilidad productiva, nutrición, salud, igualdad de género e inclusión social. Los sistemas productivos sostenibles (agricultura, forestal, pecuaria, pesca) son indispensables para lograr los ODS, buscando mecanismos que interrelacionen políticas públicas sociales, económicas y productivas, cooperación e inversión que faciliten esta transformación.

Según FAO un sistema alimentario sostenible e inclusivo es aquel que provee de alimentación nutritiva y accesible para todos, y en el que la gestión de los recursos naturales preserve los ecosistemas de forma tal de respaldar la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras. La sostenibilidad de los sistemas alimentarios significa no solo la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, sino que también la entrega de los productos y servicios alimentarios, económicos, ambientales y nutricionales que su accionar implica; es decir, todo aquello que permite que se extienda en el tiempo su rol en la seguridad alimentaria y nutricional, la generación de ingresos, la preservación de la diversidad cultural y de los ecosistemas, entre otras interacciones que mantienen los sistemas humano natural.

Se ha identificado que uno de los factores claves de la desigualdad es que se da un sistema alimentario que ha agotado la capacidad de asegurar una alimentación en términos de producción, alimentación sana y saludable que además pone en riesgo a las generaciones futuras. De esta manera, las estructuras sociales, económicas y culturales desiguales de nuestro continente se traducen en sistemas alimentarios incapaces de alimentar saludablemente a todas las personas, ofrecer medios de vida sostenibles a las familias que viven de la agricultura (en sentido amplio), y a garantizar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y protección de biodiversidad.

Para alcanzar el ODS2 de seguridad alimentaria, se deben establecer medidas políticas, sociales, ambientales y económicas para atender al 5,5 % de la población regional que se encuentra en estado de hambre, además de la desnutrición crónica y el sobrepeso, que sufren actualmente el 11,3 % y el 7,2 % de los menores de 5 años, respectivamente.

Una de las causas subyacentes del hambre y la malnutrición en todas sus formas son los patrones alimentarios inadecuados que existen a lo largo de América Latina y el Caribe, por lo que fomentar la alimentación saludable es un factor clave para disminuir de forma simultánea el hambre, la desnutrición,

el sobrepeso y la obesidad. Los sistemas tradicionales de producción y la agrobiodiversidad son claves para mejorar las opciones de alimentos saludables a la población. Es importante resaltar que la obesidad afecta desproporcionadamente a las mujeres: en más de 20 países la diferencia entre la tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayores que la de los hombres. La adopción de patrones alimentarios saludables no sólo significa promover cambios en el consumo; requiere reorientar las políticas públicas para crear sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición, que lleven en consideración la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y que puedan proveer una adecuada oferta de alimentos saludables.

En cuanto a producción de alimentos es importante resaltar que la mayor parte de los habitantes rurales tiene en la agricultura su principal medio de vida, trabajando generalmente a pequeña escala y con base en la mano de obra familiar, campesina e indígena. La marginación de las comunidades indígenas, la pobreza rural y el abandono del campo, la inequidad de género, la precariedad del trabajo rural, la desigualdad en la distribución del ingreso, entre otros aspectos de la desigualdad, tienen impacto en el sistema alimentario actual, y viceversa.

La agricultura familiar es un sector clave para garantizar la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en nuestra región, no obstante enfrenta limitaciones importantes que afectan su fortalecimiento: acceso y buena gobernanza de la tenencia de los recursos naturales (tierra, agua, bosques, otros) y carencia de políticas públicas específicas (financiamiento, seguros, extensión rural, acceso mercado, otras).

Según datos de 2012 publicados pro FAO y BID la agricultura familiar agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas en ALC; provee, a nivel país, entre 27% y 67% del total de la producción alimentaria; ocupa entre el 12% y el 67% de la superficie agropecuaria, y genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la Región. Estos datos permiten identificar a este sector clave como potencial productivo, dinamizador de los territorios y economías rurales, productores de diversidad de alimentos, que son clave para el desarrollo sostenible y la reducción de la desigualdad. Se debe trabajar en mejorar las capacidades gubernamentales para diseñar políticas, programas y marcos legales que fortalezcan la agricultura familiar, creando sistemas alimentarios inclusivos que promuevan el desarrollo rural.

Para mejorar las condiciones sociales y el alivio a la pobreza es necesario establecer mejores vínculos entre la agricultura familiar y los mercados agroalimentarios y el fortalecimiento de sistemas de protección social alineados con políticas de desarrollo agrícola y de empleo, fomentando iniciativas que potencien el desarrollo de mujeres, jóvenes, afrodescendientes y pueblos indígenas.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas del mundo en términos de recursos naturales y biodiversidad. Con sólo el 8 % de la población global, posee el 23 % de las tierras potencialmente cultivables, recibe el 29% de las precipitaciones del planeta y posee siete de los veinticinco lugares del mundo con las más altas concentraciones de especies endémicas.

El cambio climático a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, ya afecta a la agricultura en diversas formas, y casi todas son un riesgo para la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables del mundo. La variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras condiciones del clima es el principal factor que explica la variabilidad de la producción agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores principales de la falta de seguridad alimentaria. De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático 2017, tres de los cinco países más afectados por eventos climáticos extremos a nivel global en el periodo 1996-2015 pertenecen a la región: Honduras, Haití y Nicaragua.

### ***Lograr producción sostenible de alimentos***

La Agenda 2030 plantea grandes desafíos para el sector agrícola, donde serán necesarios nuevos enfoques para abordar su papel en la seguridad alimentaria y nutricional.

Se calcula que la producción agrícola tendrá que aumentar entre un 60 y un 100% en los países en desarrollo al 2050 para poder alimentar a toda la población. Si bien es cierto que en el pasado el sector agropecuario incrementó sus niveles de productividad gracias a mejoras tecnológicas que permitieron grandes avances, la trayectoria actual del crecimiento agrícola es insostenible y ya se observan graves consecuencias en los ecosistemas. Si a ello sumamos los graves efectos que el cambio climático puede tener en la producción alimentaria, y los riesgos que conllevan fenómenos naturales como las sequías o las inundaciones para la disponibilidad alimentaria, se presenta un escenario en el cual la sostenibilidad de la oferta alimentaria y su diversidad futura se encuentran bajo amenaza.

Además, no solo existen amenazas futuras para los sistemas alimentarios, relativas a incrementos en el volumen, diversidad y calidad de la oferta de alimentos, sino también problemas inmediatos relativos a las actuales formas de producción, si se toma en cuenta que actualmente a nivel mundial se pierden y desperdician 1300 millones de alimentos.

Existe, entonces, la necesidad generar un cambio en los modelos de producción de alimentos actuales, para que sean eficientes tanto desde el punto de vista social como desde el ambiental y hacer una transición hacia una producción en los ámbitos agrícolas, forestal, pecuaria, pesca y acuicultura plenamente sostenible si quiere erradicar el hambre y preservar los recursos naturales y la biodiversidad que sostiene su seguridad alimentaria. Esta debe ser una producción que conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales, animales y océanos, no degrada el ambiente y es técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable.

La seguridad alimentaria vinculada a la producción sostenible debe incidir en el fortalecimiento de las instituciones y políticas de uso sostenible de los recursos naturales, protección de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Se debe dar asistencia técnica para la evitar la degradación de los recursos naturales necesarios para la producción de alimentos y sistemas de producción más resilientes asociados al cambio climático.

Para lograr esta transformación, se requiere poner en el centro el derecho a la alimentación y el desarrollo rural sostenible, buscando modos de producción más eficientes, integrando la agricultura familiar como sector estratégico para la seguridad alimentaria, a la mujer rural y a los pueblos indígenas, generando sistemas de gobernanza inclusiva en el sistema alimentario, considerando la resiliencia de las comunidades y acompañados de políticas sociales, económicas ambientales sustentadas en marcos institucionales y jurídicos y recursos financieros, humanos y tecnológicos acordes.

### ***Que los sistemas alimentarios sean sostenibles y sensibles a la nutrición***

Para garantizar el acceso a alimentos nutricionalmente adecuados, más accesibles para los consumidores y con menores externalidades que puedan afectar a los distintos recursos naturales, el aumento de la productividad de los distintos rubros agropecuarios también debe considerar los efectos nutricionales, sociales y ambientales de la alimentación.

La sostenibilidad de los sistemas alimentarios significa entonces, no solo la conservación de los recursos naturales, sino que también la entrega de los productos y servicios alimentarios, económicos, ambientales y nutricionales que su accionar implica. Así los sistemas alimentarios debieran cumplir dos requisitos para sustentar el proceso de erradicación del hambre y la malnutrición, y lograr así el ODS 2: aumentar su sostenibilidad e integrar al mismo tiempo criterios nutricionales en su desarrollo, es decir producir sosteniblemente alimentos saludables que permitan no solo erradicar el hambre sino también otras formas de malnutrición, como el sobrepeso, la obesidad, la deficiencia de micronutrientes, etc.

### ***Promover la alimentación saludable***

Para lograr la alimentación saludable se hace necesario también la definición de dietas saludables y la generación de cambios en los patrones de consumo actuales, hacia patrones más variados y saludables, tratando de recuperar las preparaciones tradicionales y contrarrestar así el consumo excesivo de productos ultraprocesados. Sabiendo que una alimentación saludable contribuye a reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles, y promueve la buena salud y el bienestar, lo que la convierte en una de las claves para reducir la malnutrición.

Si bien es cierto que la definición precisa de una dieta saludable es un tema aun en debate, y su elaboración dependerá de las características sociales y culturales de cada comunidad, existe el consenso de que debe contener una combinación balanceada de macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas; y micronutrientes esenciales, como vitaminas y minerales.

Sin embargo, el actual patrón alimentario cuenta con una gran proporción de productos ultraprocesados que conlleva varios problemas para la salud humana, así como importantes riesgos sociales y ambientales. Además, el abastecimiento doméstico aún presenta una diversidad y una calidad limitadas, especialmente en lo referente a las dietas de los sectores más vulnerables, lo que ha tenido efectos negativos en los patrones de consumo de la población.

Entonces para el cumplimiento de los ODS es necesario también contar con dietas alimentarias saludables para mejorar los patrones de consumo actuales, que permitan enfrentar todas las complejidades que significa la erradicación del hambre y la malnutrición de manera conjunta.

### ***Mantener el compromiso político en los países de la región para el logro los ODS, adaptándose a los nuevos desafíos impuestos por la nueva Agenda***

América Latina y el Caribe fue la única región del mundo que logró las metas relacionadas con el hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las ambiciosas metas de la Cumbre Mundial de Alimentación (CMA), todo ello a través de la aplicación de políticas públicas de impacto a través del enfoque “Doble Vía” que permitieron lograr en conjunto que la subalimentación se ubicará en un 5.5%.

Este importante patrimonio regional favoreció la consolidación del compromiso político a favor de la erradicación del hambre, reflejados en la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, la aprobación del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), también el Plan de Acción Regional para Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), el Plan Hugo Chávez Frías para la Erradicación del Hambre en países Petrocaribe, entre otros programas o iniciativas que se perfilan como espacios para la coordinación de políticas, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la Cooperación Sur-Sur.

Todas estas iniciativas comparten además de su objetivo, un aspecto medular presente en cada una de ellas, y es que se basan en las políticas públicas que los países han venido implementado y que aportan a la garantía del Derecho Humano a la Alimentación. Ejemplo de ello son las políticas de Alimentación Escolar, ampliamente aplicadas en la región, los programas de transferencia condicionadas, que aportan al acceso a los alimentos, la Agricultura Familiar, cuyo impacto ha sido comprobado en términos de disponibilidad; de esta manera también se cuentan con temas emergentes como Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, estrategias para la gestión de riesgos y desastres, especialmente en países de vulnerabilidad climática, programas de Abastecimiento de alimentos, entre otros.

Con las lecciones aprendidas y el compromiso político existente, los países ahora tienen el desafío de adaptar sus políticas públicas de acuerdo a las nuevas exigencias de la Agenda 2030.

### ***Dar cumplimiento en su totalidad a una agenda ambiciosa y multidimensional***

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan avanzar aún más en hacer frente a desafíos y retos que dejaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reconocen que las soluciones deben ser acordadas y que todos los países deben actuar para poder alcanzar en los próximos 15 años los 17 objetivos de los ODS; garantizando que ninguna persona quede en el camino.

Así los ODS son más ambiciosos y abarcan de manera más profunda una mayor variedad de ámbitos, por ejemplo propone la erradicación absoluta del hambre y la malnutrición. Además, temas como el cambio climático, desigualdad, patrones de consumo ineficientes y generación y acceso a energía están presentes de forma importante en esta agenda.

La existencia de metas multidimensionales y complejas requiere de más de un indicador para llevar a cabo el monitoreo, los indicadores deberán desagregarse para monitorear desigualdades y minorías.

### ***En cuanto al trabajo inter-agencial: coordinar el trabajo con las agencias y lograr que sea de ayuda para los países.***

El carácter multisectorial de los ODS, exige un trabajo conjunto con las demás agencias de las Naciones Unidas.

Los países muchas veces no cuentan con la capacidad estadística para el monitoreo de los ODS. Por lo tanto, las Agencias pueden asistir a los países a desarrollar dicha capacidad, tanto en aspectos técnicos como institucionales. Pueden brindar asistencia técnica para asistir en la identificación de indicadores de ODS regionales y nacionales; y ayuda para armonizar las metodologías entre los países para poder generar los indicadores.

En este sentido es de gran relevancia mejorar la organización, articulación, coordinación y complementariedad entre las distintas agencias e instituciones para articular la cooperación entre países y poder prestar asistencia a los países. El desafío consiste en lograr que el trabajo conjunto de FAO con las demás agencias permita brindar de forma eficiente el apoyo y la asistencia que los países necesitan para el logro de los ODS.

## Temática 1 “Measuring Progress”

- **En cuanto al seguimiento y la medición: *dar el apoyo necesario para lograr la medición de los indicadores y los niveles de desagregación exigidos.***

Los ODS plantean importantes desafíos en materia de seguimiento y medición. En particular, exigen realizar la desagregación de datos por ingreso, género, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, discapacidad y ubicación geográfica. Ello implica superar una serie de limitaciones metodológicas y referidas a la disponibilidad de información.

La FAO ha sido designada como agencia custodiadora de 21 indicadores SDG, y co- custodiadora de 6 indicadores mas Estos indicadores se refieren a los objetivos de las Metas 2, 5, 6, 12, 14 y 15 y comprenden indicadores tanto nuevos como establecidos en ámbitos en los que la FAO dispone de una experiencia única. De estos 21 indicadores, 4 se clasifican provisionalmente como Tier I, 6 como Tier II y 11 como Tier III. Para seis indicadores adicionales, la FAO ha sido identificada como una agencia contribuyente.

Según la clasificación actual, el 60% de los indicadores se encuentran en el nivel I o II. Particularmente, la FAO es la agencia custodia de 21 indicadores de 6 ODS (2, 5, 6, 12, 14 y 15) de los cuales solo 6 fueron clasificados como Nivel I (indicadores con metodología y gran cantidad de datos disponibles), 4 como nivel II (indicadores con metodología, pero sin datos suficientes) y 10 como nivel III (indicadores cuya metodología aún no existe y se está elaborando).

Los recursos humanos con los que se cuenta para trabajar en estadísticas en los servicios de estadísticas nacionales son limitados y no se cuenta con los suficientes para realizar el seguimiento y monitoreo de las metas, indicadores. Además surge la necesidad de buscar metodologías de levantamiento de datos más eficientes.

Por lo tanto, los países tendrán que avanzar en el establecimiento de mecanismos que se adecuen a las particularidades para el cumplimiento de los ODS. Lo anterior se traduce en la adopción de una visión integrada y multisectorial, que responda de forma adecuada a los compromisos asumidos a nivel internacional. Para ello, se necesitará de una profundización del carácter amplio de la gobernanza propuesta por la Agenda 2030: la inclusión de nuevos actores, tanto desde el punto de vista de su naturaleza (actores públicos, privados, academia y sociedad civil) y su pertenencia sectorial (agricultura, alimentación, salud, nutrición, educación, desarrollo social, economía, etc.); como su integración efectiva, con espacios adecuados para que esta interacción se consolide.

En el ámbito nacional, FAO provee asistencia técnica a los países en adoptar nuevos estándares, métodos y herramientas que permita coleccionar datos, así como identificar fuentes de información para identificar y medir los indicadores según las realidades nacionales. Adicionalment FAO ofrece a los países asistencia técnica y recomendaciones en la elaboración de métodos de evoluciones para los indicadores custodiados y co-custodiados bajo la responsabilidad de esta institución.

- La FAO facilita el desarrollo de la capacidad estadística nacional tanto en aspectos técnicos como institucionales relacionados con el monitoreo de ODS, organizando y proporcionando;
- Programas de capacitación impartidos en una serie de modalidades complementarias (cursos de e-learning, talleres y seminarios de capacitación regionales y nacionales) para poner en práctica las directrices y manuales elaborados por las dependencias estadísticas de la Sede y en la región;



- Asistencia técnica para el desarrollo / mejora de las encuestas existentes o nuevas fuentes de datos para la recopilación y difusión de estadísticas alimentarias y agrícolas;
- Asistencia técnica para ayudar a identificar indicadores nacionales o regionales de los ODS;
- Espacios para el diálogo y la formulación de políticas en torno a la importancia del trabajo estadístico que justifique la presentación de informes sobre los indicadores en la custodia de la FAO. Esto también implica un trabajo cercano con los países para guiarlos en la identificación de sus capacidades estadísticas para el monitoreo de

La principal contraparte de estas actividades de fortalecimiento son las oficinas nacionales de estadística, cuyo papel de coordinador del sistema nacional debe fortalecerse. Los principales beneficiarios serán también los departamentos de estadística de los ministerios competentes (incluidos el Ministerio de Agricultura, Silvicultura, Pesca, Medio Ambiente, Planificación y Salud). El establecimiento de una plataforma común de datos a nivel de país que difunda todos los indicadores pertinentes a los SDG producidos por los distintos organismos nacionales de estadística sería la herramienta ideal para mejorar la coordinación y reducir la carga de presentación de informes.

Una de las principales responsabilidades de la FAO como agencia custodia, es el trabajo de desarrollo metodológico para perfeccionar los indicadores de Nivel I y II, desarrollar métodos acordados y revisados por pares para la compilación de los indicadores de Nivel III y proporcionar documentación detallada y estandarizada sobre todos los indicadores ODS pertinentes. FAO está elaborando directrices y materiales de capacitación para cada indicador a fin de ayudar a los países a incorporar los indicadores en su programa estadístico nacional ya recopilar y compilar datos de alta calidad sobre una base regular.

Se creará una nueva página web en la que se resumirán todos los indicadores de los ODS custodiados por FAO, facilitando procesos de forma que los cuadros de información se actualicen cada año con nuevos datos disponibles. La FAO está rediseñando sus principales publicaciones. El estado mundial de la alimentación y la agricultura (SOFA), El estado de los bosques del mundo (SOFO), El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA), El estado de los mercados de productos agrícolas (SOCO) ampliarán su ámbito de aplicación a fin de incluir una historia y anexos estadísticos sobre los indicadores pertinentes del SDG bajo custodia de la FAO.

Para apoyar el seguimiento de los indicadores, la FAO subraya la necesidad de establecer asociaciones con otros organismos de las Naciones Unidas. Al formular propuestas de indicadores, la FAO coordinó con diversos organismos varios indicadores los indicadores asociados al ODS (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), Programa Mundial de Alimentos (PMA)). Además con ONU-Mujeres sobre el acceso de las mujeres a la tierra; con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación sobre la degradación de las tierras; con el Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos; con UN-Water sobre la eficiencia y sostenibilidad en el uso/acceso al agua; y con ONU-Océanos sobre la aplicación del derecho internacional del mar. La FAO también contribuirá en los procesos de revisión y seguimiento de los informes anuales que se presentan al High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF).

**OCHA: OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS /  
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS**

**Key messages: Linking the SDGs and the A4H**

**The A4H: an enabler of SDG implementation in crisis contexts crisis**

- The 2030 Agenda is universal. It aims to change the lives of everyone everywhere, including more than 130 million people affected by crises worldwide.
- The 2030's agenda commits to "reach those furthest behind first". This includes those most vulnerable groups whose needs have been traditionally met through humanitarian appeals. If they were a country, it would be the World's 10<sup>th</sup> most populous.
- The 2030 Agenda outline several zero-based goals, which mean that they will only be achieved if they lead to a reduction of extreme poverty or hunger to zero, for everyone, everywhere, including those affected by crises.
- The 2030 Agenda explicitly refers to refugees, internally displaced persons and those affected by complex humanitarian emergencies as vulnerable groups which are covered under the new development agenda.
- The imperative of '**leaving no one behind**' requires that the most vulnerable, including those affected by crisis and forced displacement, are moved onto the path of development progress.
- There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development. **Preventing and addressing the root causes of fragility** and conflict will ensure that the 2030 Agenda for Sustainable Development leaves no one behind in fragile and conflict-affected settings.
- The **Agenda for Humanity** and its 24 transformations target those left furthest behind by humanitarian emergencies.

**The Link**

- We cannot **end poverty** in all its forms **everywhere** (SDG 1), if 130 million people are denied basic services like food, shelter and protection, because they have been affected by a humanitarian crisis (Core responsibility 3).
- We cannot achieve **zero hunger** (SDG 2), if millions of people are plagued by famine because we cannot ensure unhindered delivery of humanitarian and medical assistance (Transformation 2A).

- We cannot fight cholera effectively (SDG3.3) without also advancing SDG 6 on water and sanitation given that more than 660 million people do not use improved sources of drinking water. Contaminated water is usually how cholera is transmitted.
- We cannot ensure **inclusive and equitable quality education** and promote lifelong learning opportunities **for all** (SDG 4), if 75 million school-aged children and youth are denied education in protracted crisis (Transformation 3E).
- We cannot **achieve gender equality and empower all women and girls** (SDG 5), if 1 in 5 female refugees and IDPs in countries affected by conflict are victims of sexual violence and gender-based violence in conflict (Transformation 3D).
- We cannot **achieve decent work for all** (SDG 8), if 75 million school-aged children and youth are denied education in protracted crisis (Transformation 3E).
- We cannot **promote peaceful and inclusive societies** for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels (SDG 16), if we are not inclusive in decision making, involving all women, men and young people (Transformation1D).



## WORLD HUMANITARIAN SUMMIT

### **Transcending humanitarian-development divides Changing People's Lives: From Delivering Aid to Ending Need**

#### ◇ COMMITMENT TO ACTION ◇

1. We commit to implementing a “new way of working” that meets people’s immediate humanitarian needs while at the same time reducing risk and vulnerability as proposed in the SG’s report “One Humanity: Shared Responsibility” (paragraphs 124-142) and its Agenda for Humanity, as a joint commitment towards core commitment 1 at the High-Level Leaders’ Roundtable at the World Humanitarian Summit on “Changing Peoples’ Lives: From Delivering Aid to Ending Need.”
2. The 2030 Agenda’s commitment to leaving no-one behind, reaching the furthest behind first and its specific references to people affected by humanitarian emergencies, creates a common results framework under which both humanitarian and development actors can work together to ensure the safety, dignity and ability to thrive of the most vulnerable. The 2030 Agenda places risk and vulnerability at its core. Managing crisis risks and reducing vulnerability is as much a humanitarian imperative to save lives more effectively as it is a development necessity to ensure progress towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) for the more than 125 million people affected by humanitarian crises today. This is timely, given that the growing trend of repeated and protracted crises is likely to continue.
3. The Secretary-General’s report “One Humanity: Shared Responsibility” recognizes the historic opportunity of the adoption of the 2030 Agenda and the convening of the World Humanitarian Summit and elaborates a new way of working, in support of national and local efforts, and with a diverse set of actors defined by:
  - Working to collective outcomes across the UN system and the broader humanitarian and development community, including Multilateral Development Banks;
  - Working over multi-year timeframes, recognizing the reality of protracted crises and aiming to contribute to longer-term development gains, in the logic of the SDGs;
  - Working collaboratively based on comparative advantage of diverse actors (as relevant to the context).
4. There will always be situations where humanitarian responses will be necessary to save lives with the utmost sense of urgency and based on rapid and unimpeded access and the humanitarian principles. In politically contested and violent conditions of armed conflict, nothing should undermine the commitment to principled humanitarian action. However better joined up humanitarian-development planning and programming processes will deliver better outcomes for people by moving beyond meeting their needs in the short term to reducing them over time.

5. The new way of working is not about shifting funding from development to humanitarian programmes or from humanitarian to development actors —rather, it is about:
  - Using resources and capabilities better, improving SDG outcomes for people in situations of risk, vulnerability and crisis and shrinking humanitarian needs over the long-term; and
  - Galvanising new partnerships and collaboration —such as through the private sector, local actors or Multilateral Development Banks— that provide additional capabilities and resources in support of achieving collective and measurable outcomes for people and communities.
6. In order to deliver on this new way of working, we will operationalize the Secretary-General’s call, including by:
  - Conceptually, developing a shared understanding of sustainability, vulnerability, and resilience;
  - Operationally, implementing key changes after the WHS, where contexts enable the putting in place of: (i) Pooled and combined data, analysis and information; (ii) Better joined up planning and programming processes; (iii) Effective leadership for collective outcomes; and (iv) Financing modalities to support collective outcomes.
7. The WHS is the beginning of the shift towards this new approach. We recognize the need to move quickly after the Summit to elaborate the necessary steps and start applying this new way of working in the field. We commit to jointly move forward and agree at the WHS on specific follow-up actions regarding analysis, planning/programming, leadership and financing, so that the commitment to “change peoples’ lives” becomes a reality.

**Signed on 23 May 2016 at the World Humanitarian Summit in Istanbul by\*:**

**Ban Ki-Moon**, Secretary-General of the United Nations

**Margaret Chan**, Director-General, World Health Organization

**Helen Clark**, Administrator, United Nations Development Programme

**Ertharin Cousin**, Executive Director, World Food Programme

**Filippo Grandi**, United Nations High Commissioner for Refugees

**Jose Graziano da Silva**, Director-General, Food and Agriculture Organization

**Anthony Lake**, Executive Director, United Nations Children’s Fund

**Babatunde Osotimehin**, Executive Director, United Nations Population Fund

**Stephen O’Brien**, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator

\*and endorsed by the World Bank and the International Organization for Migration.

**OIM: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES /  
IOM: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION**

**Contribución de la OIM para el Informe regional de la CEPAL sobre la implementación de los ODS**

La OIM como Agencia conexas de Naciones Unidas para la Migración está siguiendo y monitoreando las metas específicas asociadas a la migración de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). En este proceso se utilizan herramientas como el “Marco de la Gobernanza de la Migración” (MIGOF) aprobado por el Consejo de la OIM en 2015 y el “Índice de la Gobernanza Migratoria” (MGI), desarrollado por la OIM en asociación con The Economist Intelligence Unit.

Los desafíos de medir el progreso hacia el cumplimiento de los ODS en materia de migración tienen múltiples dimensiones, tanto cualitativas como cuantitativas: garantizar que haya un marco de políticas que conduzca a una migración segura, ordenada y regular, verificar que las medidas y metodologías existentes sean adecuadas; generar nuevas fuentes de datos desagregados por estatus migratorio, sexo, edad y toda característica pertinente para los contextos nacionales.

**Iniciativas específicas de la OIM en la región LAC**

- Fortalecimiento de **las capacidades nacionales y regionales en la recopilación, análisis y diseminación de los datos migratorios**. Hay debilidades en la recolección de datos sobre los derechos de los migrantes y su desagregación según el estatus migratorio, lo que oculta exclusión y desigualdades, y complica la medición de los avances para dismantelar las condiciones estructurales de dicha discriminación.
  - En Argentina la OIM se encuentra trabajando desde 2016 con el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales para garantizar que la variable migratoria esté representada en las metas priorizadas por Argentina, tanto como eje transversal como en los ODS específicos.
  - En la República Dominicana la OIM trabaja con el gobierno en la alineación de la Estrategia de Desarrollo y los ODS, para la determinación de objetivos, metas e indicadores nacionales.
  - En Colombia, la OIM es una de las agencias que apoyan al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la implementación de mecanismo de seguimiento y revisión a nivel nacional, compuesto por indicadores globales, nacionales y regionales, que permitan identificar los avances, así como los vacíos de información en el cumplimiento de los ODS. La OIM desarrollará un proyecto que involucra la gestión y resultados de los gobiernos locales según los objetivos específicos y metas que se relacionan con la migración, los migrantes y las ciudades incluyentes y sostenibles.
- Promover la **transversalización de migración en el desarrollo** para reflejar la necesidad de colaboración entre varias áreas de la política pública sobre este tema complejo y multidimensional. El cumplimiento de varios de los ODS depende de la concientización sobre los vínculos mutuos entre migración y varios sectores temáticos de desarrollo, atención a varios aspectos de vulnerabilidad de los migrantes y sus familias, y el desarrollo de políticas integradas y eficientes.

- En Jamaica, la OIM junto con el PNUD implementa un componente de la iniciativa global sobre la transversalización de la migración en el desarrollo, colaborando con un grupo de trabajo inter-agencial responsable de la coordinación y vinculación de los temas migratorios con todos aspectos relevantes de la política pública.
- En Costa Rica, la OIM coordinó un componente nacional de la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo, una iniciativa interagencial de las Naciones Unidas para fortalecer las capacidades de los actores locales en el tema de transversalización de la migración en el desarrollo.

### **Indicadores ligados a los ODS y migración**

Ejemplos de migración en los ODS como un tema transversal (favor ver el anexo para información completa).

- Meta 1.5: busca fomentar la resiliencia de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y reducir su vulnerabilidad ante factores como el clima, desastres ambientales, económicos y sociales. El mismo, podría tomar en cuenta en su indicador las estrategias del gobierno en caso de desplazamiento forzado de poblaciones en riesgo, la atención de migrantes en situaciones en crisis y la necesidad de las poblaciones migrantes en todas las situaciones migratorias posibles, para acceder a ayuda en caso de alguna emergencia.
- Meta 3.8: Busca una cobertura sanitaria universal incluyendo la gestión de riesgos financieros, servicios de salud y medicamentos. El indicador podría incluir una no-discriminación en el acceso a los servicios de salud de parte de poblaciones migrantes sin importar su estatus migratorio. Además de verificar la accesibilidad para que las poblaciones migrantes sin importar su estatus migratorio puedan acceder a servicios de salud.
- 3.c Aumento a la financiación de la salud, y la capacitación y retención del personal sanitario. Podría considerarse entre los indicadores, la cantidad de países que reconocen el Código de Práctica Global de la OMS. Adicionalmente se debe medir el incremento de la capacitación de la fuerza laboral en temas de salud relacionado con la migración, así como la disponibilidad de programas y mecanismos de apoyo para la transferencia de conocimiento entre profesionales de diferentes países y la cantidad de médicos avanzados externos que transfieren conocimiento a profesionales médicos locales.
- Meta 5.2: Eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas explotadas en los ámbitos públicos y privados incluyendo la trata. Podría analizarse la presencia o no de políticas nacionales en curso para el combate de la trata. Adicionalmente a los indicadores propuestos se les puede sumar la consideración de la situación migratoria de las personas en curso, así como su origen y destino, y la cantidad de personas sujetas a la trata de personas por cada 100 mil habitantes, así como el análisis de la trata aplicada a personas de todos los rangos de edades no incluidos en el indicador original.
- El objetivo 8 nos presenta la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y en las metas 8.7 y 8.8 nos indica que se deben de adoptar medidas inmediatas para erradicar el trabajo forzado y poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, de la misma manera que busca proteger los derechos de los trabajadores sin hacer distinción por su condición migratoria. Se sugiere en este indicador agregar si hay presencia a nivel nacional de una estrategia

del organismo dedicado al combate de la trata de personas, si se publica con cierta regularidad los esfuerzos gubernamentales para el combate a la trata de personas, si hay regulaciones a la industria de reclutamiento internacional con base en estándares internacionales.

- Meta 8.8: Busca proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro para todos, y considera a los trabajadores migrantes y en especial a las mujeres trabajadores migrantes. Un indicador que se podría incluir es la paridad de los salarios entre los trabajadores locales y los trabajadores migrantes, así como su acceso a los mecanismos de seguridad y salud ocupacional y su acceso a mecanismos jurídicos para la exigencia de sus derechos y la compensación por la violación de los mismos.
- Meta 10.2: La inclusión económica, social y política de todas las personas sin importar su edad, sexo o discapacidad, raza, etnia, origen entre otros, (se debería considerar explícitamente la condición migratoria), adicionalmente, podría considerar los datos desagregados por el estatus migratorio, así como la presencia de normativa que regule transparentemente el acceso de los migrantes al mercado laboral.
- Meta 10.7: Considera la importancia de facilitar la migración y movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables, de las personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. El indicador 10.7.1 utiliza el costo de la contratación por cuenta del empleado cómo proporción de los ingresos anuales percibidos en el país de destino. Además el indicador 10.7.2 evalúa el número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas. La OIM contribuye al proceso global de la definición de las políticas migratorias bien gestionadas en su Marco de Gobernanza sobre Migración y su Índice de Gobernanza Migratoria.
- Meta 10.b: Busca fomentar la asistencia al desarrollo hacia los países que más lo necesitan. Aquí se sugiere cómo indicador la movilización de la inversión y otras formas de soporte financiero que facilitan los procesos de movimiento de recursos financieros de las comunidades migrantes, y la existencia e implementación de políticas y estrategias efectivas concernientes a la población migrante.
- Meta 10.c: Busca que los gobiernos aseguren que la recolección de información sobre las remesas sea confiable, comparable y transparente y muestre los verdaderos costos de transacción.
- Meta 11.1: Sugiere la importancia de asegurar el acceso a las personas a vivienda y servicios básicos adecuados, y usa cómo indicador base la cantidad de personas que vive en asentamientos improvisados. Sin embargo se sugiere que se podría considerar para este indicador la cantidad de migrantes y desplazados en las ciudades que gozan de vivienda segura, derechos de propiedad y garantías de no ser expulsados por encontrarse sin protección de la ley.
- Meta 11.5: Busca la reducción significativa de las consecuencias negativas de los desastres, en especial sobre personas vulnerables. Se podría incluir a las poblaciones migrantes en los sistemas de respuesta de las autoridades en caso de emergencia, de acuerdo a las líneas de guía de la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC).
- Meta 11.a: Busca el fortalecimiento de los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas urbanas y rurales, por lo que se podría incluir en el indicador la identificación de los puntos de mayor riesgo relacionados con la migración ambiental y la creación de programas e iniciativas innovadoras para la generación de proyectos de adaptación al cambio climático.



- Meta 11.b: Busca aumentar la cantidad de ciudades que logran integrar políticas y planes de uso de eficiencia energética, mitigación de cambio climático y gestión de riesgos de desastres, por lo que se espera que se dé la inclusión de las poblaciones migrantes en los procesos de planificación urbana, así como la preparación de las ciudades con respecto a las migraciones futuras.
- Meta 13.1: El fortalecimiento de la resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, debería considerar entre sus indicadores la reducción del riesgo de desplazamiento como consecuencia de factores relacionados con el cambio climático, la cantidad de personas afectadas por el cambio climático que pueden permanecer en sus espacios gracias a la implementación de procesos de adaptación, el hecho de que la migración sea parte de las políticas de adaptación, la existencia de políticas de reducción de riesgos acordes con las líneas y guías del MICIC y la presencia de políticas de atención de migrantes climáticos.
- Meta 16.2: Busca poner fin al maltrato, la explotación, la trata y a todas las formas de violencia contra los niños, e identificar a las víctimas de trata desglosando el sexo, la edad y el tipo de explotación. Aquí podría incluirse si hay estrategias nacionales puestas en práctica para combatir la explotación, incluyendo condiciones de infancia y migrantes, así como indicadores sobre puesta en práctica de políticas de atención de niños sin acompañante.
- Meta 17.9: El objetivo 17 nos llama a fortalecer los medios de implantación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, en este punto se busca aumentar el apoyo internacional para el fortalecimiento de capacidades para respaldar los ODS's, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Para esto, la OIM considera como posibles indicadores adicionales, la participación en diálogos o capacitaciones sobre gestión de la migración, esfuerzos de mejora de temas migratorios en las políticas y planes tanto nacionales como regionales.
- Meta 17.18: Se podría considerar si los gobiernos recolectan de manera regular información relacionada con la migración, desagregando ingreso, género, edad, raza, etnia, estatus migratorio, discapacidades, ubicación geográfica y otras características relevantes a nivel nacional, si se publica regularmente esta información, la cantidad de países que publican datos regularmente sobre elementos migratorios claves, la cantidad de países que monitorean la implementación de políticas y regulaciones nacionales atinentes a la gobernanza de la migración.

**OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO /  
ILO: INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION**



Organización Internacional del Trabajo  
Oficina Regional para América Latina y el Caribe

**Insumos para el Informe Anual sobre progresos y desafíos de la Agenda 2030  
para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe**

Lima, 6 de febrero de 2017

Medición de los ODS

1. En el marco del trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, la OIT actúa como secretariado del Grupo de Trabajo de Indicadores del Mercado Laboral, integrado por 14 países de América Latina y el Caribe, cuya última reunión anual tuvo lugar en Lima en diciembre de 2016. Este Grupo tiene entre sus objetivos el promover la medición de indicadores específicos vinculados con el concepto de trabajo decente para la región, estrechamente relacionados con el ODS 1 (indicador 1.3.1, proporción de la población cubierta por pisos / sistemas de protección social), el ODS 5 (indicador 5.5.2, sobre mujeres en puestos gerenciales) y el ODS 8 (múltiples indicadores), entre otros.
2. La OIT es la agencia custodio que tendrá la responsabilidad de compilar y procesar datos para muchos de estos indicadores a nivel mundial. En la región, la OIT está trabajando con la CEPAL y cuenta con un programa de estadísticas laborales, el Sistema de Información Laboral para América Latina y el Caribe (SIALC), con base en Panamá, que está afrontando los desafíos metodológicos y prácticos de generar información comparable, especialmente en el marco de la Resolución 1 de la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), para aquellos indicadores para los que es necesario establecer una metodología internacionalmente reconocida.
3. En el marco de un proyecto liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la OIT está realizando pruebas piloto (pruebas cognitivas y de campo) en cinco países de la región para adaptar los instrumentos de medición de las encuestas de hogares a las recomendaciones de la 19ª CIET para la estimación de los principales indicadores del trabajo (formas de trabajo, fuerza de trabajo, ocupación, subutilización y desocupación), con las correspondientes desagregaciones por sexo, edad, etnia y personas con discapacidad, en tanto lo permitan los tamaños de muestra de las correspondientes encuestas.
4. La OIT colabora con la CEPAL para brindar asesoramiento técnico y organizar talleres técnicos para los países de la región con el objetivo de mejorar la calidad de las encuestas de hogares, que son la fuente básica de más de la mitad de los indicadores de los ODS.
5. Algunos países de la región que comenzarán el proceso de Reporte Voluntario Nacional de los ODS contarán con el apoyo de la OIT en la definición de indicadores nacionales que complementen los indicadores globales. En el caso de Argentina, quien se comprometió a reportar los ODS para el año

2017, está previsto que la OIT apoye la definición y producción de indicadores nacionales en lo referido a los indicadores de la meta 1, 8 y otros que requieran el marco de indicadores de trabajo decente. Lo mismo ocurrirá con países que estén procesando un UNDAF a nivel nacional y que requieran el soporte de la OIT a nivel de definición de líneas de base y monitoreo posterior en las cuatro dimensiones de trabajo decente (empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social).

### Principales desafíos en América Latina y el Caribe

6. La reducción del crecimiento de América Latina y el Caribe en 2015 y 2016 se tradujo en resultados muy negativos en los mercados laborales. La tasa de desempleo alcanzada a finales de 2016, 8,1%, supera a la de la gran crisis internacional de 2008-2009.<sup>1</sup> En este contexto, el mandato de la OIT de promoción de la justicia social a través del trabajo decente cobra especial significado: situar la creación de empleo de calidad en el corazón de las políticas económicas, productivas y sociales es esencial para retomar un camino de crecimiento inclusivo, sostenido y sostenible, que permita reducir la pobreza y consolidar sociedades más prósperas, contribuyendo así a varios objetivos de desarrollo sostenible (1, 8, 10 y 16, entre otros).
7. Los países de la región deberán crear unos 70 millones de nuevos empleos hasta 2030 sólo para absorber la población que se incorpora al mercado laboral, unos 5 millones por año. Al mismo tiempo, es preciso mejorar las condiciones laborales de los 134 millones de trabajadores y trabajadoras que están hoy en la informalidad, muchos de ellos conformando la nueva “clase media vulnerable” que demanda más y mejores servicios de parte de los Estados. Para no dejar a nadie rezagado, será necesario abordar la situación crítica de los 24 millones de personas que, pese a tener ingresos por su trabajo, no ganan lo suficiente para que sus familias superen el umbral de pobreza de 3,1 dólares por día, y de los 25 millones de personas desocupadas en busca de un puesto de trabajo remunerado. Es especialmente preocupante que la desocupación, la informalidad y la pobreza afecten de manera desproporcionada a las mujeres y los jóvenes de la región.<sup>2</sup>
8. Los sistemas de protección social son esenciales para reducir el riesgo de que las familias caigan a situaciones de pobreza. La cobertura de la protección social en la región ha mejorado en la última década, pero sigue siendo baja: en 2014, más del 40% de los trabajadores de la región no contaba con cobertura de seguros de salud y casi el 50% carecía de pensiones. La situación era mucho peor en las áreas rurales, donde estos porcentajes subían a más del 60% y casi el 75%, respectivamente.
9. Este nuevo ciclo recesivo ha puesto de manifiesto que la región no puede apostar indefinidamente a un crecimiento basado en el alza coyuntural de los precios de las materias primas, sino que debe enfrentar de manera decidida los retos económicos de la diversificación productiva, el incremento de la productividad, la heterogeneidad estructural y la informalidad, así como los retos sociales de la desigualdad, la exclusión, la pobreza y los derechos laborales y ciudadanos.<sup>3</sup>
10. La transformación estructural de la región no ha logrado trasladar una cantidad suficiente de trabajadores desde los sectores de baja productividad hacia los de alta productividad y algunos indicios sugieren que se ha dado un traslado en la dirección contraria. La productividad promedio de América Latina y el Caribe es la mitad que la de EE.UU. y la mayoría de países no está cerrando la brecha sino que la está ampliando.

<sup>1</sup> OIT (2016). *Panorama Laboral 2016*. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

<sup>2</sup> OIT (2016). *Ibidem*. OIT (2016). *World Employment Social Outlook: Trends 2016*. Ginebra: OIT.

<sup>3</sup> OIT (2016). *Panorama Laboral Temático: Trabajar en el campo en el siglo XXI. Realidad y perspectivas del empleo rural en América Latina y el Caribe*. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

11. El bajo crecimiento de la productividad es sin duda el talón de Aquiles del proceso de crecimiento en la región y uno de los principales indicadores de que América Latina podría estar atrapada en la “trampa de la renta media”. En muchos casos, las exportaciones siguen concentradas en unos cuantos productos básicos. La región muestra enormes brechas en innovación, educación y competencias de la mano de obra<sup>4</sup>.
12. Para escapar a esta trampa e iniciar un proceso de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible es necesario alcanzar una amplia y diversificada base de sectores y actividades económicas de creciente productividad, alto valor agregado y con la capacidad de generar empleos de alta calidad para que la informalidad se reduzca de manera gradual pero sistemática y la economía opere en niveles cercanos al pleno empleo<sup>5</sup>.
13. Esto significa que no es posible hacer frente a las grandes desigualdades únicamente con los instrumentos de las políticas sociales. Es preciso que algo más fundamental cambie. Además de políticas sociales, los países de la región deben redoblar esfuerzos para poner en práctica políticas de desarrollo productivo más innovadoras y eficaces que, en conjunto y de la mano con políticas de mercado laboral, contribuyan a crear buenos puestos de trabajo formal y promover la transición de sectores y actividades de baja productividad y salarios bajos a los de alta productividad y salarios altos. Es decir, la inclusión social y la inclusión productiva y laboral son dos caras complementarias de la misma moneda.
14. Un elemento central de la realidad socio-económica y de la pobreza en América Latina y el Caribe es las altas tasas de informalidad laboral. La reducción de 4 puntos en la “década de oro” de alto crecimiento 2003-2013 sólo logró llevar la tasa de informalidad laboral al 47% del empleo, y esta cifra ha aumentado durante los últimos años. Hoy casi la mitad del total de la fuerza de trabajo de la región trabaja en condiciones caracterizadas por ese complejo, heterogéneo y persistente fenómeno de empleos de baja calidad, de muy baja productividad, y no cubiertos por la seguridad social ni los derechos laborales que se conoce como el empleo informal. Más del 80% de los 134 millones de trabajadores con empleo informal aún se encuentra en las categorías de trabajador por cuenta propia, trabajo doméstico (asalariado de hogar), trabajadores de micro y pequeñas empresas (de 1 a 10 trabajadores) y trabajadores familiares auxiliares (sin remuneración). Al mismo tiempo, estos grupos, en situación de gran vulnerabilidad a las crisis económicas, tienen las tasas más altas de informalidad.
15. Finalmente, es importante destacar los retos normativos que enfrenta la región. Pese a que los países de América Latina y el Caribe tienen un número relativamente alto de convenios de la OIT ratificados, existen brechas de inadecuación de la legislación laboral en relación con las normas internacionales; hay dificultades y violaciones en el respeto y aplicación de los derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad de asociación o libertad sindical y negociación colectiva; existen niveles inaceptables de trabajo infantil y de trabajo forzoso; y también de discriminación por diversas causas, incluyendo en particular en materia de género. También existen retos en el tema de la consulta previa a los pueblos indígenas y aplicación del Convenio 169 y en materia de administración e inspección del trabajo. Y todo lo anterior vinculado a una débil cultura de diálogo social.

---

<sup>4</sup> OCDE, CAF, CEPAL (2015) Perspectivas Económicas de América Latina: Educación, Competencias e Innovación para el Desarrollo, OCDE, Naciones Unidas, CAF.

<sup>5</sup> Para una discusión del concepto de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible ver Salazar-Xirinachs (2015) “Políticas de Desarrollo Productivo para el Crecimiento Inclusivo con Más y Mejores Empleos”, 21st Bradford Development Lecture, Universidad de Bradford, 18 de junio de 2015. <http://www.brad.ac.uk/social-sciences/bcid/bdl/21st-bdl/>

**ONU-MUJERES: ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD  
DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES /  
UN-WOMEN: UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY  
AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN**



**Contribución al Informe Anual sobre el Progreso y los Retos Regionales de la Agenda para el Desarrollo Sostenible**

El *Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible* (IAEG-SDG<sup>1</sup>, por sus siglas en inglés) acordó, en el 47° periodo de sesiones<sup>2</sup>, el marco que incluye 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores para medir el avance en los objetivos y las metas de la Agenda 2030.

La revisión del progreso de indicadores que compete a esta sección se relaciona con aquellos que miden el logro de la igualdad de género en sus diferentes dimensiones. Especialmente el ODS5 *Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas*, pero también respecto a otras metas con las que el género se relaciona transversalmente e indicadores desagregados por sexo.

Puede decirse que en América Latina y el Caribe (ALC) ha habido cierto avance en identificar indicadores de género regionales. Este esfuerzo ha permitido también detectar las lagunas de información existentes y las dispares capacidades estadísticas entre países. En el último año se han inventariado indicadores y se han registrado fuentes de verificación e instrumentos para generar indicadores de género, así como sus desagregaciones, coberturas y periodicidades, entre otros.

Principalmente la Base de Datos Global para los ODS de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas —aún en progreso— ha sido un repositorio eficaz para la disponibilidad de indicadores y metadatos a nivel país, regional y global relacionados con el género. Así mismo, los esfuerzos realizados a nivel regional como el estudio sobre capacidades estadísticas realizado por la División de Estadísticas de la CEPAL, así como sondeos específicos sobre las capacidades estadísticas de género coordinados por la Oficina Regional de ONU Mujeres, han contribuido a aclarar la situación regional, así como delinear los retos para sentar las estrategias de cooperación para el avance de los ODS.

Dentro de los indicadores estadísticos relacionados con el tema están los que son relevantes por su perspectiva de género —contenidos en el ODS5 y en otros objetivos—, y los que se refieren únicamente a la desagregación por sexo. La diferencia entre ambos tipos es que el primero va más allá del dato demográfico que arroja el segundo. Los indicadores de género aportan conocimiento sobre los roles de género y la distribución del acceso y ejercicio de los derechos de mujeres y hombres en nuestras sociedades. Sin duda la desagregación por sexo es esencial para el seguimiento de la participación de mujeres y hombres en el desarrollo, pero tiene un impacto menor en la toma de decisiones y en la política pública que las estadísticas de género.

<sup>1</sup> Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators.

<sup>2</sup> Disponible en <http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-E.pdf>.

Del total de indicadores de los ODS, alrededor de 110<sup>3</sup> deben desagregarse por sexo, mientras que 46, de acuerdo a ONU Mujeres,<sup>4</sup> son indicadores efectivamente relevantes al género (14 de éstos contenidos en el ODS 5). Es decir, se trata de indicadores que metodológicamente pertenecen a la estadísticas de género y que darán seguimiento al cumplimiento de 31 metas contenidas en 11 ODS, incluido el ODS 5 (los Objetivos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 17).

De acuerdo a la base de datos global de la División de Estadísticas de la ONU, aún en progreso, en ALC se cuenta ya con información a nivel regional de 14 de los 46 indicadores de género que se muestran en la siguiente tabla:

Indicador	
2.2.1	Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años.
2.2.2	Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo).
3.1.1	Muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.
3.1.2	Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado.
3.7.1	Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de edad) que practican la planificación familiar con métodos modernos.
3.7.2	Tasa de natalidad entre las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad.
4.2.1	Porcentaje de niños/jóvenes: a) en los grados 2/3; b) al final de la enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en: i) lectura y ii) matemáticas. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras características, donde se disponga de datos).
5.3.1	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años.
5.5.1	Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (y los gobiernos locales: pendiente).
6.2.1	Porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón.
8.5.2	Tasa de desempleo
8.7.1	Porcentaje y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, por sexo y grupo de edad.
8.8.1	Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y situación migratoria.
17.18.3	Número de países con un plan estadístico nacional totalmente financiado y en ejecución

Fuentes: Base de Datos Global de la División de Estadística de la ONU. Área: América Latina y el Caribe. Febrero 2017. Estos indicadores que están dentro del grupo que ONU Mujeres identifica como indicadores relevantes al género.

<sup>3</sup> ONU Mujeres (2017), *Tranversalización de Género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030*, por publicarse.

<sup>4</sup> Véase: <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs>.

Estos indicadores de género regionales se encuentran, en su gran mayoría, en el nivel de clasificación I. Esto significa que cuentan con una definición conceptual internacionalmente acordada y que se producen con cierta frecuencia. Los dispuestos en la tabla se generan anualmente.

Puede decirse que a febrero de 2017, a nivel regional en ALC, se contaba con 30% de los indicadores relevantes de género (14 de 46) contenidos en los diferentes ODS. Este porcentaje es semejante al promedio de los indicadores totales, ya que actualmente la región cuenta ya con el 28% de todos los indicadores de los ODS (72<sup>5</sup> DE 260). No obstante, el ODS 5 sí presenta un rezago respecto a estos avances, pues se tiene únicamente alrededor de una séptima parte de los indicadores (2 de 14). Se cuenta únicamente a nivel regional con los indicadores 5.3.1 y 5.5.1. (sobre este último, sólo se cuenta con información a nivel de gobiernos nacionales y no locales).

Lo anterior se debe a que persisten retos importantes en las definiciones conceptuales de indicadores de género sumamente significativos para el empoderamiento de las mujeres, así como la producción general de estadística de género. Algunos de los temas se relacionan con el control sobre la vida reproductiva, el control sobre los activos, el derecho a una vida sin violencia, el uso del tiempo y los trabajos no remunerados, por nombrar algunos. Si bien hay países en la región que producen encuestas especializadas en estos temas y, en ese sentido han logrado avances, esta situación no es generalizada en la región.

Un sondeo realizado a países de la región sobre capacidades estadísticas de género coordinado por la Oficina Regional de ONU Mujeres, reveló la disparidad institucional entre las oficinas nacionales de estadística y sus capacidades para dar seguimientos a temas de género. Los países del CARICOM son los que más dificultades enfrentan. De doce países entrevistados, sólo cinco realizaban encuestas relacionadas con violencia de género, seis con el uso del tiempo y dos con encuestas específicas de temas de la mujer. Estas encuestas, además, se levantaban con diferentes coberturas y periodicidades entre países.

De acuerdo a este sondeo, los indicadores del ODS 5 que cuentan con mayor avance en la región, además del 5.3.1 y 5.5.1, son 5.2.1, 5.2.2 y 5.b.1. Dos comentarios: 1) por arriba del 90% de los países entrevistados respondieron medirlos o contar con instrumentos para medirlos, y; 2) se trata de indicadores de nivel I y II. Por su parte, los indicadores menos desarrollados son 5.a.1, 5.a.2 y 5.c.1 clasificados en el nivel 3. Cabe mencionar que recientemente se terminó la evaluación del proyecto piloto EDGE realizada en un país de la región (México), lo que contribuirá a las discusiones conceptuales y operativas de los indicadores 5.a.1 y 5.a.2 sobre propiedad y control de los activos.

Los retos más significativos encontrados hasta ahora son, entre otros: la falta de recursos para invertir en estadísticas de género y realizar levantamientos frecuentes, necesidades de asistencia técnica y capacitación y transversalización de las estadísticas de género en diversos instrumentos.

---

<sup>5</sup> Los 72 indicadores regionales de los ODS contenidos en la Base de Datos Global cuentan con desagregación por sexo en los indicadores pertinentes.

**Contribution to the Annual Report on Regional Progress and Challenges  
for Sustainable Development**

**Main challenges in the economic, social and environmental dimensions**

**UNWOMEN Submission to ECLAC annual report**

## **I. Preserving the gains achieved for women and girls in LAC**

The region has experienced significant positive changes in regard to the situation of women, ranging from the approval of relevant laws and the implementation of policies, to a more robust incorporation of women in the economy. Due to unprecedented levels of public investment, supportive public policies, including cash transfers, minimum wage increases, housing, health and more progressive governments, the positive impact on the position of women is noticeable. This has also translated in increased women's political participation and leadership. In 2014 and mid-2015, women occupied an average of 26.4 per cent of seats in parliaments, while the global average was 22 per cent.

However, since 2014 with the onset of a strong **economic downturn**, two tendencies threaten those gains: the prospect of further recession and increasing inequalities linked to cuts to social programs; and the expansion of conservatism in politics and social movements. This situation holds the potential to reverse gains from the past two decades. Furthermore, the region continues to experience **increasingly high levels of inequality** (with ten of the fifteen most unequal countries worldwide) and **social exclusion**, particularly impacting women, indigenous in Latin America and Afro-descendant people and youth - which are exacerbated by overall inequality.

Governments in the region hold as most important for their financing efforts strengthening global cooperation around fiscal and taxing matters related to “regulation and regulation of tax evasion, circumvention and illicit funds, as well as the issue of sovereign debt and the indebtedness of countries, above all in light of the monetary policy changes seen in industrialized nations.”<sup>1</sup> This means that the **LAC region must count on its own resources**, and increasingly on South-South cooperation and integration to meet the challenges of financing development as well as to have a clear and unified voice in the global fora around fiscal and taxing issues. Within the LAC region, the Caribbean Small Island Developing States and other Member States of CARICOM remain vulnerable to **debt crises** and some are in the midst of crises. Compounding these challenges are the high vulnerability to climate change and disasters, including hurricanes, floods and drought, which have been proven to have significant socioeconomic impacts. This vulnerability presents a **socioeconomic threat, with women and girls being particularly vulnerable**.

## **II. Overcoming key bottlenecks**

### **➤ Continued investments in women's inclusion and participation in the economy**

Recent reports<sup>2</sup> indicate that **substantial economic value can be achieved by improving gender equality, and more than half of it is linked to higher labour-force participation rates**. Yet, in LAC, although girls outperform boys in the secondary and tertiary levels of education, this has not translated into overall access to paid labour (particularly decent work) and women are overrepresented amongst

<sup>1</sup> Inter-governmental Regional Consultation on Financing for Development, which was convened by the ECLAC Secretariat and the Government of Chile in Santiago, Chile, on March 12-13 2015.

<sup>2</sup> Delivery the power of parity: Toward a More Gender-Equal Society, Discussion Paper, McKinsey Global Institute, May 2016, page 3.



those living in poverty. The gender wage gap persists between men and women of the same age and with the same education level; men earn an average of 17 per cent more than women at any age, level of education, or type of employment and as we move towards better paid and qualified professions such as finance, engineering and technological sectors, gender gap increases as well as the concentration of men. Although the average women's labor force participation rate in Latin America grew more than 10 percentage points between 1990 and 2008, ending the decade at 53 per cent, their participation continues to lag behind men. One of every three women in the region does not even earn her own income, with approximately 90 per cent of all unpaid domestic care provided by women and domestic work still being the main form of girls' socialization to the world of work. Women, especially women farmers, continue to face barriers in accessing productive assets, including land, knowledge and skills that would enable them to maximize their income. According to agricultural censuses<sup>3</sup>, the size of the land farmed or managed by women tends to be 42 to 80% smaller and of lower quality than men's.

**Increasing women's economic participation has a multiplier effect on growth.** According to the study cited above, if women increase their participation in the formal labor force, if they are able to shift from low to higher productivity sectors and if they are provided with more choices regarding the number of hours worked, gains in GDP would be significantly higher in 2025. **For Latin America, the GDP gain is calculated at 14 per cent, which is the highest after India (16 per cent)**<sup>4</sup>.

Women's increased participation in the economy **requires an integrated approach and coherence between economic and social policies.** UN Women regional report on *Progress of Women in Latin America and the Caribbean*, a companion to the global flagship report *Progress of the World's Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights* recommends a combination of policies that: 1) **Refocus macroeconomic policies** in ways that soften the impact of economic downturn in the short term and create long term conditions for job creation (more and better jobs for women); 2) **Recognize, reduce and redistribute domestic and care work**; 3) **Sustain investments in gender-responsive social protection**, paying particular attention on creating better linkages between the conditional cash transfer schemes and complementary services for women's empowerment, including literacy courses, vocational training, agricultural inputs, childcare, legal aid and support for victims of domestic violence; 4) Improve the conditions for women's access to **sexual and reproductive health services**. Women's economic empowerment is also closely related to levels of **gender-based violence and women's political participation**. Indeed, gender-based violence affects the development and performance of women and it represents a cost to the State health and productivity sectors, among others. At the same time, parity democracy is necessary to enable men and women in their diversity generate inclusive and innovative agendas for women's economic empowerment.

#### ➤ **Reaching the furthest behind**

**Gender inequalities affect women differently in the region.** For instance, throughout their life, **indigenous women, adolescents and girls** face multiple layers of violence, discrimination and inequality that must be addressed in a more robust, inclusive and comprehensive manner. Though **data is scarce**—a problem itself—indigenous women are much less likely than other segments of the population to be educated, earn a decent income, own land or participate in politics. In Latin America, the percentage of adolescent mothers in informal unions is higher among indigenous populations than in non-indigenous

<sup>3</sup> FAO Gender and Land Rights Database

<sup>4</sup> The power of Parity: How Advancing Women's Equality can add US\$ 12 trillion to global growth, McKinsey Global Institute, September 2015, page

girls<sup>5</sup>. Limited data suggests that indigenous women and girls tend to experience higher levels of violence compared to their non-indigenous counterparts.<sup>6</sup> The Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, for instance, finds that indigenous women are significantly more likely to experience rape than nonindigenous women and that more than one in three indigenous women are raped during their lifetime.<sup>7</sup> Gender and ethnic **disaggregated data and statistics** which account for the specific situation and status of afro descendent people in general, and **afro descendent women** in particular, are **often obsolete or non-existent in the LAC region**. However, the data and statistics that *do* exist reveal a reality for afro descendant women in Latin America as often experiencing significant inequality, discrimination and injustice in various fields including the economic, political and social realms, showing the structural character of gender and racial inequalities in the region.

**Data disaggregation is an indispensable step** to understand the **profiles of vulnerability** and design or **adapt development policies** accordingly. There are a number of desired variables for disaggregation, including age, education, ethnicity, geographic location (rural/urban), income/wealth, disability status and frequency of violence. “Leaving no one behind” means targets can only be considered achieved if they have been met “for all peoples and for all segments of society” and **this means for the most excluded women and girls as well**. This has important implications for countries in terms of costs to collect and analyze data, quality, the required sample size and the confidentiality. It also has implications in terms of the national plans and policies required to address the inequalities and respond to the needs of the most excluded.

- **Continue addressing cultural attitudes and norms related to traditional gender roles and stereotypes.**

Gender unequal norms are persistent, challenging women’s and girls’ rights. Indeed, **despite having the best and strongest legal and policy framework compared to other developing regions in the world, LAC continues to register one of the highest levels of violence against women** and girls with worrisome increases in some countries. Of the 25 countries worldwide with the highest femicide rates, more than half are in the LAC region. Available data shows that two out of three murders of women in Central America are gender-related. One in four women in the region has suffered at least one violent experience perpetrated by her partner. The Caribbean has some of the highest recorded rates of sexual assault in the world and some of the highest rates of homicide, along with Central America.

Another example of the persisting unequal gender norms is the fact that **LAC is the only region of the world where the prevalence of child marriage is not on the decline**—no significant change has been observed in the prevalence over the last 30 years<sup>8</sup>. Being married or in union before the age of 18 increases the likelihood of becoming a mother at a very young age. Reversely, social gender norms act beyond the individual sphere by pressing girls who become pregnant into marriage at an early age. **Girls’ pregnancy rate in the region is the second highest in the world** and reaches 75.5 live births per 1,000 women between 15 and 19 years<sup>9</sup>. This has happened against the background of MDG

<sup>5</sup> ECLAC/PAHO (2011). *Salud de la población joven indígena en América Latina: un panorama general*. Santiago de Chile, Chile.

<sup>6</sup> UN Women. 2014. “ELIMINATION AND responses to VIOLENCE, EXPLOITATION AND ABUSE OF INDIGENOUS GIRLS, ADOLESCENTS AND YOUNG WOMEN.” A Thematic Paper submitted by the Inter Agency Support Group on Indigenous Issues as a technical resource for the 2014 World Conference on Indigenous Peoples and the Post 2015 Development Agenda Setting Processes.

<sup>7</sup> General Assembly. 2015. Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Victoria Tauli Corpuz. A/HRC/30/41. Para 47.

<sup>8</sup> Ending child marriage: progress and prospect. New York: UNICEF, 2014.

<sup>9</sup> CEPALSTAT 2012.

implementation and in a context of progressiveness of public policies in the region, with increased investments in social services, including education and health. These facts indicate the pervasive nature of inequalities and discrimination faced by women and girls according to income, education and/or cultural group. It demonstrates the deeply ingrained social norms regarding traditional masculine and female roles that continue to characterize the region.

Addressing such norms is a long-term endeavor that requires integrated approaches and strategies including: 1) at legislative level, ensuring that laws are aligned with international standards on gender equality and women's empowerment, and that these are implemented, 2) working with men and women at various levels (individual, household, community, social) to encourage dialogue on perceptions and behaviors and inform about rights, 3) designing policies programmes and strategic tools<sup>10</sup> that enable women and girls to overcome obstacles to accessing services (education, health, justice, among others) and exercising their rights, and 4) strengthening women's economic and political empowerment through transformative approaches and programmes (e.g. parity democracy<sup>11</sup>, a model of democracy that puts parity representation and substantive gender equality at the center of the transformations undertaken by inclusive States).

---

<sup>10</sup> Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide), UN Women and OHCHR.

<sup>11</sup> Strategic Guide: "Political empowerment of women: framework for strategic action in Latin America and the Caribbean (2014-2017), UN Women.

**ONUSIDA: PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA /  
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS**

**UNAIDS INPUTS TO THE FIRST ANNUAL REPORT ON REGIONAL PROGRESS  
AND CHALLENGES IN RELATION TO THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN**

**The AIDS response in the 2030 Agenda for Sustainable Development<sup>1</sup>**

The 2030 Agenda for Sustainable Development reflects the interdependence and complexity of a changing world and the imperative for global collective action. In shifting from so-called development for the poorest countries to sustainable development for all, the global agenda has expanded in scope and complexity. As a set of indivisible goals, the SDGs give all stakeholders a mandate for integration of efforts. The AIDS response is no exception: the epidemic cannot be ended without addressing the determinants of health and vulnerability, and the holistic needs of people at risk of, and living with, HIV. People living with HIV often live in fragile communities, and are most affected by discrimination, inequality and instability. Their concerns must be at the forefront of sustainable development efforts.

By extension, lessons learned from the multisectoral, multistakeholder AIDS response are key to progress across the SDGs. The AIDS response has advanced such issues as the right to health, gender equality, health information systems, service delivery platforms, commodity access and security and social protection<sup>2</sup>. The response has garnered substantial experience in addressing entrenched social norms, social exclusion and legal barriers that undermine health and development outcomes, and its investment approach is increasingly being adopted to accelerate gains across global health and development. The AIDS response can be a leader in leveraging strategic intersections within the Sustainable Development Goals (SDGs), while disseminating lessons learned from three decades of unprecedented progress.

**HIV and the SDGs:  
joint action, shared progress**

**Illustrative examples of:**

- ➔ How select SDGs impact the HIV epidemic and response
- ➔ How HIV impacts progress towards select SDGs
- ➔ Opportunities for cross-sectoral collaboration towards shared goals for 2030

**01 End poverty**

- ➔ Poverty can increase vulnerability to HIV infection. Unequal socioeconomic status of women compromises their ability to prevent HIV or mitigate the impact of AIDS
- ➔ Households affected by HIV are more vulnerable to falling into and remaining in poverty
- ➔ Economic empowerment and social protection can reduce poverty and HIV vulnerability and help keep people with HIV healthy

**02 End hunger**

- ➔ Hunger can lead to risk-taking behaviour, undermine HIV treatment adherence and hasten progression to AIDS
- ➔ Advanced HIV-related illness impairs nutritional status and undermines household food security by reducing productivity
- ➔ Nutritional support to households and integrated systems to deliver nutritional support and HIV services can enhance health outcomes

<sup>1</sup> UNAIDS, 2016–2021 Strategy. On the Fast Track to end AIDS.

<sup>2</sup> Piot P, Abdoool Karim SS, Hecht R, Legido-Quigley H, Buse K, Stover J et al. Defeating AIDS—advancing global health. *Lancet*. 2015; 386:171–218.

### 03 Ensure healthy lives

---

- ➔ Lack of universal health coverage, including sexual and reproductive health services, restricts access to HIV prevention and treatment
- ⚙️ Most people acquiring HIV infection acquire it through sexual transmission or transmission from mother to infant during pregnancy, childbirth or breastfeeding
- ⬆️ HIV-sensitive universal health coverage can play a vital role in promoting health equity, while integration with rights-based services for sexual and reproductive health, noncommunicable diseases, tuberculosis and other conditions can improve broad health outcomes

### 05 Achieve gender equality

---

- ➔ Gender inequalities, discrimination, violence and harmful practices negatively impact women and girls, and men and boys, and increase risk of HIV infection and its impact
- ⚙️ HIV is the leading cause of death among women of reproductive age (15–44 years old); women living with HIV often face increased violence
- ⬆️ Gender-transformative HIV programmes that engage men can reduce violence and empower women, while integration of rights-based services for HIV and sexual and reproductive health increases dual uptake and impact

### 10 Reduce inequality

---

- ➔ Income inequality is linked to higher HIV prevalence; HIV affects vulnerable and disempowered communities most severely
- ⚙️ Stigma and discrimination against key populations is a major contributor to high HIV prevalence among them and linked to lower access to health care and housing
- ⬆️ Protection against discrimination alongside legal services, rights literacy, access to justice and international protection can empower people to claim their rights and enhance access to HIV services

### 04 Ensure quality education

---

- ➔ Globally, about 7 in 10 adolescent girls and women 15–24 years old do not have knowledge of HIV
- ⚙️ HIV-related illness impedes school attendance and learning, as does stigma and discrimination in school settings
- ⬆️ High-quality education, including on sexual and reproductive health, empowers young people and provides life skills for responsible and informed sexual and reproductive health decisions

### 08 Promote economic growth

---

- ➔ Safe and secure working environments facilitate access to HIV services, especially for workers in informal employment, such as undocumented migrants and sex workers
- ⚙️ People living with HIV experience unemployment rates three times higher than national unemployment rates
- ⬆️ Addressing HIV in the world of work and protecting labour rights can help ensure people living with and affected by HIV enjoy full and productive employment

### 11 Make cities safe and resilient

---

- ➔ HIV especially affects cities and urban areas, with 200 cities accounting for more than one quarter of the world's people living with HIV
- ⚙️ With rapid urbanization, many cities contend with growing HIV epidemics; people living in slums often acquire HIV infection at higher rates than the rest of the city
- ⬆️ City-led local AIDS responses support positive social transformation by strengthening health and social systems to reach the most marginalized populations

### 16 Promote peaceful and inclusive societies

- ➔ Exclusion, stigma, discrimination and violence fuel the HIV epidemic among adults and children
- ⌚ The AIDS response, led by people living with and affected by HIV, has demanded access to justice and pioneered people-centred accountability mechanisms—providing lessons on which to build
- ⌚ Participatory governance—which includes community-led responses—can drive more relevant, rights-based programmes and stronger accountability for health and development

### 17 Strengthen means of implementation

- ➔ Global collective action to improve access to affordable HIV commodities is critical to ending the epidemic
- ⌚ HIV movement has led advocacy for reform of patent laws and regulatory systems; full use of TRIPS flexibilities; monitoring free-trade agreement negotiations; and taking legal action
- ⌚ Efforts to secure affordable HIV commodities, including second- and third-line drugs, can benefit wider health and equity agendas, including tuberculosis, hepatitis C and noncommunicable diseases

## Latin America and the Caribbean Gaps and challenges<sup>3</sup>

### Latin America

- Stigma and discrimination: 10% to 44% of people living with HIV in 12 countries report having experienced discrimination.
- Violence: 26%–53% of ever-married women aged 15–49 years old report experiencing physical or sexual violence from a partner in the past 12 months. Intolerance of sexual diversity is a challenge—from 2013 to 2014 there were more than 770 incidents of violence (resulting in 594 deaths) related to the victim’s sexual orientation, gender identity or gender expression.
- Funding and efficiency: although key populations account for most of the people acquiring HIV, only 2% of prevention investment is directed towards key populations. More than two thirds of these programmes rely on external funding.

### The Caribbean

- People are still being left behind: HIV prevalence is high among key populations such as sex workers (8% in Haiti) and men who have sex with men (33% in Jamaica). Other groups are also being excluded, such as young people.
- Stigma and Discrimination: Challenges regarding stigma and discrimination, violations of human rights and gender-based violence continue to hinder access to services. In particular, punitive laws and policies, including those related to sex work, same-sex sexual relations, drug use and age of consent to access health services, undermine service access.
- Sustainability: HIV prevention and treatment investments depend heavily on external funding.
- EMTCT: Vertical transmission rates remain high in Haiti and the Dominican Republic.

<sup>3</sup> UNAIDS/PCB(38)/16.10 2016-2021 Unified Budget, Results and Accountability Framework Issue date: 31 May 2016.



## Areas of focus for the Joint Programme

### *HIV Testing and Treatment.*

Supporting countries to address demand and supply **for HIV testing**, including public education, review of protocols, community-led services, and self-testing especially in higher prevalence countries and for key populations<sup>4</sup>. Supporting countries to roll out HIV and Wellness Counselling and testing in workplaces. Advocating for the expansion of **treatment** and care, task shifting, early diagnosis, including scale-up of ART for people with TB-HIV, improvement of adherence and strengthening laboratory capacity and health systems. Promoting regional initiatives for **price reduction** and using TRIPS; pooled procurement, PAHO Strategic Fund, and efficiency of ARV purchasing. Providing support to improve **supply chain management systems** and avoid stockouts.

### *eMTCT.*

Facilitating the validation of countries that have reached dual elimination targets, developing eMTCT acceleration plans for countries in need.

### *HIV Prevention among key populations.*

Promoting expansion and use of community expertise. Strengthening continuum of care, promoting data generation and scaling up PrEP, in selected countries. Retaining health services for sex workers and MSM and promoting capacity building for youth. Strengthening strategic information and evidence based allocation of domestic funding. Supporting expansion of early testing and linkage to care for key populations and vulnerable groups such as adolescents, migrants, and prisoners. Supporting countries to strengthen social protection for key populations.

### *Gender inequalities and GBV.*

Promoting gender responsive approaches and programmatic measures to address GBV. In the Caribbean, supporting the empowerment of women and girls as advocates for interventions, including legal reforms to reduce GBV, teenage pregnancies and early marriage.

### *Human rights, stigma and discrimination.*

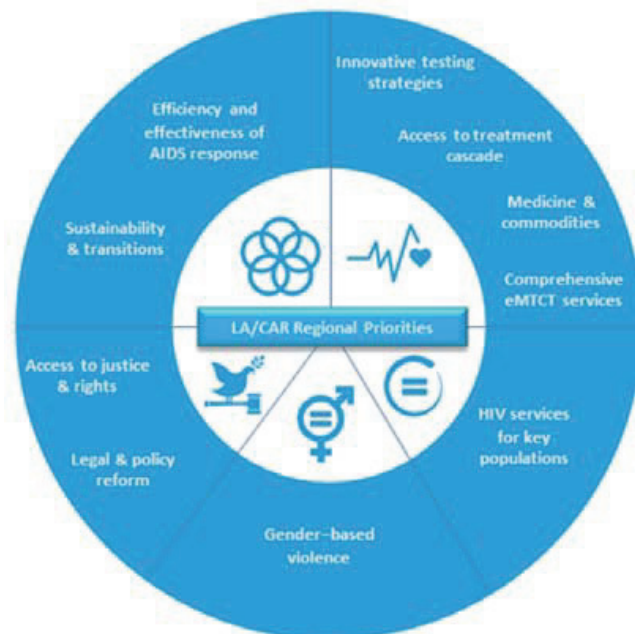
Supporting countries to track and address discrimination, particularly in healthcare settings. Advocating for normative instruments that promote and protect the rights of vulnerable groups and intensifying advocacy to change perceptions regarding key populations. Promoting protective legal frameworks including on HIV status, sexual orientation and gender identity. Strengthening monitoring mechanisms to measure progress on discrimination and document legal precedents related to HIV. Strengthening national capacity of parliamentarians, law enforcement structures, and communities to promote access to justice.

---

<sup>4</sup> Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track to Accelerate the Fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030, as adopted by Member States at the United Nations General Assembly High-Level Meeting on Ending AIDS 2016 within the framework of the Sustainable Development Goals.

### *Investment and efficiency.*

Supporting countries to develop sustainability plans, with increased and diversified/innovative domestic investments, while optimizing resource allocation and reducing costs. Strengthening regional coordination mechanisms on the future architecture of the HIV response. Advocating for governments to assume increasing financial responsibility, especially for key populations, and exploring alternative financing such as private sector partnerships and private development banks. Supporting countries to improve resource allocation, including for key populations, and effectiveness and efficiency of the HIV responses. Promoting cost-efficient investments based on populations and location, as well as strengthening links between HIV and other priorities such as social and economic inclusion<sup>5</sup>.



<sup>5</sup> UNAIDS/PCB (37)/15.19 UNAIDS Unified Budget, Results and Accountability Framework 2016-2021 Issue date: 20 October 2015.



**OPS: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD /  
PAHO: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION**

**PAHO Input for UNDG-LAC Annual Report on the Progress and Regional Challenges  
of the 2030 Agenda for Sustainable Development**

In recent years, the global community's attention has shifted towards the Sustainable Development Agenda, and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), signifying a historic entrance into a new era of global development. The SDGs have been designed as a framework to guide global development, building upon the achievements of the Millennium Development Goals (MDGs) while simultaneously calling for a stronger global commitment to sustainable development. Echoing many of the key principles that informed the Pan American Health Organization (PAHO) Strategic Plan 2014 – 2019, Agenda 2030 prioritizes equity, shared commitment, and innovative, multi-sectoral approaches to both long-term and novel challenges. Additionally, as each of the SDGs address issues that have important impacts on health, they represent an effective platform on which health-enabling policies can be built to benefit future generations. PAHO is uniquely positioned to facilitate this process by advocating for health in and beyond SDG 3 and helping identify specific opportunities to encourage national, regional, local and global stakeholders to use multi-sectoral approaches to reach agreed targets.

**Measuring progress towards the achievement of the SDGs in the Region of the Americas**

At the culmination of the MDGs era, the Region had made significant progress in terms of reaching the health-related MDGs and targets such as overall levels of nutrition, life expectancy, poverty, under-five mortality, HIV, malaria, and tuberculosis. This progress notwithstanding, Regional averages masked many of the growing inequalities between population groups, particularly the most vulnerable, disadvantaged and marginalized. Inequity and inequality are tangible realities in the Region and, as one of the most inequitable regions in the world, the Region of the Americas is faced with unique challenges as it works toward promoting health for all and achieving sustainable development. The importance of highlighting and tackling inequalities between sub-populations is central to the 2030 Agenda and requires indicators that incorporate data disaggregated for drivers of inequality. As such, there is a need to refine, adapt and scale-up the measurement, monitoring and evaluation capacity of countries, especially those with less developed or poorly equipped health information systems. In response, in May 2016, PAHO commissioned the Review of Equity and Health Inequalities in the Americas and tasked it with leading the Review of Equity and Health Inequalities in the Americas, the first large-scale effort to gather evidence on health inequities in the Region of the Americas. The purpose of this report was to address one broad and pervasive problem with a variety of dimensions: Factors that should not determine health outcomes are, in fact, deciding them for an enormous number of people. The renewed focus on equity within the Region represents an important shift from the MDG agenda and reflects a growing appreciation for the negative impact of inequalities on health and development.

PAHO has made great efforts to help guide the Region in the implementation of SDGs, especially SDG 3. At PAHO's 53<sup>rd</sup> Directing Council in October, 2014 a roundtable discussion to determine the role of PAHO and its approach to the implementation of the post-2015 agenda for sustainable development was organized. In the context of the roundtable deliberations, Member States requested a concept paper outlining how to achieve the SDGs in the context of PAHO's current mandates, agendas, and Strategic Plan. In response, PAHO prepared the document called "Preparing the Region of the Americas to Achieve the Sustainable Development Goal on Health," which initiated a cooperation exercise with Member States to compare and align SDG targets with current national health policies and programs. In

In addition to the aforementioned document, PAHO has developed a comprehensive series of internal resources for understanding, implementing, and evaluating progress toward the SDGs to be made available to all Pan American Sanitary Bureau (PASB) staff. These materials include briefing documents, background materials, and slides for presentation to external partners.

PAHO has also conducted various national consultations to further enhance the capacities of the PAHO/WHO Representative Offices, health ministries, and other public institutions to achieve the SDGs. At a regional consultation in Medellin, Colombia, in November 2015, PAHO and country representatives from 20 countries in the Region met to discuss programmatic and technical resources. A key outcome that emerged from the discussions was the agreement that each country should provide information on its preparedness to engage in the SDGs process, making special reference to the programs, actions, technical materials, and human resources available in the country to support achievement of the SDGs agenda. An additional consultation to discuss how best to strengthen regional capacity for the actual implementation of the SDGs across the Region was held in conjunction with the Sustainable Development Solutions Network and FIOCRUZ, a PAHO/WHO Collaborating Center in Brazil. Both of these consultations also served as platforms to share national experiences related to the achievement of SDG targets related directly or indirectly to health.

Recently, Member States recommended that PAHO develop a Strategy/Roadmap to support countries of the Region to achieve SDG targets associated with health, requiring a coordinated effort among several specific PAHO Departments and Programs. In response, PAHO has begun the development and implementation of a cohesive, Organization-wide strategic approach to support Member States in achieving the SDGs. The approach is based on the key principles of equity and sustainability, using innovation and multi-sectoral approaches that incorporate other sectors as partners, as promoted by the 2030 Agenda for Sustainable Development, and is designed to foster innovation, motivate inter-departmental cooperation, and develop sustainable capacity to support Regional activities in the long term. By adopting an equity-based approach to support Member States in achieving the SDGs, PAHO aspires fulfil the aspiration of the 2030 Agenda as a plan of action for people, planet, and prosperity that will shift the world onto a sustainable and resilient path. Close collaboration between PAHO and Member States will help produce a public health response that is in full alignment with the 2030 Agenda, PAHO's strategy and mandates, national priorities, national action plans and existing global agreements. PAHO will continue to play a key role in creating synergies with other sectors and identifying areas where various agendas are harmonized such that Member States are properly supported to successfully and efficiently tackle Regional health challenges.

### **Key challenges for achievement of the SDGs in the Region and solutions**

As countries continue to develop people-centered, robust and resilient health systems, efforts must emphasize intersectoral action, focusing on areas outside of the health sector to improve equity, health and wellbeing, in accordance with the 2030 Agenda. These efforts will be met with many challenges, including the traditional challenges encountered when pursuing other collaborative efforts and those presented by the 21st century. These include:

#### *Governance*

Since the start of the global financial crisis, the Region has been undergoing an economic slowdown. The Americas will confront the challenges of the 2030 Agenda in the midst of persistent external vulnerability, long low-run growth rates, smaller financial inflows, weaker external demand and declines in investment growth rates. The slowdown has led to consistently increasing urban unemployment rates

and poor employment quality, factors which partially explain why Regional inequality reduction has slowed. These patterns of economic activity represent one of the most significant challenges for the Region in building the capacity, infrastructure and innovation necessary to achieve the 2030 Agenda. Sustaining these advances and realizing the SDGs, despite the deceleration in activity and sometimes contracting economy, means the Region must change its development style under less favorable conditions than under the MDGs. It will require a stronger Regional commitment to governance and regulating the ways institutions are shaped, legitimized and equipped. Governance structures affect growth, equity and well-being, each of which is pivotal for realizing sustainable development. Accountability and responsiveness are two key pillars underlying the effectiveness of government institutions and their ability to deliver on the SDGs. Neglect of these pillars can lead to social and political instability, reduced investment, poor economic performance and secondary impacts on the well-being of citizens. They can be overcome by reforms that prioritize transformative leadership, citizen participation, transparency and innovative interventions.

### *Intersectoral Action*

Multi-Stakeholder Partnerships (MSPs) are a fundamental element of the SDGs, rather than part of a parallel arrangement. Such is the importance of partnerships for the achievement of SDGs that SDG 17, Partnerships for the Goals, focuses exclusively on them. SDG 17 highlights that the envisioned progress can only be achieved by the merging of a broad range of stakeholders moving past a stand-alone approach towards a comprehensive and integrative one that addresses multiple objectives, across all sectors, at once.

Galvanizing action across multiple sectors has immense potential to tap into that innovative capacity and deliver solutions to the barriers outlined in the Agenda and the SDGs. For example, think tanks and academic institutions can also help accelerate the SDG process through their engagement in policy development, identification of determinants of success, measurement of policy outcomes, and role in ensuring that the generation, translation and dissemination of knowledge reach marginalized populations more quickly.

In addition, Health in All Policies (HiAP) is a useful tool for policymakers and government officials to address the SDGs. PAHO recognizes that action on health that synergizes with other sectors needs to be built into a legal, financial and organizational architecture. HiAP has been the source of both considerable enthusiasm from Member States and significant investment by PAHO, particularly in light of the interdependent and multisectoral framing of the 2030 Agenda. With respect to all of the SDGs, HiAP will help promote health on a more sustainable level through multisectoral partnerships, looking at both how the health sector can contribute to other sectors and vice versa.

The Region of the Americas is the first WHO region to adopt a Regional Plan of Action on HiAP. Drafted by PAHO with significant input from Member States and regional and global experts, the Plan of Action marks a significant milestone in the global acceptance of the HiAP approach to encourage collective and coordinated action for health. The PAHO Task Force and Working Group on HiAP and the SDGs was established in May 2015 to identify and optimize strategic priorities for using multisectoral approaches to achieve the SDGs in the Region of the Americas. In light of this, a series of strategic guiding documents were produced on harmonizing the HiAP and SDGs agendas, as well as a Concept Note and Reference Note.

In addition, several HiAP capacity training workshops were organized to instruct public health professionals and technical experts from the Region of the Americas on strategies to incorporate the tools needed to successfully place health at the crux of policymaking. Following strategic discussions, the National Institute of Public Health (INSP, Mexico), Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ, Brazil) and Latin American School of Social Sciences (FLACSO, Chile) were selected as key institutional partners to carry this ambitious agenda forward in the Americas. Four training workshops were conducted in Suriname, Mexico, Brazil and Chile. A recent Strategic Evaluation of Capacity Building for HiAP in the Region of the Americas, aimed to review progress, evaluate strengths and weaknesses of the overall program thus far, and plan for next steps, highlighted using the 2030 Agenda and its SDGs as an entry point for countries to utilize Health in All Policies.

### *Coordination (Conflicting Agendas)*

One of the main challenges for HiAP is ensuring that all sectors are aware of the health impacts of their decisions and that health is successfully integrated into their policies. Advancing HiAP will require further advocacy, in line with the 2030 Agenda, demonstrating that public health challenges can no longer be addressed merely through technical actions, but must be accompanied by political action within and beyond the health sector. It is important to consider that different actors have numerous diverging interests and often times the aims of one sector directly conflicts with those of another. Areas of common interest and opportunities, such as win-win strategies and mechanisms, must be identified as a way of maximizing co-benefits while minimizing the negative effects on health.

### *Country-Specific Needs & Priorities*

Changing demographics throughout the Region have become a prominent cause for concern. Inequities and inequalities vary within and between countries, indicating a need for country-specific contexts to be taken into consideration in the development of appropriate programs and policies. Country focus is a core institutional principle for PAHO, and the 2030 Agenda creates a novel opportunity to revise country cooperation strategies (CCSs) in the context of the immense global and Regional momentum behind the SDGs to ensure an inclusive and results-oriented approach to securing effective implementation of the SDGs.

### *Financing*

National budgetary constraints demand a thorough analysis to strategically select which targets will be emphasized and how they will be financed. Achieving sustainable development is a challenge for all countries and requires action from a broader range of investors. While investment from the public sector remains fundamental, it is unrealistic that the public sector alone has the capability to meet the demands required of advancing the SDGs. A financially feasible development agenda will require domestic public resources and traditional sources of financing for development, such as official development assistance, as well as private investment, innovative mechanisms for funding to address structural threats to health, and the use of regulations to ensure compliance with national priorities and legislation.

Despite these challenges, the Addis Ababa Action Agenda, adopted in July 2015, was the first step toward developing a new and innovative financing framework. It proposes an array of mechanisms for countries and stakeholders to effectively mobilize financial resources for the achievement of the SDGs, taking into particular consideration the challenges of middle-income countries like many of those in the Americas. The first regional consultation on financing for development took place in Santiago, Chile in March 2015, allowing the Region's perspective and priorities to be fully reflected in the process.

### *Monitoring and Evaluation*

Monitoring inequities and their underlying causes is a challenge to information systems, which require changes to the types of data the health sector collects and adjusting the tools and mechanisms in which this data is collected. It entails choosing basic health indicators, appropriate stratifying criteria and good indices for both inequities and inequalities. The monitoring and evaluation processes should take advantage of preexisting health- or governance-related structures and frameworks whenever possible to serve as a guide. During the planning period, it is important to identify key partners in and out of government, specific focus areas, key indicators of progress, and a timeline for evaluation. It is especially important to establish equity-sensitive monitoring tools to show which populations are experiencing improvements and increased access to services while highlighting gaps that impede progress in addressing the needs of the most vulnerable and marginalized communities.

### *Urbanization*

Rapid urbanization will be the defining trend over the next several decades. It is estimated that by 2050, 70% of the world's population will live in cities. In 2015, the population of the Americas was 992.2 million (13%) of the world's population. The Region of the Americas presents the highest percentage of urbanization (81%) in the world. Though the trends of urbanization are highly interdependent, multi-level and complex, one fact is clear: the adverse effects of these conditions are increasingly concentrated among the urban poor, generating notable health inequities between the richest and poorest urban populations. Aggravated by poor strategic planning, the ability of urban centers to meet the needs of their entire population has become a persistent challenge that will inhibit truly sustainable development. If the 2030 Agenda is to effectively foster health and well-being in a way that advances equity, the importance of urban centers to human lives and livelihoods must be fully considered. Strategies from multiple sectors must be put to work to reduce inequities and to influence the determinants of health associated with rapid urbanization.

## **PMA: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS / WFP: WORLD FOOD PROGRAMME**

### **WFP's Integrated Roadmap**

In September 2015, world leaders came together to establish a comprehensive framework for global action to achieve sustainable development in its three dimensions —economic, social and environmental in a balanced and integrated manner. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development sets forth a people-centred global framework for achieving sustainable development and ending poverty, hunger and inequality.

The 2030 Agenda embraces the Secretary-General's Zero Hunger Challenge and reflects it in Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) – End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. The 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are intended to be all encompassing and define global actions for the next 15 years including humanitarian assistance within the context of broader development progress objectives with a strong commitment to leaving no one behind. These actions will be carried out at the country level, where national contexts, priorities and strategies will guide the work of governments, other partners and WFP.

At WFP we are at the crossroads of a historic time with the Executive Board approval of the Integrated Road Map. Implementation of this transformative package (approved in November 2016) will support maximizing our results in the field to help build a better future for the people we serve by saving and changing lives, focusing first on the people in the greatest need.

The Integrated Road Map is a new and comprehensive architecture which links four inter-related corporate components – the Strategic Plan (2017-2021), the Policy on Country Strategic Plans (CSP), the Financial Framework Review and the Corporate Results Framework.

This new approach will allow the organization to design and deliver coherent portfolios, instead of the current project-based approach. Under this approach, Country Offices will be better positioned to support the countries in which WFP operates through an increased emphasis on maximizing and measuring results within country strategic plans.

This integrated package re-aligns WFP's strategy, programme structure, financial management and reporting to transform WFP's ability to help countries achieve the Sustainable Development Goals by 2030, prioritizing SDG 2, "End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture" and SDG 17, "Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development."

This integrated approach will help in the design of better programmes aligned with national priorities to serve people more effectively and efficiently and support governments, better communicate our value, better allocate resources, learn from performance, maintain flexibility, increase transparency, and better collaborate with partners.

As part of the integrated approach, WFP aspires to implement CSPs in all the countries where it has an operational presence. CSPs are informed by national zero hunger strategic reviews that ensure the alignment of WFP operations to national priorities to achieve full food security and nutrition.

The purpose of conducting a National Zero Hunger Strategic Review is to support efforts of the government and others partners to eliminate food insecurity and malnutrition consistent with SDG 2 to "end hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture".

The review as a country led exercise, provides a comprehensive analysis of the challenges a country faces in achieving Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) by 2030, through extensive analysis and

consultations involving a wide range of government stakeholders as well as civil society, private sector, donors and international organizations.

Although focused on SDG 2, the interdependent nature of the 17 SDGs mandates that the strategic review incorporates the multi-sectoral dimensions of food insecurity and malnutrition. Achieving SDG 2 supports progress towards other SDGs and vice versa. As such, cross-sectoral and cross-institutional partnerships are required to achieve the 2030 Agenda.

The review's findings and priority actions are a required input for WFP's CSP. They inform WFP's strategic orientation in a country and support the alignment of WFP's portfolio of assistance with those of key stakeholders, fostering synergies, impact and visibility of WFP's work.

The formulation of a CSP is an analytical and consultative planning process which defines WFP's assistance portfolio in support of national priority actions for zero hunger and/or humanitarian plans and in line with UNDAF/HRP outcomes. CSPs benefit from the findings of a thorough national zero hunger strategic and seek to shape and promote WFP's added value, foster engagement with national and humanitarian stakeholders and donors, and convene partners around a common approach to eliminating hunger.

CSPs are being developed in line with the planning processes of governments and United Nations country teams and CSP Strategic Outcomes, outputs and activities should be aligned with those of WFP partners. Additionally, CSPs will be vehicles for resource mobilization and management. They will ensure compliance with Board decisions and adhere to guidelines and procedures regarding the allocation of multilateral contributions for development. Requirements for the Country Portfolio Budget framework include an overview of all operations within a country office, in line with the CSP; a clear "line of sight" from strategy to planning to resourcing to results; a simplified and unified structure for implementing operations; clear demonstration of impact, cost-effectiveness and cost-efficiency; and improved accountability.

### **WFP in Latin American and the Caribbean**

In addition to the direct support provided to beneficiaries through our different programs and transfer modalities (WFP's 2016 Programme of work totalled over 300 million with more than 7 million beneficiaries), WFP's technical cooperation has focused on providing tools for the analysis of vulnerability and food & nutritional security and the generation of evidence which has contributed to a greater emphasis on public policies.

Moreover, currently WFP is conducting several studies to support countries on the generation of evidence such as:

- i) *The Double Burden Study* : In collaboration with ECLAC the study focuses on the economic and social costs associated with obesity, in addition to the significant costs associated with long-term consequences of chronic illness. The Double Burden study has focused up to now on Colombia, Ecuador, Mexico and Peru with the objective of developing an analytical framework that can be applied throughout the region;
- ii) *Migration and Food Security Study* : WFP, in coordination with the Inter-American Development Bank (IDB), the Organization of American States (OAS), the International Organization for Migration (IOM) and International Fund for Agricultural Development (IFAD), has led an in-depth study as a follow up to a 2015 exploratory research on the links between migration, violence and food security. The 2016 study comprises a comprehensive analysis of primary and secondary analysis with an emphasis on the Dry Corridor of the Central American Northern Triangle;

- iii) *Regional study on Reactive Social Protection to Emergencies*: The study aims to generate evidence, advocate and inform the practice on how to improve preparedness and response to emergencies through national social protection systems;
- iv) *Study on Nutrition-Sensitive National School Meals Programmes in LAC* : WFP, in partnership with the Latin America School Feeding Network (La RAE), is carrying out a study on nutrition-sensitive school meals programmes, focusing on 16 countries in the region.

### **Challenges for meeting the 2030 Agenda : WFP Regional Perspective**

Between 1990 and 2015, Latin America and the Caribbean managed to reduce by half the percentage and total number of people with malnutrition and the proportion of people who suffer from hunger. This success can be attributed to the political commitment of these countries to combat hunger pair with a general context of macroeconomic and political stability. As part of Agenda 2030, WFP is committed to eliminating food insecurity and undernutrition and meeting the Zero Hunger challenge in 15 years (SDG 2) and to achieve this goal, WFP is partnering with governments to support them in the achievement of their own sustainable development.

#### **Social Protection**

LAC is a unique region in that many of middle-income countries have advanced and highly institutionalized social protection systems, but inequality remains high. In the last decade, social protection programmes have extended in coverage in the region and a number of countries have moved to embed social protection systems within legislative frameworks. In most countries, minimum social protection coverage is a human right guaranteed by the state, using legislative authority to underpin social protection. Notwithstanding remarkable socio-economic progress in the region and increased investments in social protection, considerable portions of rural and urban populations continue to lack access to inclusive social protection programmes. Furthermore, poverty and inequality, and their correlates, malnutrition and food insecurity, still remain major issues in the region. Also urban and peri-urban bias of social programmes persist as the population is more concentrated, easier to reach, can comply with conditionalities, has access to supply-side services and more political voice. Remote rural communities and minority groups are not always prioritized, although equity principles are often embedded in public policies. Further analysis with a food security and nutrition focus is needed, within a Leaving no one behind approach to SDG 2 and area where WFP could assist.

#### **Access to adequate nutritious food and ending malnutrition**

In LAC, hunger still affects more than 34 million people and chronic malnutrition remains a major with a prevalence ranging from 5.5% to 48%. Although significant efforts have been made in recent decades to prevent and control micronutrient deficiencies some micronutrient deficiencies such as anemia, are still common, especially in the most economically disadvantaged and vulnerable groups. Despite progress in reducing the prevalence of undernourished people major challenges remain. In most LAC countries, undernutrition and micronutrient deficiencies coexist with rising levels of obesity, largely affecting schoolchildren and adolescents. Addressing micronutrient deficiencies and preventing overweight and obesity are two main priorities for action in this age group, including through integrated school meals and nutrition programmes. Many countries have not adjusted their nutrition and food policies and programmes—designed some decades ago for the prevention of undernutrition—to the new epidemiological profile in the region. However, a growing number of countries are implementing national strategies for the prevention of obesity.



### Sustainable food systems

Latin American and Caribbean as a region is highly vulnerable to climate change, especially due to the distribution of its population, the characteristics of its infrastructure, its dependence on natural resources and agriculture, and its limited capacity to fund additional adaptive processes. Also, the region is characterized by the frequency of natural disasters that affects the most vulnerable population with the greatest impact in rural populations, indigenous and / or African descendants, pregnant women, children under 5 years of age and People with HIV, most of whom are poor.

For example, the countries that make up the Dry Corridor of Central America, El Salvador, Guatemala and Honduras face frequent and recurring droughts. These are generally associated with the meteorological phenomenon known as El Niño and they are responsible for having brought about a situation of crisis in the region, including natural disasters and economic problems both at the national and regional level. The situation is further exacerbated due to extensive deforestation, soil degradation and water scarcity. Of the 10.5 million people who live in the region, 60 percent suffer from poverty and it is estimated that in 2016, the worst drought in 30 years left 3.5 million people in need of humanitarian assistance and another 1.6 million moderately or severely food insecure. Small-scale grain producers and rural communities are the most vulnerable to and most affected by these droughts. Droughts lead to a loss of livelihood, compromise food and water security, increase levels of malnutrition especially among children and lead many to migrate to already over-populated urban centres. Currently, vulnerable populations in this region are dealing with the loss of two consecutive crop harvests as a result of these meteorological phenomena.

### Macro-economic environment and funding

For LAC, policy coherence at the national level is indispensable, specifically with regards to social spending, which is understood as the means to guarantee enough resources to reach the sustainable development agenda on social dimensions such as health, education, nutrition, social protection, poverty alleviation and gender equality, among others. Poverty alleviation will have to translate into specific resources assigned to social protection and assistance programs and specific targets such as eliminating hunger and malnutrition.

As the countries move into the 2030 Agenda the LAC region is facing the difficult dilemma of attracting investment in areas that require capacity building and long term investment. A challenge for the region is to remain competitive on the global stage while aiming at promoting sustainable development and the expansion of its internal capacities.

Therefore in order to achieve inclusive and sustainable development and attain the new targets set by the 2030 Agenda, LAC will have to adapt to the ever increasing financial and institutional pressures, ensure access to markets and new financial instruments, as well as implementing environmentally sustainable solutions through a strong multi-stakeholder partnership approach. Diversifying its donor base is particularly important for WFP given that it is an organisation that is 100% voluntary funded.

**PNUD: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO /  
UNDP: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME**

**Institucionalización y pasos hacia la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe**

**Introducción**

Con la adopción de la agenda 2030 los países del mundo se han comprometido a buscar una alianza renovada donde todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), presentando así una visión holística del desarrollo. El conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el pilar principal de la Agenda, se ha convertido no solo en un agenda común, también es un lenguaje compartido que alinea los esfuerzos/ trabajo de diferentes actores del desarrollo.

En este documento se presenta el camino recorrido por los países de la región para asumir el reto de cumplir los ODS. En el documento se ilustra cómo se está empezando a integrar la Agenda 2030 institucionalmente en visiones, estrategias y planes a nivel nacional, subnacional y local en América Latina y el Caribe.

El documento se estructura siguiendo la incorporación de los ODS en el ciclo de política pública a nivel nacional y local, en la que se alinea el proceso de abogacía, planificación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones encaminadas al logro de la agenda 2030.

El documento estará organizado en cinco secciones, cada una estructurada en torno a una pregunta orientadora, brindando ejemplos específicos de países de la región y como incorporan los ODS en ese momento del ciclo de política pública.

Las secciones son:

- Los ODS en el ciclo de política pública en América Latina y el Caribe
- ¿Cómo se incluyen los ODS en una visión de futuro deseado?
- ¿Arreglos institucionales?
- ¿Cómo se incorporan en los instrumentos de planificación?
- ¿Financiación privada?
- ¿Cómo se define y evalúa el éxito de las acciones propuestas?
- Conclusiones y Recomendaciones

### **Los ODS en el ciclo de política pública en América Latina y el Caribe**

Como lo señala el párrafo 55 de la Agenda 2030, “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales. (UNGA, 2015)

En la práctica, esto se traduce en que para lograr alcanzar los ODS, los principios de la Agenda 2030 deben estar integrados en los instrumentos de planeación nacionales (UNDG, 2016). Es bajo este marco analítico que el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG por sus siglas en inglés) ha adoptado a partir del 2015 un enfoque común para un apoyo a la implementación de la Agenda 2030 que sea eficaz y coherente, bajo el acrónimo «MAPS» (**M**ainstreaming, **A**cceleration, **P**olicy **S**upport por sus siglas en inglés). MAPS significa Integración, Aceleración y Apoyo a Políticas Públicas. El marco analítico de MAPS refleja el ciclo de planeación e implementación de políticas, que si bien es diferente en cada país, en general tiene los siguientes momentos (UNDG, 2016):

1. Fijar la agenda pública
2. Planeación de políticas
3. Implementación de políticas
4. Monitoreo & Evaluación

En las siguientes secciones se muestra como se han incluido los ODS en cada uno de estos momentos.

#### **¿Cómo se incluyen los ODS en una visión de futuro deseado?**

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible constituye en sí misma una visión compartida de futuro. Los ODS son el resultado de un proceso incluyente que contó con participación de los gobiernos, sociedad civil, el sector privado, y academia quienes participaron en los diálogos consultivos de la Agenda de Desarrollo post 2015.

En América Latina más de 15 países (UNDG, 2013) participaron en las consultas y adelantaron procesos de consultas nacionales, subnacionales, y temáticos. Los resultados del diálogo no solo informaron la agenda global, también alimentaron los procesos de planeación nacional y contribuyeron a la apropiación del concepto del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en **Perú** el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021 - Plan Bicentenario, formulado en 2011, fue revisado para reflejar los resultados del proceso nacional de consulta Agenda de desarrollo post 2015 que recoge los resultados de 60 consultas regionales realizadas entre noviembre del 2012 y marzo del 2013.

### *Cuadro 1 Sociedad civil y ODS*

La Agenda 2030 indica, tanto en su preámbulo como en el detalle de los Objetivos y Metas, que para que estas se cumplan se requiere una alianza para el desarrollo revitalizada en la que están llamados a participar de su implementación en forma activa también el sector privado y la sociedad civil. Iniciativas en marcha para la movilización de actores de la sociedad civil alrededor de la implementación de la agenda 2030, por ejemplo:

- **Argentina:** el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, CENOC, está adelantando una encuesta para vincular Organizaciones de la Sociedad Civil en la puesta en marcha de los ODS.
- **Brasil:** Estrategia ODS es una coalición (entre cinco existentes en el país) que reúne a la sociedad civil, el sector privado, el gobierno local y organizaciones académicas para ampliar y calificar el debate sobre los ODS en Brasil y movilizar, discutir y proponer medios efectivos para implementar esta agenda en el país. Las partes interesadas firman un pacto de adhesión a los principios y compromisos de la coalición y, asumen la responsabilidad de contribuir a la implementación de los ODS en sus contextos específicos.
- **Jamaica:** la Hoja de Ruta para la implementación de los ODS (UNDP, 2016) propone una campaña nacional de divulgación para sensibilizar al público y para involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para asegurar que todas las voces sean escuchadas, especialmente de segmentos de la sociedad que han quedado fuera de los procesos de planificación anteriores.
- **México:** fue el país de la región con más participantes (**1,978,499 personas**) en la consulta abierta Myworld<sup>1</sup> tuvo buena acogida y nutrida participación e incluso se realizó a nivel sub-nacional en los estados de Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

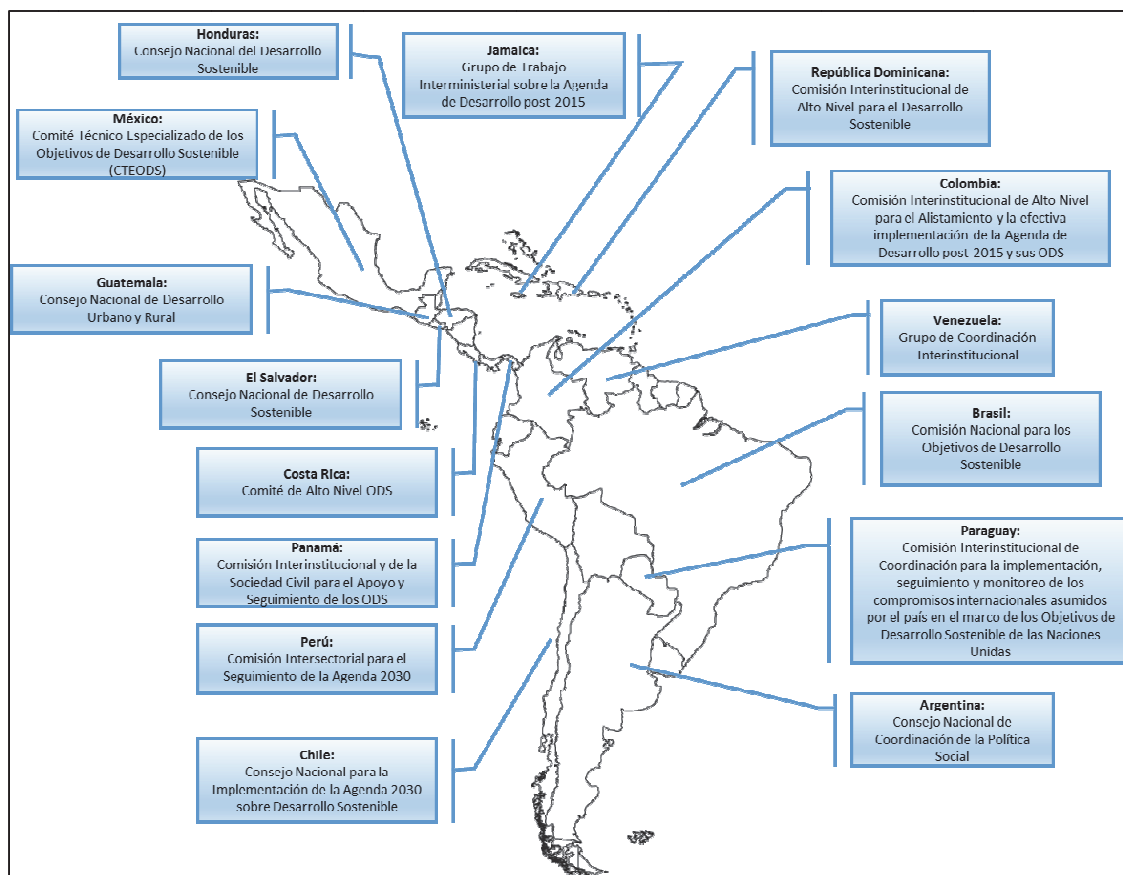
#### **¿Qué institucionalidad se está utilizando para dar coherencia a la implementación de los ODS?**

El enfoque integrado implícito en los ODS requiere una mayor coordinación intersectorial. En esta sección se presentan los mecanismos de coordinación adoptados por los países de la región para el logro de los ODS. En la región se han identificado al menos quince (15) mecanismos interinstitucionales para la implementación de los ODS, como se observa en la Ilustración 1. Los países de la región han seguido dos enfoques, ya sea utilizar institucionalidad existente asignándole nuevas responsabilidades reflejando estos nuevos desafíos, o, crear una nueva institucionalidad específica para coordinar la implementación de los ODS.

<sup>1</sup> <http://data.myworld2015.org>

Los mecanismos e instituciones responsables de la implementación de la agenda 2030 tienen como objeto cumplir las siguientes funciones:

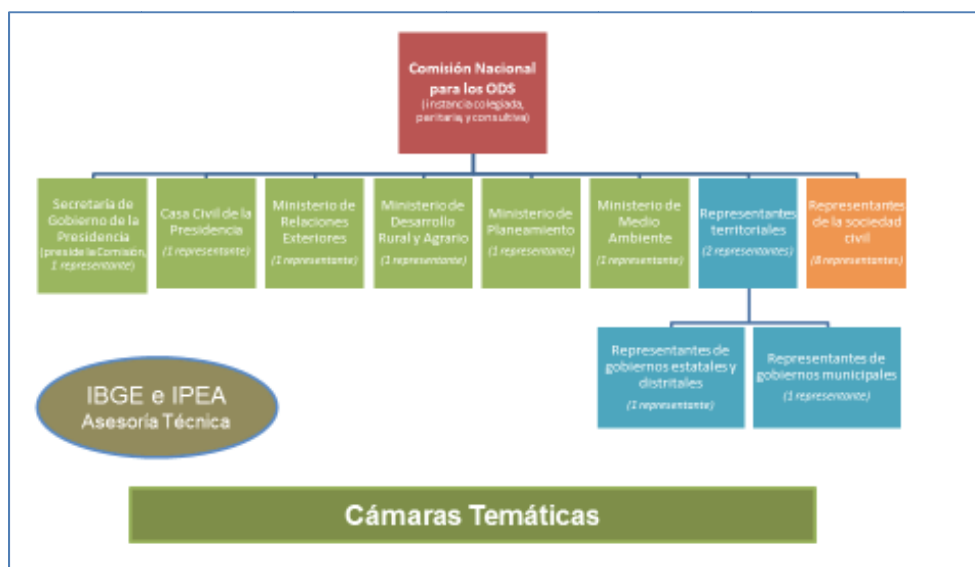
- Orientar política para el logro de los ODS,
- Coordinación institucional/intersectorial,
- Movilizar recursos y orientar el gasto,
- Gestionar alianzas,
- Reporte, monitoreo y evaluación, y
- Alineación de la cooperación internacional.



*Ilustración 1- Mecanismos de coordinación para la implementación de los ODS*

Algunos ejemplos de *Institucionalidades Nuevas* creadas en la región, presentadas a continuación, ilustran los diferentes enfoques que se han seguido en términos de la estructuración de las mismas, pero a la vez ilustrando cómo ejercen estas funciones:

- Brasil: Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible**, Ilustración 2, es un órgano colegiado de carácter consultivo, que forma parte de la estructura de la Secretaría de Gobierno de la República. Está compuesto por representantes de la Secretaría de Gobierno, el Presidente de la Cámara Civil de la República, y representantes de cinco carteras: los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Desarrollo Social y Agricultura, Planificación y Medio Ambiente, y representantes de los niveles federal, distrital y municipales, así como de la sociedad civil. Entre sus responsabilidades está: preparar un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030; proponer estrategias, instrumentos, acciones y programas; hacer el seguimiento y producir informes de avance; difundir buenas prácticas y promover la coordinación con los organismos públicos y entidades a nivel nacional y subnacional.



*Ilustración 2.- Estructura de la Comisión Nacional para los ODS de Brasil*

- Panamá: Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el apoyo y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.** A través del Decreto Ejecutivo 393 del 14 de septiembre de 2015 (República de Panamá, 2015), el país adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un marco de referencia para el desarrollo, y establece una Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil, adscrita al Gabinete Social, para su apoyo y seguimiento, esquematizada en la Ilustración 3. La Comisión está presidida por el Ministerio de Desarrollo Social en su carácter de coordinador técnico del Gabinete Social y la Secretaría de Metas de la Presidencia y la Concertación Nacional para el Desarrollo como miembros.



*Ilustración 2 - Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento de los ODS de Panamá*

- **República Dominicana: Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible**, liderada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y diseñada con el objetivo de integrar los ODS en todos los instrumentos de planeación y la estrategia nacional de desarrollo. Vincula entidades públicas, privadas y ONG. Es innovadora respecto a otras mesas instaladas en cuanto vincula liderazgo de alto nivel del poder ejecutivo, como se observa en la Ilustración 4.



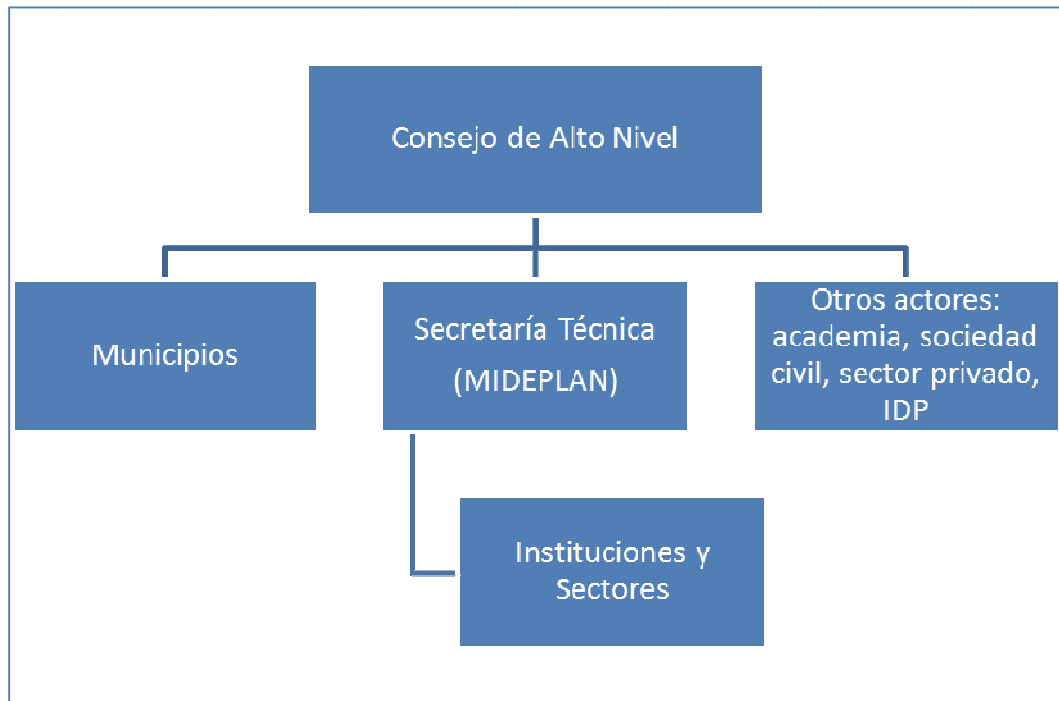
- El gobierno de **Chile** constituyó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por las carteras de Economía, Fomento y Turismo, de Medio Ambiente y de Desarrollo Social. Esta última a cargo de la Secretaria Técnica del Consejo. Las principales funciones de este órgano son las de asesorar a la Presidenta de la República en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030; servir de instancia de coordinación a nivel nacional, acorde a los procesos que se realicen a nivel internacional; y servir de instancia de coordinación con organizaciones gubernamentales, internacionales, sector privado y/o sociedad civil. El trabajo de este consejo se operacionaliza a través de tres comisiones: Social, Económica y Medio Ambiental; además de la conformación de Grupos de Trabajo para abordar temas transversales, como se observa en la Ilustración 5. En las Comisiones y Grupos de trabajo para la Agenda 2030 participan representantes de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, ONG, Juntas de Vecinos y Universidades, entre otros. Asimismo, se constituyó la **Red Gubernamental de ODS**, que cuenta con representantes de 23 ministerios. A la fecha, el trabajo de esta red ha consistido en el levantamiento de información de las políticas y programas públicos que contribuyen al cumplimiento de cada uno de los ODS, así como de la información para la generación de indicadores que serán la base de los sistemas de monitoreo y seguimiento. En esta red también participan otros Poderes del Estado y Organismos Autónomos: representantes institucionales del Senado, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es la base de la interacción con otros actores en cuanto a la Agenda 2030.





*Ilustración 5.- Estructura del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Chile*

- Costa Rica** se convirtió en septiembre de 2016 en el primer país del mundo en firmar un Pacto Nacional por el cumplimiento de los ODS, como se ve en la Ilustración 6. Esto supone un pacto de Estado, firmado por el gobierno, el poder legislativo, y el poder judicial, junto con organizaciones de la sociedad civil y religiosas, el sector privado y de la ciudadanía. El Pacto tiene un carácter interinstitucional, en donde los tres poderes del Estado trabajan de manera coordinada y al mismo nivel jerárquico. Bajo este Pacto, el gobierno y sus ramificaciones ministeriales asumen el compromiso de trabajar con otros poderes del Estado y otros actores relevantes de la sociedad costarricense, incluyendo la participación de actores no gubernamentales y no estatales en la toma de decisiones con respecto a la Agenda 2030. Una implicación práctica de este Pacto es que trasciende administraciones, de forma que gobiernos futuros del país seguirán suscritos al Pacto en su compromiso de implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica, independientemente de su orientación política, fijando así unas metas de desarrollo nacionales alineadas con los ODS.



*Ilustración 6.- Institucionalidad del Pacto Nacional de los ODS en Costa Rica*

En algunos países la responsabilidad de la implementación de los ODS ha sido asumida por órganos preexistentes. Por ejemplo, en **Argentina** la puesta en marcha de los ODS es asumida por el **Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales**, creado en 2002 como un espacio de articulación para la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales nacionales y que entre sus funciones tenía el seguimiento a los ODM. El Consejo convoca a 20 Ministerios y otras instituciones bajo el liderazgo de la Ministra de Desarrollo Social.

En **México** se modificó el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODM para crear el **Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible**, CTEODS, con el modelo de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social. Se espera que en marzo de 2017 se publique el decreto de creación del Consejo Nacional para la Agenda 2030, un cuerpo colegiado con la participación de todas las secretarías de estado, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, la academia y los organismos internacionales para la implementación de los ODS. Este Consejo complementará las tareas de medición y monitoreo que realiza el CTEODS.

En otros países se han creado nuevos órganos para asumir esta tarea. La Ilustración 1 muestra la diversidad de mecanismos existentes en la región.

## Cuadro 2 Parlamentos

Los parlamentos de la región también se han alineado con la Agenda 2030.

De acuerdo con datos del BID, solamente en Brasil, Colombia, México, República Dominicana y Surinam el Poder Legislativo debate y aprueba el plan nacional de gobierno (García López & García Moreno, 2010). En dichos países se han dado los siguientes avances en el trabajo con los parlamentarios:

En Brasil y Colombia hay iniciativas para constituir frentes parlamentarios para abordar los ODS. Por ejemplo, en Colombia se constituyó la Bancada ODS en el Congreso para participar en la implementación; en Brasil la Cámara de Diputados, que es la cámara baja del Congreso Nacional de Brasil, estableció en diciembre de 2016 un frente parlamentario (asociación suprapartidista para mejorar la legislación sobre un tema específico) especial sobre los ODS, con la participación de 200 diputado y 9 senadores.

Por su parte República Dominicana y México han nombrado comisiones temáticas o delegado en gabinetes especializados el análisis de los temas relacionados con los ODS. El poder legislativo en México ha avanzado en identificar la contribución de su agenda y se promulgó un conjunto de trece reformas estructurales que contribuyen a diferentes ODS de la Agenda 2030. En el caso de México se destacan los resultados de la aplicación de la herramienta para el diagnóstico de capacidades legislativas de los parlamentos para la implementación de la Agenda 2030 desarrollada por la Unión interparlamentaria y el PNUD (UNDP, 2016). El diagnóstico de capacidades legislativas se encuentra en una etapa de implementación inicial, aún no se cuentan con resultados. El diagnóstico toma en cuenta, entre otras, el conocimiento de la agenda 2030 y la integración de los ODS en los mecanismos legislativos.

En todos los países de la región los parlamentos tienen funciones de debate y aprobación del presupuesto (García López & García Moreno, 2010). Para informar este rol, se ha avanzado en procesos de sensibilización sobre los ODS a los equipos parlamentarios. También se destacan las actividades de socialización realizadas con el apoyo del Parlamento Latino y el Parlamento Centroamericano y el SISCA (PARLACEN, 2016), como el Seminario Regional Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: el rol de los parlamentos, que se desarrolló en Panamá en diciembre de 2016 en el marco de la XXXII Asamblea General del PARLATINO, (PARLATINO, 2016).

En Perú, existe un pacto político por el que los gobernantes de elección popular se comprometen a promover medidas de política para impulsar el desarrollo integral e inclusivo, en línea con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de la COP 21. En el 2016 los candidatos al Congreso de la República firmaron compromisos políticos de acción parlamentaria conjunta con los cuales se ha de continuar impulsando las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos la COP 21.

### ¿Cómo se incorporan los ODS en los instrumentos de planificación?

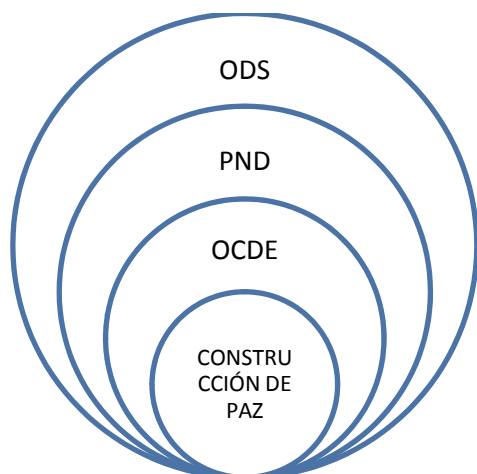
En junio de 2015 los países del caribe se dieron cita en el Simposio sobre los ODS para el Caribe en Puerto España, Trinidad y Tobago. En el evento desarrollado con el apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), participaron oficiales nacionales, académicos, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Entre todos identificaron como prioritarios para la agenda de desarrollo del Caribe 12 de los 17 ODS. Los ODS identificados como prioritarios para el Caribe son:

- **Objetivo 2.** Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- **Objetivo 3.** Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
- **Objetivo 4.** Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

- **Objetivo 5.** Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- **Objetivo 7.** Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
- **Objetivo 8.** Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- **Objetivo 9.** Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- **Objetivo 10.** Reducir la desigualdad en y entre los países
- **Objetivo 13.** Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos\*
- **Objetivo 14.** Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- **Objetivo 16.** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- **Objetivo 17.** Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Países como Colombia y Perú han construido sus planes de gobierno vigentes previo a la promulgación de los ODS, sin embargo han destacado la coherencia y alineación entre sus visiones nacionales y planes de desarrollo tanto con la Agenda 2030 las dimensiones del bienestar de la Agenda de la OCDE:

- **Colombia:** en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, se previó la necesidad de incorporar estrategias para dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Post-2015 y los ODS. Los tres pilares del PND (paz, equidad y educación), así como sus cinco estrategias transversales (Competitividad e infraestructura estratégica, movilidad social y transformación del campo, seguridad y justicia para la construcción de la paz, y buen gobierno) están alineadas con los ODS y 92 de las 169 metas ya están incorporadas en el Plan de Desarrollo. El Departamento Nacional de Planeación ve a los ODS como un elemento integrador de todas las agendas que actualmente adelanta el Gobierno en pro del desarrollo en el país: PND, la estrategia de Crecimiento Verde, las acciones para el ingreso a la OCDE y la construcción de la paz, como se observa en la Ilustración 7.



86% de las metas ODS tienen acciones de política pública relacionada  
 El PND “Todos por un nuevo País” incorpora 92 metas ODS a través de acciones concretas e indicadores  
 El Acuerdo de Paz de la Habana está alineado con 50 metas ODS

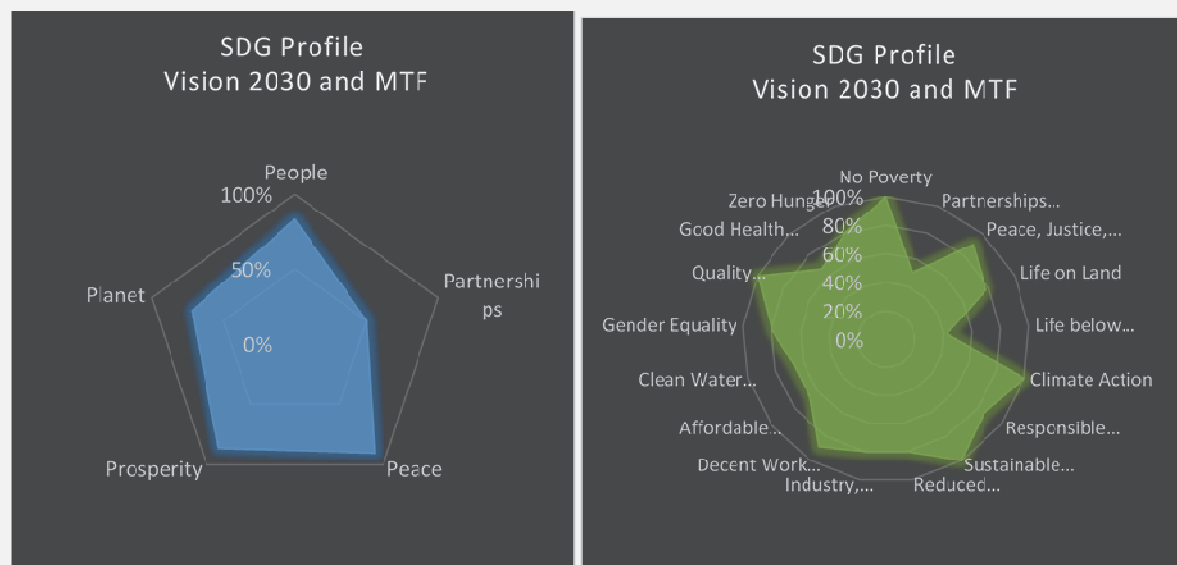
*Ilustración 7.- Relación del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia con otras Agendas prioritarias del País<sup>2</sup>.*

<sup>2</sup> Fuente: DNP, 2016

*Cuadro 3 Alineación de las agendas de desarrollo nacionales y subnacionales*

Los ODS han servido como un lenguaje común para alinear las prioridades locales y nacionales. Aquí se destacan las siguientes metodologías y mecanismos desarrollados para alinear la planeación sub-nacional con la Agenda ODS:

- **Argentina:** el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación (CNCPS) desarrolló la Guía para el proceso de adaptación de los ODS en el gobierno provincial donde plantea una ruta para la incorporación de los ODS como herramienta de gestión y planificación a nivel subnacional, e identifica momentos clave para el acompañamiento y asistencia técnica del CNCPS<sup>3</sup>.
- **Chile:** Para avanzar en la implementación de la Agenda a nivel regional y local, el gobierno ha diseñado una estrategia de participación ciudadana a través de la realización de encuentros y diálogos con actores regionales y locales, generando un espacio de encuentro y diálogo entre ciudadanía y Estado respecto de la implementación de la Agenda 2030 en el país. Así, se promueve la apropiación e involucramiento de la ciudadanía con ésta y permite identificar las expresiones territoriales de las brechas y desafíos que representa la Agenda para Chile.
- **Colombia:** el Departamento Nacional de Planeación DNP desarrolló un Kit para planeación territorial que promueve la alineación de los Planes de Desarrollo subnacionales con la Agenda de Desarrollo a 2030 y sus múltiples fuentes de financiación<sup>4</sup>.
- **Jamaica:** Los objetivos y metas de la Visión 2030 Jamaica reflejan una coherencia con las metas de los ODS de un 77%, cuyo distribución se observa en la Ilustración 8, e incluye un marco de indicadores de resultado a nivel sectorial y territorial, este último vincula los planes de desarrollo local a nivel de parroquia (UNDP, 2016).



*Ilustración 8 Alineamiento de las metas de la Visión 2030 Jamaica con los ODS*

<sup>3</sup> Guía disponible en: [http://www.politicassociales.gob.ar/public/documentos/seccion\\_publicaciones/publicacion2016-11-24-112150.pdf](http://www.politicassociales.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/publicacion2016-11-24-112150.pdf).

<sup>4</sup> La guía y sus instrumentos se encuentran en: <http://kiterritorial.co/>.

- **Perú:** Se crearon espacios de encuentro entre el Gobierno Regional y el Poder Ejecutivo (Gore-Ejecutivo) para mejorar la priorización y planeación regionales y su alineación con las políticas sectoriales en el marco de la Agenda 2030.
- **Surinam:** ha sido un pionero en el proceso de territorialización de los ODS. En este país se ha avanzado vinculando de manera activa a las comunidades, e incorporando voces multiculturales en la implementación de los mismos (Ministry of Regional Development Suriname, 2016).

### ¿Cómo se consideran/priorizan los ODS en los presupuestos/cuentas públicas

Aunque los gobiernos tienden a fortalecer la planificación, uno de los desafíos más importantes para los países de la región es la articulación de la planeación y el presupuesto para concretar los planes y lograr los resultados esperados (García López & García Moreno, 2010). La asignación de recursos para la implementación de acciones requiere de la alineación de los instrumentos de planeación desde los planes nacionales de desarrollo hasta los presupuestos locales:

- **Belice:** la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible (GSDS por sus siglas en inglés) es un documento de planeación de mediano plazo que suma las estrategias de crecimiento y reducción de pobreza y la Agenda de desarrollo sostenible de Belice. La GSDS se refleja en estrategias sectoriales de educación, energía y comercio en las que se vinculan las metas ODS. Para alinear la GSDS con el presupuesto para el año fiscal 2017/2018 los ministerios debían presentar sus presupuestos vinculados a objetivos e indicadores de dicha estrategia.
- **Costa Rica:** implementa un modelo de Gestión por resultados que incluye el presupuesto basado en resultados (PBR). Si bien en el modelo actual hay un encadenamiento entre la visión de desarrollo con los objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales, y los programas presupuestales, aún falta mejorar la alineación del plan de presupuesto. En 2017 el Mideplan implementará un piloto de planeación presupuestal en el sector social donde la asignación presupuestal se hará por programas vinculados a dimensiones IPM, y el sector seguridad y justicia se implementaran nuevas estructuras de presupuesto.
- **San Vicente y las Granadinas:** Estados insulares en desarrollo como estos son vulnerables a los efectos de los desastres naturales provocados por el cambio climático. La adopción de los ODS representa para ellos la posibilidad de beneficiarse de los recursos de mitigación y adaptación en el contexto de los ODS.
- **Ecuador:** implementa la metodología “Análisis del Gasto Público e Institucionalidad para el Cambio Climático” (CPEIR por sus siglas en inglés). La cuantificación del gasto público climático del Ecuador permite al país contribuir al acuerdo global de concretar acciones efectivas y eficientes de mitigación y adaptación y, adicionalmente, la construcción de un presupuesto con enfoque ambiental puede generar ganancias gracias, entre otras cosas, a la eficiencia de la gestión de recursos. El CPEIR también visibiliza la inversión que hace el país y por tanto puede servir como un insumo en los procesos de búsqueda de financiamiento internacional. La Ilustración 9 muestra el gasto climático en el período 2011-2015.

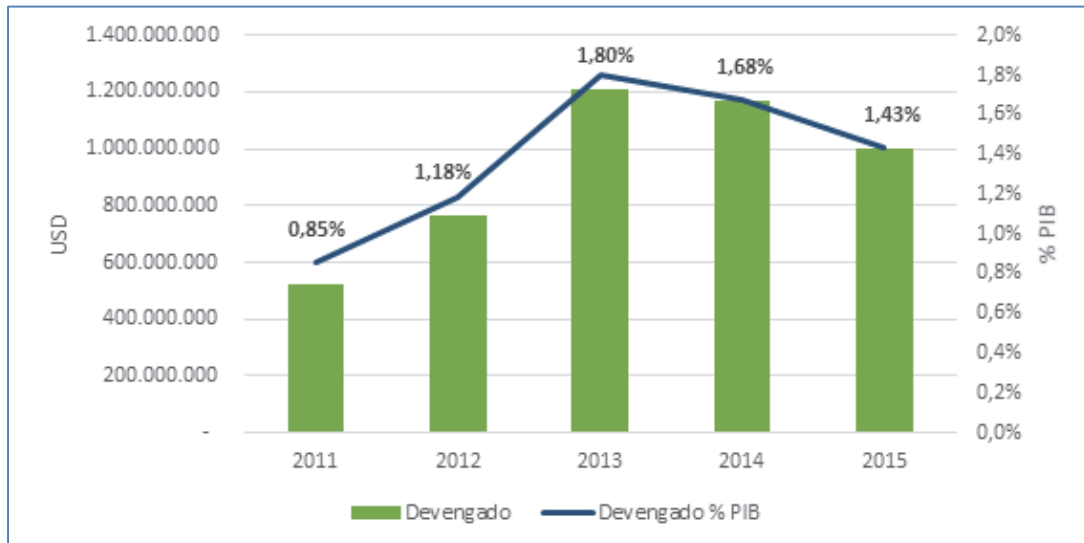


Ilustración 9.- Gasto público devengado en cambio climático<sup>5</sup>

#### Cuadro 4 Presupuestos

La adopción de la Agenda 2030 aún está muy reciente en los países de la región para mostrar avances en la asignación de recursos para el desarrollo sostenible, pero se pueden destacar las siguientes experiencias de presupuestos:

- México:** los presupuestos de género se están utilizando como una herramienta para incorporar las cuestiones de género en las políticas y presupuestos gubernamentales. Los presupuestos de género desagregan el gasto temáticamente en todos los sectores en un año. En México, los expertos de Equidad de Género están trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para desarrollar una política fiscal que destaque la contribución de la mujer a la economía y cómo se distribuye este ingreso. También están capacitando a trabajadores gubernamentales a nivel nacional, local y municipal sobre la igualdad de género y el desarrollo de políticas y presupuestos, con lo que se fomenta la conciencia pública sobre la igualdad de género (PAGE, 2016, pág. 61). Adicionalmente, es destacable la aplicación de la herramienta de análisis de alineamiento de los ODS con los documentos de planeamiento “*Evaluación Rápida Integrada*” (RIA, por sus siglas en inglés), desarrollada por el PNUD, para asociar los planes y programas sectoriales a los ODS. En esta misma línea, la Secretaría de Hacienda, con apoyo del PNUD, realizó un cruce entre los objetivos y metas de los programas presupuestarios con los ODS. También se vincularon los indicadores presupuestarios con los 231 indicadores de ODS. Este último ejercicio permitirá continuar estimando el monto de asignación presupuestal para la Agenda 2030 en México.
- Panamá:** la Comisión Interinstitucional de Apoyo y Seguimiento creada para la implementación de los ODS tuvo entre sus primeras acciones la alineación de los objetivos, programas y proyectos del Plan Estratégico de Gobierno con los ODS y

<sup>5</sup> Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador -Minfi, 2016. Resultados preliminares.

asegurar los recursos para su implementación (República de Panamá, 2015). El ejercicio mostró que el país tiene más de 2,000 iniciativas gubernamentales alineadas a los ODS, cuya ejecución está a cargo de 45 instituciones públicas y 400 organizaciones privadas; se estima que este portafolio movilizará USD \$21.000 Millones (Muschett, s.f.)

- **Perú:** ha avanzado hacia los presupuestos basados en resultados (RBB por sus siglas en inglés), liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con la Mesa Redonda para la Reducción de la Pobreza (MCLCP) y actores de la sociedad civil. Un efecto positivo es que 24 Planes Presupuestales Estratégicos-PPE que han sido priorizados para asignaciones presupuestarias y protegidos de las fluctuaciones en la disponibilidad presupuestaria. Estos incluyen programas sociales relacionados con la educación, la salud, la mortalidad infantil y la nutrición, y otros relacionados con la producción agrícola, la energía, el agua y la calidad ambiental (PAGE, 2016, pág. 62)

#### *Otras fuentes de financiación*

En foros regionales expertos y representantes nacionales coinciden en identificar como un desafío común la financiación de la implementación de la Agenda 2030. En este escenario, y siguiendo las recomendaciones de la Agenda de Acción de Addis Abeba, el sector privado se configura como una fuente de financiación fundamental para el desarrollo; aunque se debe tomar en cuenta que la dependencia del financiamiento privado, y en particular la Inversión Extranjera Directa (IED) no es deseable por su potencial impacto negativo en el desarrollo (CEPAL, 2015).

En la región la agenda 2030 ha despertado interés del Sector Privado y sus agendas de RSE como un marco de referencia para alinear sus esfuerzos. A continuación se mencionan algunas iniciativas de vinculación del sector privado para los ODS:

- **Argentina** el Global Compact en alianza con empresas consultoras privadas en temas Responsabilidad Social Empresarial, presentó un Estudio sobre el Sector Privado y los ODS en el cual se identifican oportunidades para el trabajo conjunto (Rigou Consultores, 2016).
- **Bolivia:** el gobierno boliviano enfoca sus esfuerzos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y la Agenda Patriótica 2025. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a través del Global Compact, ha encontrado en los ODS un referente para alinear sus estrategias de responsabilidad social empresarial.
- **Costa Rica:** Firmó un Pacto Nacional por el Cumplimiento de los ODS para la construcción de una agenda de compromisos e incidencia política para la implementación de los ODS. A él se adhieren Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, representantes de Gobiernos locales, sector privado, organizaciones sociales y religiosas y el sector académico, entre otros.
- **Ecuador:** el SNU viene trabajando en actividades de socialización y movilización de actores convocadas conjuntamente por entidades del gobierno nacional y por agencias del SNU. El sector privado ha manifestado interés en el desarrollo de una Agenda Productiva 2030 alineada con los ODS y en conformar una Coalición del Sector Privado para la implementación de los ODS.
- **México:** Alianza por la Sostenibilidad es una plataforma de diálogo y acción que incluye a 80 empresas mexicanas y multinacionales operando en México, para intercambiar información sobre la integración de los ODS en los modelos de negocio y diseñar proyectos de cooperación



internacional alrededor de la Agenda 2030. La Alianza se organiza en comités de trabajo por afinidad temática: Energía Asequible y no Contaminante, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo Responsables, Educación e Inclusión Social. Por otra parte, también se contó con participación de las instituciones de gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la academia, el poder legislativo y el sector privado en la construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario de México para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés). La academia participó en el “Conversatorio sobre la Implementación Nacional de la Agenda 2030”.

### ¿Cómo se mide y evalúa el éxito de las acciones propuestas?

Uno de los frentes en los que se muestran más avances en los países de la región durante el 2016 es en el mapeo de la información disponible para el monitoreo de los ODS para identificar brechas y avanzar en definir marcos nacionales de monitoreo. Se destaca la experiencia de Perú que ya cuenta con una plataforma en línea de fácil consulta para el seguimiento a los ODS: al visibilizar las sinergias entre diferentes metas y objetivos tiene el potencial de facilitar el diálogo intersectorial (UNDG, 2016).

- **Perú:** Agosto 2016 INEI crea la plataforma “Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS: objetivos para transformar el país”, portal web con matriz de instituciones responsables de la producción de los indicadores ODS y con una base de datos dinámica<sup>6</sup>. Perú también asumió el liderazgo del diálogo mundial sobre el monitoreo participativo para la rendición de cuentas (PMA), uno de los seis principales medios de implementación propuestos para el marco de los ODS. Con base en una consulta nacional en 2014, tanto los actores estatales como de la sociedad civil creen que la PMA debe desempeñar un papel importante en el desarrollo nacional sostenible para el año 2030, incluso en la implementación y localización de los ODS (PAGE, 2016, pág. 65).
- En **República Dominicana:** realiza el seguimiento de los resultados vinculado a ejecución presupuestal y alineación con los ODS a través de una plataforma en línea (UNDG, 2016).
- **Belice** ha diseñado un nuevo arreglo institucional para hacer el seguimiento a su estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible, como se ve en la Ilustración 10. Esta vincula a diferentes instituciones estatales así: en el nivel técnico se encuentran los comités técnicos y sus mesas de trabajo, dónde se recopila y analiza la información. El Instituto Estadístico de Belice, responsable del repositorio central de datos preside las mesas de trabajo de los comités técnicos; el Ministerio de Desarrollo Económico, MED, que hace la coordinación de políticas y del proceso de M&E. El CEO caucus, conformado por los gerentes ministeriales, recibe esta información consolidada en informes de M&E para hacer el direccionamiento de política basados en la información y reportes.

---

<sup>6</sup> El sistema de monitoreo puede consultarse aquí: <http://ods.inei.gob.pe/ods/inicio.html>

*Ilustración 10 Arreglo institucional de Belice para el seguimiento de los ODS*



La producción y análisis de información y seguimiento a los ODS ha servido para generar alianzas, por ejemplo en **Brasil** el mapeo de la información ha sido un punto de entrada para convocar aliados en torno a la agenda 2030, en **Ecuador** hay una iniciativa para conformar un Observatorio ODS con el auspicio de la Comisión Europea.

- **Brasil:** El Grupo Asesor de la ONU sobre la Agenda 2030 publicó en 2015 el informe “Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: insumos iniciales del Sistema de las Naciones Unidas en Brasil sobre la identificación de indicadores nacionales relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El informe fue construido con dieciséis grupos temáticos durante nueve meses, identificando alrededor de 570 indicadores y destacando algunos vacíos de información para algunos objetivos. A nivel nacional, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha convocado a las instituciones oficiales que producen información y datos, para coordinar esfuerzos hacia la definición de los indicadores nacionales. Además, el IBGE y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) asesorarán a la mencionada Comisión Nacional para los ODS en el establecimiento del marco oficial nacional de indicadores.

Por otra parte, Brasil creó un sistema de monitoreo de los objetivos y metas relacionados a las metas de los ODS, que puede facilitar el monitoreo de los ODS en el gobierno federal. Desde el 2016 adelanta el mapeo de las políticas/programas del Gobierno con impactos en los ODS. Esto permitirá reflejar en el Sistema de Planificación y Presupuesto (SIOP), como la implementación de las actividades incluidas en el Plan Plurianual (PPA) de todas las instituciones gubernamentales contribuye a los ODS (Departamento de Planejamento e Avaliação – DEPLA; Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos – SEPLAN; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, 2016).

Otros países buscan como sus sistemas nacionales de seguimiento a la política social pueden generar información para el seguimiento de los ODS:

- **Costa Rica:** genera datos e información del Índice de Pobreza Multidimensional, el registro único de beneficiarios e información georreferenciada para medir el impacto de los programas en la calidad de vida de las personas.
- **Honduras:** sinergia con indicadores de la Plataforma de Gestión que trabaja sobre las dimensiones de Vida Mejor: ingresos, seguridad alimentaria, vivienda, empleo, emprendimiento, empleo, educación y salud.

### Conclusiones

América Latina y el Caribe fue un importante protagonista en el año 2015, que vio cambiar el paradigma de desarrollo global, a través de la adopción de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. También fue un líder en las negociaciones que complementan la Agenda 2030, como la Cumbre de Sendai sobre riesgo, la Agenda para la Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, la cumbre de París sobre Cambio Climático, y, en el 2014, la Senda de Samoa para SIDS.

A un año de la aprobación de la Agenda 2030 en los países de la región ya hay un reconocimiento explícito de los ODS y la Agenda 2030 como referencia orientadora de las políticas nacionales y subnacionales. La región ha traducido el impulso creado en las negociaciones intergubernamentales en la incorporación explícita de los principios de la Agenda dentro de sus propios mecanismos y ciclos de planificación y presupuesto. La región está también diseñando los mecanismos institucionales necesarios que respondan a la lógica del desarrollo sostenible, es decir, a una visión de desarrollo multidimensional, integrada, basada en los derechos humanos y que se asegure de no dejar a nadie atrás.

El enfoque integrado implícito en los ODS requiere una mayor coordinación intersectorial. A pesar de lo incipiente del proceso, ya existe una diversidad en el nivel de implementación. En la región se han identificado al menos quince (15) mecanismos interinstitucionales para la implementación de los ODS. Los países de la región han seguido dos enfoques, ya sea utilizar institucionalidad existente asignándole nuevas responsabilidades reflejando estos nuevos desafíos, o, creando una nueva institucionalidad específica para coordinar la implementación de los ODS.

Independiente de si es el mecanismo utilizado es preexistente, o uno nuevo, los mecanismos e instituciones responsables de la implementación de la agenda 2030 tienen como objeto el cumplir las siguientes funciones:

- Orientar política para el logro de los ODS,
- Coordinación institucional/intersectorial,
- Movilizar recursos y orientar el gasto,
- Gestionar alianzas,
- Reporte, monitoreo y evaluación, y
- Alineación de la cooperación internacional.

La incorporación de los principios de la Agenda 2030 sigue los ciclos de planificación, es decir, aquellos países cuyos ciclos han coincidido con el de la Agenda 2030 tienen estos principios incorporados en los documentos de planificación por diseño. En el resto, si bien el reflejo de los ODS en la planificación puede ser alto, como lo muestran los ejercicios de Evaluación Integrada Rápida realizada en varios países de la región<sup>7</sup>, el enfoque está en la implementación de los planes existentes de una forma que reflejen un enfoque integrado.

La conjugación de políticas y acciones concretas de manera intersectorial con una visión integrada, es el que se espera en la Agenda 2030. Este enfoque tiene el potencial de crear eficiencias en la inversión en la medida que se identifiquen e implementen acciones catalíticas o de aceleración, que puedan generar resultados positivos en varios ODS y metas relacionadas simultáneamente. Por otro lado, este enfoque conlleva como principal desafío la negociación intersectorial y entre múltiples actores públicos y privados, alrededor de los llamados “trade –offs” o “compensaciones”. En este contexto, los aspectos de gobernanza de la Agenda 2030 se tornaran cada vez más cruciales.

### Bibliografía

- CEPAL. (2015). Informe del comité de expertos gubernamentales de alto nivel (CEGAN). . *Vigésimo período de sesiones consulta regional de América Latina y el Caribe sobre financiamiento del desarrollo*. Santiago de Chile.
- Departamento de Planejamento e Avaliação – DEPLA; Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos – SEPLAN; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP. (2016). Plan Plurianual -PPA 2016-2019 y ODS . *Planificación y Gestión Pública en la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. CEPAL.
- García López , R., & García Moreno, M. (2010). La gestión para resultados en el desarrollo Avances y desafíos en América Latina y el Caribe. BID.
- Ministry of Regional Development Suriname. (2016). Localizing the Sustainable Development Goals in Suriname. *Mainstreaming the Sustainable Development Goals for National Development*. Ministry of Finance Suriname.
- Muschett, M. (s.f.). Avances en la implementación de la Agenda 2030 en Panamá.
- PAGE. (2016). *Integrated Planning & Sustainable Development: Challenges and Opportunities*.
- PARLACEN. (2016). *Firma de Memorandum de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Social Centroamericana*. Obtenido de <http://www.parlacen.int/Prensa/Prensa/tabid/145/EntryId/2208/Firma-de-Memorandum-de-Cooperacion-entre-el-Parlamento-Centroamericano-y-la-Secretaria-de-Integracion-Social-Centroamericana.aspx>
- PARLATINO. (2016). *Los ODS comienzan a ser parte de la vida política en ALC*. Obtenido de <http://www.parlatino.org/es/cdn/item/1768-los-ods-comienzan-a-ser-parte-de-la-vida-politica-en-alc-senadora-alcala>
- República de Panamá. (14 de 09 de 2015). Decreto Ejecutivo No. 393. *Que Adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Dicta Otras Disposiciones*. Ciudad de Panamá.

<sup>7</sup> México, Republica Dominicana, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago.

- Rigou Consultores. (2016). *Empresas y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una Agenda Compartida*. Buenos Aires.
- UNDG. (2013). *Inicia la conversación global: puntos de vista para una nueva agenda de desarrollo*.
- UNDG. (2016). *Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country Teams*. New York: UNDG.
- UNDG. (2016). *The Sustainable Development Goals are coming to life. Stories of country implementation and UN support*.
- UNDP. (2016). *A Roadmap for SDG Implementation in Jamaica*. New York: UNDP.
- UNDP. (7 de 12 de 2016). Presentación en el 13a Asamblea Plenaria de ParlAmericas. *Fortaleciendo parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible*.
- UNGA. (18 de September de 2015). A/70/L.1. *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. New York, New York, USA: UN.

**PNUMA: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE /  
UNEP: UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)**



**Environmental data and information needs in Latin America and the Caribbean<sup>i</sup>**

*A contribution from UN Environment to the Report from ECLAC for the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable Development*

10<sup>th</sup> February 2017

---

The transition towards a more sustainable society in Latin America and the Caribbean requires the embracement of a new paradigm that would place access to high quality, disaggregated and open environmental and socio-economic data at the forefront of the regional undertakings. Such framework is a critical instrument to support evidence-based national and regional policy and decision-making, including to track progress on the implementation of the SDGs and other global and regional agreements.

The flexible integration of data systems, both in terms of infrastructure and networking can support fit-for-purpose monitoring, early warning, assessments and reporting, decision-support, community awareness and empowerment, grounded in evidence-based management principles.

In addition, timely, accurate and relevant knowledge and data is crucial to establish a solid and active communication exchange with the society and to create public concern on environmental issues. In this regard, a major challenge in the LAC region is the need to disseminate and make the data accessible to all stakeholders, notably national institutions and entities but, also, local communities and the general public.

Most of the countries in the LAC region still require to change or adapt their national policies and programmes to fully exploit the opportunities provided by the so called data revolution; however, data revolution is already influencing roles and perspectives on how environmental information is owned, managed, shared and accessed in the region. Despite the existing socio economic differences between different countries within the region, Latin America and the Caribbean has demonstrated to have the scientific and technological background needed to support major environmental progress through effective data and monitoring systems.

The intense activity around this transition is a central aspect of the science-policy interface and for informed decision-making for sustainable development. This critical role of science-policy interface and the need to strengthen and promote the use of national and regional indicator frameworks and to intensify the development of environmental integrated assessments has being mandated by the United Nations Environment Assembly through its Resolution 2/5, and by the Forum of Ministers of Environment of Latin America and the Caribbean (through Decisions 1 and 2 from the XX Meeting).

In many LAC countries, despite national and regional efforts to organise and digitise the environmental data collection process, there still exist significant challenges to be overcome. Technological and economic barriers pose a real challenge as information technology is evolving at ever increasing speeds, driven by the increasing computational power of personal computers and personal devices and the growing popularity of technology-based applications for geocoding and location information.

Environmental observing networks present large gaps both in frequency, resolution and coverage. Data are often collected and managed in an unsystematic manner, using different tools and methodologies, making data sharing, comparisons and trend analysis across the region difficult. In some cases data collection is project driven, and not integrated into national data and information management systems, which would promote easy access, availability, sharing and sustainability. This impacts monitoring, data collection, and assessment, which affect accountability, and result in insufficient review mechanisms that could create incentives for performance and early action.

In this context, it is important to provide technical and economic support to national and regional initiatives promoting the establishment of large, multi-sectoral and meshed data infrastructures, which are critical instruments to implement an integrated use of data, and for the development of new data products, and to integrate observations through novel ICT solutions.

From an analysis on number and capacity of observation networks operated in the region for water quality and quantity, for example, it is quite evident that the available data is scarce both spatially and temporally. As a reference, the average density of monitoring stations for water quality that are part to the GEMS/Water Programme Network is only 0.3 per 10000 square kilometres. There is also a need to develop technical and research capacities to assess the state and trends of water and to build on information gathering and sharing. This information is key for any management effort, just as information on employment, GDP or poverty is essential to run economic policies.

Knowledge about the variability of the distribution of water resources is critical for their governance and management. While global, regional and national trends can inform policy makers, local information is very important for socio-economic activities and investment, as well as for supporting livelihoods. Stakeholder involvement and decision making also require up to date information and analysis on how water quality and quantity is affected by land use activities, climate change impacts and infrastructure development.

Several countries have been building up the institutional and scientific framework needed to have good quality information on water quality and quantity, though there is a need to better integrate, coordinate and systematize data collection efforts by institutions at different scales in order to enhance our understanding of the state and trends in water quality and quantity.

With regards to data infrastructures operated at regional and national level to monitoring and assess quality of deep and shallow waters in oceans, it is unfortunate to note that water quality of the LAC region has not been assessed thoroughly and with enough continuity. Therefore complete, open, updated and relevant information is not available, as it was confirmed by UN-DESA in its Global Sustainable Development Report (2015). The Global Integrated Oceans Assessment (2016) is the latest attempt to fill this gap, although specific data for the region is not included. Data on salinity, nutrients, sea surface temperature, chlorophyll concentration and eutrophication for the region is derived mostly from global models, and satellite products available from public and commercial providers.

The lack of policy-relevant data and information on biodiversity is an important issue which hinders management efforts. The basic problem is the lack of capacity to document the huge biological, ecological and genetic diversity that characterizes the region. Despite the significant progress made in

some countries with regards to the establishment of national biodiversity information systems, it is still very difficult to produce biodiversity indicators at the national level (beyond those related to protected areas), particularly those that relate biodiversity with sustainability. This poses an enormous challenge, given the importance of natural capital for the region. Global initiatives such as the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) could provide the scientific and technological framework for the long-term monitoring of ecosystem services across the region. Data from such monitoring could help produce ecological indicators to track impacts of biodiversity change with wellbeing and sustainable development at regional, national and local scales.

Urban areas are often considered as a peculiar and growing concern for sustainable development in LAC. Urban population in Latin America and the Caribbean increased by more than 35 million people between 2010 and 2015, and is expected to climb to a total of 567 million persons by 2025. In LAC, an estimated 100 million people live in areas susceptible to air pollution, mostly in highly populated areas of cities with more than 500 000 inhabitants. In most such cities exposure to inhalable particles, with diameters that are generally 2.5 micrometers and smaller ( $PM_{2.5}$ ) exceeds the internationally recommended standards.

Despite the extensive scientific and political debate on this phenomenon and the dramatic social and economical implications related to the rapid urbanization in LAC, air quality monitoring programmes in LAC are still largely deficient. Existing air pollution monitoring capabilities are restricted to some countries where air pollution is a serious problem, in metropolitan areas and a few other places. Buenos Aires, Mexico City, Sao Paulo and Santiago de Chile have good monitoring examples that could be replicated in other cities.

Regional governance and policies on air quality are needed because pollution is a transboundary issue. Initiatives such as the Regional Action Plan on Atmospheric Pollution, mandated by the Forum of Ministers of Environment of LAC in 2014, are critical to coordinate this effort. However, a more holistic approach including urban planning, with enough green areas and connecting with ecosystems services reduction or fuel oil consumption, cleaner technologies, and the improvement of living conditions in impoverished areas, are needed to maximize environmental, social and economic co-benefits.

Moreover, the potential of the atmosphere to act both as a sink and a source of anthropogenic pollutants highlights the need to strengthen and disseminate knowledge to inform decision makers and engage stakeholders in increasing a comprehensive understanding of atmospheric issues and their relationship to human and ecosystem health. For this to happen there is a need to improve and coordinate the air quality monitoring networks to cover the entire region and produce enough data to inform the development of reliable policies for protecting human health and the environment.

As a general approach, strengthening the science-policy interface is particularly important for coordinated urban and city planning, moving from the use of traditional statistics at aggregate spatial levels to working with geographic information system data banks and indicators capable of addressing smaller areas. New tools, such as material flow analyses, life cycle analyses, costing and management, and social multi-criteria evaluation, will also play a role in constructing a sustainable future. Improved data availability can help identify pathways for improving the allocation of investment in infrastructure, the regulation and use of resources, and the sustainable management of chemicals and wastes.

These results, considering the lack of information at the city level and its relation with natural corridors to connections to ecosystems, are becoming a powerful tool to support investment in the improvement of public transport, cleaner fuels, development of low-emission technologies and other interventions that promote more sustainable cities and cleaner air. This kind of valuation should be promoted in the region in order to provide decision makers and communities with information about the impact of air pollution in their cities.





## **Environmental challenges in Latin America and the Caribbean<sup>ii</sup>**

*A contribution from UN Environment to the Report from ECLAC for the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable Development*

10<sup>th</sup> February 2017

### **Economic growth and the environment**

Despite the progress on the social and economic dimension in Latin America and the Caribbean (LAC) over the last decades, environmental degradation still persists. LAC economies continue to share a persistent, heavy reliance on primary products and natural resources, which account for approximately 50 per cent of all good exports<sup>iii</sup>. There is an increase in the reliance on exports largely driven by extra-regional demands for commodities such as agricultural products (including soybean, coffee and meat) and mineral resources (ores and metals).

The future of the region's economies, as well as the ability of LAC countries to fight poverty and reverse inequality, depends heavily on the region's natural capital and the capacity of governments to effectively manage it. Although there are noteworthy successes in the region's efforts to manage its natural asset base (e.g. between 1990 and 2014 the total terrestrial area under protection in the region increased from 8.8 per cent to 23.4 per cent<sup>iv</sup>); and LAC has made some important progress in addressing a number of high-priority socio-economic concerns (e.g. the percentage of people living below the poverty line decreased from 31 per cent in 2010 to 26 per cent in 2014; during the past 15 years, the percentage of people living in slums decreased from 29 to 20 per cent; and the number of people with improved access to water and sanitation has increased), available evidence indicates that progress is likely taking place at the expense of the natural environment.

Whether driven by the demands of a growing population; fuelled by economic factors within or outside of LAC; or facilitated by the absence of effective governance structures, it is generally accepted that patterns of production and consumption within the region are currently unsustainable. These trends need to be addressed with urgency if LAC is to secure the well-being of its growing population.

### **A growing urban population**

Urbanisation in the region is growing; however, environmental conditions (such as air quality) in urban areas in LAC are not improving. For instance, in most cities where data are available, the concentrations of particulate matter and ozone are above the guidelines of the World Health Organisation; around 100 million people in LAC live in areas susceptible to air pollution<sup>v</sup>. Poor planning, lack of regional integration and inadequate infrastructure increase the environmental footprint of cities in LAC: according to the World Water Quality Assessment<sup>vi</sup>, it is estimated that 25 million rural people are in contact with polluted surface waters originating from urban areas.

### **Climate change**

LAC currently accounts for only 5 per cent of global GHG emissions; however the region's contribution to global aggregates is growing, particularly because of demands from the transport and industry sectors. According to the World Bank<sup>vii</sup>, carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement in LAC increased in absolute terms (+14.18 per cent) over the period 2006 to 2011, although their levels as a proportion of GDP have declined. Reducing emissions of greenhouse gases with long residence time in the atmosphere is considered an important challenge in LAC; and contaminants such as black carbon are now a priority because of their radiative forcing action on the climate system<sup>viii</sup>.

While climate mitigation must be a key component of strategies to combat climate change in LAC, the urgency of strengthening adaptation measures to increase resilience and lower the region's vulnerability cannot be ignored. The scenarios analysis indicates that LAC is likely to continue to be the region with lowest carbon content of any regional energy mix through to 2050. However, current data are showing that the region's systems are already under pressure from changes in global climate, and these trends are expected to worsen<sup>ix</sup>. Andean glaciers, which provide vital water resources for millions of people, are shrinking; extreme stream flow is affecting communities; and an increase in the intensity and frequency of extreme weather events are affecting economies. In the Caribbean Basin, climate change contributes an additional USD 1.4 billion to Average Annual Loss based on wind damage alone. In addition, climate change exacerbates many other driving forces and therefore amplifies environmental and related socio-economic impacts<sup>x</sup>.

### **Food security**

Latin America is one of the world's main food producers and ranks among the lowest in the world regarding hunger<sup>xi</sup>. Yet there are 37 million people in LAC still without adequate access to food. Meeting regional food demands and maintaining exports will require, in part, a re-examination of the region's current approach to agricultural production. Since food production depends largely on water, the distribution of climatic changes and hydrological patterns will affect specific areas of LAC differently. Although demand, changing consumption patterns, and trade restrictions strongly influence food prices, climate change may multiply the complexity of food security in LAC, not to mention social inequalities that restrict access to food in poor populations. On another hand, the expansion of agribusiness and the production of crops for export pose several risks for the region: food crops for internal consumption may be replaced by export commodities and biofuels, compromising food security for the rural poor.

### **Vanishing ecosystems and biodiversity loss**

As a result of the range and growing intensity of many driving forces, important ecosystems and ecological processes in the region continue to be affected. Data indicate that although the rate of conversion of natural systems has begun to slow, the overall rate of loss of ecosystems remains high<sup>xii</sup>. Forests have shown an overall decrease of 9.5 per cent across the region since 1990, however this regional aggregate masks a noteworthy area of success - in the Caribbean, there has been an increase in the extent of forested area by 43 per cent over the 1990 baseline. Average coral cover is estimated to have declined in the Caribbean from 34.8 per cent to 16.3 per cent between 1970 and 2011<sup>xiii</sup>. Overharvesting adds additional pressure to marine species: although the region accounts for approximately 24 per cent of global fisheries catch<sup>xiv</sup>, trends show overall declines in fish stocks<sup>xv</sup>.

Species continue to be lost across LAC, and what is of particular concern is that where losses are occurring, the rate at which they are happening is, more often than not, increasing. Human-induced water erosion has been reported to affect as many as 2.23 million square kilometres of land in LAC, and river networks transport these sediments and other land-based sources of pollution to the oceans, impacting coastal ecosystems. The World's Water Quality Assessment of 2016 states that about one-quarter of all river stretches in LAC are in the severe pollution class<sup>xvi</sup>.

### **Pathways to address the environmental challenges**

Governments will likely need to find innovative solutions to allow for the decoupling of economic growth and resource consumption. This will be critical for attending to many of the persistent anthropogenic activities that are driving environmental change. Current patterns of development, including production and consumption are, in many cases, unsustainable; and with future anticipated increases in population size, it will be necessary to ensure that needs can be met with minimal damage to the natural environment. Reducing dependence on fossil fuels, and diversifying energy sources, will also be important for countries of the region. One such area where this type of thinking would be critical is in the context of urbanization: cities provide the opportunity to improve access to health and education services, cultural facilities, and transportation. Investment in urban planning, such as through the better use of environmentally sound infrastructure and clean transport, can turn the urban challenge into opportunities for sustainable development in LAC.

The scenarios indicate that focusing on measures that ensure greater protection of the natural environment will not compromise economies or human well-being in adverse ways. Though some trade-offs may be necessary, issues such as poverty and health may be better managed where emphasis is placed on effectively managing environmental assets. Many governments of the region have engaged in some aspect of 'green economics' or 'green growth' and there are emerging strategies amongst countries to ensure a coordinated approach to development challenges. Efforts such as these should be promoted and supported.

Governments of the region also likely need to invest in ecosystem-based resilience in order to reduce vulnerability and increase adaptation. Better investments in ecological infrastructure and implementation of measures to reduce pollution and other environmental pressures will help to safeguard some of the region's precious ecosystems and their services. This is especially important in the context of adapting to a changing climate, which is anticipated to have widespread and adverse impacts in the region.

The use of a range of policy support tools, mechanisms and approaches should help to boost regional success in addressing environmental changes and meeting the SDGs. Some of these include education and communication; the development of strategic partnerships especially within the region, but also beyond; innovation; proper monitoring and evaluation; effective implementation of policies and enforcement of laws; and adequate financing. As a core consideration of the sustainability agenda, governments of the region have also recognised the importance of improving the information base upon which environmental decisions are made. Greater investments into research, and building the necessary capacity for collecting and applying data to strengthen the science-policy interface, must therefore be a priority for the region.

Governments also have the opportunity to build on progress made in participation with various sectors of society, from the business sector to local and indigenous groups. Civil society has played a key role in the past decades by placing environmental concerns high on the political agenda. However, despite the enactment of environmental rights at the constitutional level in many countries of the region, tensions between different visions and cultural approaches to nature and natural resources as well as the

proliferation of illegal and/or unregulated activities, has led to socio environmental conflicts of magnitude, which threaten the enjoyment of human rights and the protection of environment. The challenge for governments is to integrate these viewpoints in an effective way, moving from informative participation to a more productive dialogue that results in integrated planning and result-based management.

### **Opportunities from policy dialogue and cooperation at the regional level**

Stronger and focused intergovernmental coordination at the regional and sub-regional level will improve governance issues that are of regional priority. Understanding and action in areas such as data and information generation, climate change adaptation, water resource management, environment and health, sustainable production and consumption, and management of biodiversity will be strengthened with regional coordination.

At the Twentieth Meeting of the Forum of Ministers of LAC held in March 2016, governments of the region reaffirmed ‘their commitment to comply with that stated in the 2030 Agenda for Sustainable Development, with the aim of eradicating poverty, protecting the environment and fostering inclusive, social and economic development in harmony with nature’. In keeping with this, a call was made ‘to take coordinated and accelerated action at all levels to implement the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development, recognising the profound connections and the interdependent relationship that it has with the economic and social dimensions of sustainable development, in a balanced comprehensive manner, pursuant to our countries’ policies and circumstances’. In this regard, the region can expect to see shifts in development pathways in the coming years that will put LAC countries further along the road to achieving greater sustainability, thus protecting the region’s natural wealth.

**UNESCO: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,  
LA CIENCIA Y LA CULTURA /  
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION**

**Section 1 – Contributions from UNESCO**

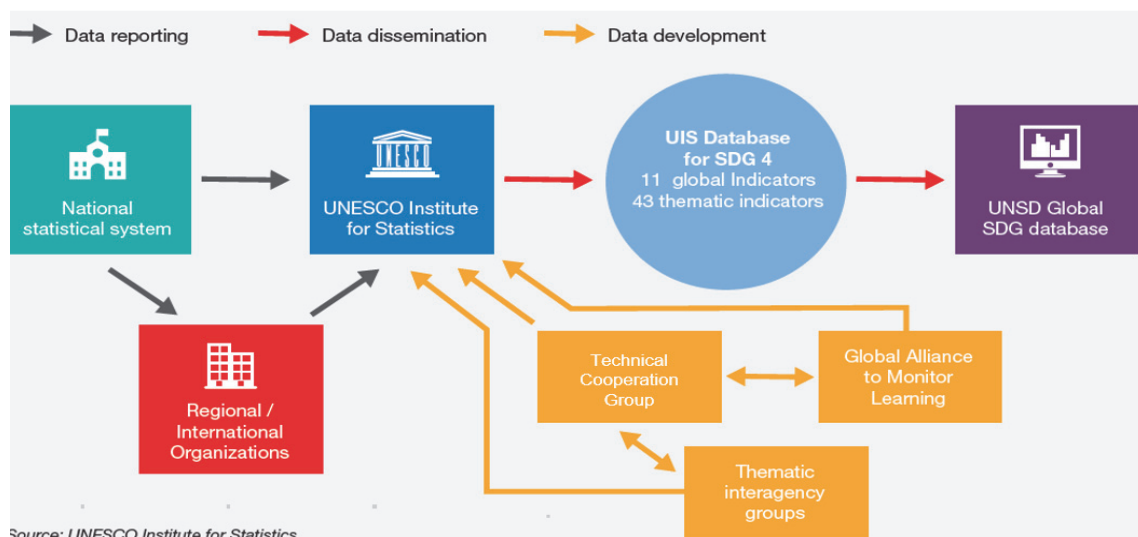
*1. UNESCO’s role in the development of the measurement frameworks for SDGs*

UNESCO has been contributing to the process of defining the global indicators in the areas of education, science, culture and communication. The UNESCO Institute for Statistics (UIS) has played a coordination-leading role within the UN system to contribute and advise the IAEG-SDGs on the definitions of indicators related to SDG 4. Moreover, it has also developed indicators to follow up on targets of SDG 9 and 11 related to science and development, and to safeguarding cultural and natural heritage.

*2. Measuring progress on education in the 2030 Agenda*

The Education 2030 (E2030) Framework for Action (FFA) states that the UIS will remain the official source of cross-nationally comparable data” on education. The UIS will continue to produce international monitoring indicators based on its annual education survey and on other data sources that guarantee international comparability for more than 200 countries and territories. In addition to collecting data, the UIS will “work with partners to develop new indicators, statistical approaches and monitoring tools to better assess progress across the targets”.

**Figure 1. Data reporting, dissemination and development**



Source: Sustainable Development Data Digest (UIS, 2016)

The overall roadmap to advance the measurement agenda on education is described in detail in the Sustainable Development Data Digest (UIS, 2016), the most recent developments being the following:

**a. Measurement at the global level: IAEG-SDGs and the global indicator framework**

The expert group met (Geneva, November 2016) to refine the list of the global indicators for the follow-up and review of all SDG indicators. It discussed the tier classifications of selected indicators and possible refinements to indicators. Proposals for possible additional global indicators will be considered in 2017 and recommended for endorsement by the UN Statistical Commission in 2018. Two substantive reviews of the global framework are planned for 2019 and 2024, resulting in possible further revisions for endorsement by the UN Statistical Commission in 2020 and 2025. No indicators for SDG 4 - Education 2030 were considered for refinement by the IAEG-SDGs.

**b. Measurement at the thematic level: Technical Cooperation Group and the development of thematic indicators**

The UIS and UNESCO Headquarters convened the Technical Cooperation Group (TCG) on the Indicators for SDG4-Education 2030 (May 2016). The TCG includes experts from 28 Member States, international partners (OECD, UNESCO, UNICEF and the World Bank) and civil society (Education International and Collective Consultation on NGOs), and the co-chair of the E2030 Steering Committee.

Based on the recommendations of the TAG, the E2030 FFA proposed 43 thematic indicators, including the 11 global monitoring indicators determined by the IAEG-SDGs. While each global indicator focuses on the outcomes of a SDG4 target, the broader set of thematic indicators are designed to cover the broader agenda and factors that could be addressed in order to achieve each target.

The TCG (October 2016) agreed on a set of 29 indicators, 18 thematic and 11 global, for reporting in 2017. The remaining 14 thematic indicators were identified as requiring further development and will be addressed by new TCG working groups. In addition, eight of the indicators (mostly global) for reporting in 2017 will require some further work (<http://tcg.uis.unesco.org/resultoftcgmeeting.php>). Target 4.1 is under consideration for additional global indicators. The TCG submitted a joint statement to the IAEG-SDGs recommending the adoption of either the out-of-school rate or the completion rate as a possible additional global indicator for Target 4.1. The TCG also supported a proposal from the IAEG-SDGs for a third global indicator on the years of free education. The additional global indicators proposed are all currently thematic indicators. Target 4.b is also under consideration, although no feasible additional global indicators have so far been identified.

The TCG created new working groups chaired by Member States. The first group will strategize on how best to address the methodological and availability issues related to the indicators requiring further development. The second group will establish guidelines for reporting SDG4 data for countries and international agencies. This aligns with the role of the UIS as the nexus between national and international education data. The third group will identify capacity issues to report specific indicators and develop the tools and resources so that countries can understand data requirements, potential data sources and calculation methods. This group will develop a mechanism to help countries develop their own National Strategy for the Development of Education

Statistics. Finally, TCG members were encouraged to join Global Alliance to Monitor Learning (GAML) task forces related to indicators on learning outcomes.

At regional level, the 2017 Buenos Aires Declaration of Education recognized three monitoring mechanisms that are important to consider for organizing the monitoring system in the Latin American and Caribbean region:

- The work led by the UNESCO Institute for Statistics (UIS) in the definition and production of the respective indicators.
- The role of the Global Education Monitoring (GEM) Report as the global monitoring mechanism on SDG 4 progress.
- The existing regional evaluation mechanism: the Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (LLECE), coordinated by OREALC/UNESCO Santiago, for the production of internationally-comparable learning outcomes measures..

It was established as a reference point in educational assessment and as a regional cooperation framework with three main objectives: to promote evidence-based education policy through the generation of (empirical) data on quality education and associated factors; develop education assessment capacities; and serve as a forum to generate and share ideas and discuss best practices in education. Three Regional Comparative and Explicative Study on learning achievement among primary students were conducted since 1997, and the fourth one is currently underway. As the Buenos Aires Declaration states, LLECE is responsible for monitoring and assessing the goals proposed in SDG 4 for the region, which include both traditional learning mechanisms and new requirements with a focus on the future of education, in connection particularly with goals 4.1, 4.4, 4.6 and 4.7. Each of these goals directly relates to the assessment of learning at a regional level, with a concrete proposal for monitoring and assessment mechanisms, as well as reporting methods. In this context, the aim of LLECE is to promote learning assessment for the future, gradually integrating progressive and innovative changes into its regional studies. This will involve the incorporation of innovative testing to measure the development of reflexive and critical skills in students, their conflict resolution abilities, creativity, citizenship, teamwork and entrepreneurship skills, among others. The study of associated factors will specifically engage teachers to take a more in-depth look at issues and the teaching process - learning, school atmosphere, school violence and learning gaps in specific student populations: indigenous, immigrant and other groups.

### **c. Making a difference in measuring learning: the Global Alliance to Monitor Learning (GAML)**

The UIS established GAML to help generate solutions to the technical challenges inherent in generating a universal learning indicator and globally-comparable measurement. Its key objective is to support Member States in building high quality and sustainable learning assessment systems and ensuring reporting for SDG4 indicators.

GAML will produce the standards and guidelines for learning assessment and methodological development to ensure national and global data reporting, including the following: **National Learning Assessments** (Manual of good practices, Catalogue, Data Quality Assessment Framework for Learning Assessment); and **Global Reporting** (Global Framework for Reference, Standards for reporting, Data validation protocols, Global Achievement Scale).

GAML operates as a platform for dialogue among diverse stakeholders to reach technical solutions to SDG 4 measurement, including the creation of a framework to enable cross-nationally comparable indicators of learning. It relies on a range of partners, including researchers, country representatives, multi-lateral and bilateral organizations, funders and CSOs.

The work is led by UIS with the support of technical partners to produce the technical documents and guidelines. Task forces are being created in order to provide the UIS with recommendations on how best to measure each target taking into account a wide range of organizational and technical viewpoints. UIS will work with individual task force leads to identify the technical work needed to advance new measures and manage technical partners in successfully completing the tasks.

### **Global reporting scale**

The development of and agreement on global reporting scales are needed. The UIS has developed a database to produce ‘proxy’ indicators (which are not internationally-comparable) to be used for reporting purposes in the interim. Furthermore, the UIS is working on an initial methodology to anchor regional and international learning assessments. This will enable the production of a first database to cross-nationally assess the share of pupils reaching low proficiency levels and that can be used as an alternative for reporting on SDG 4.1 targets until other approaches, such as the universal learning scale, are developed.

### **d. Measuring indicators based on household surveys: Inter-Agency Group on Education Inequality Indicators and the Task Force for Education Spending Estimates Based on Household Survey Data**

In order to address challenges in measuring equity, the IAG-EII was established as part of inter-agency coordination. Led by the UIS, UNICEF and the World Bank, the IAG also includes other organizations involved in the production and use of household survey data: the GEM Report, Global Partnership for Education, ICF International, the OECD, RTI International and USAID in order to promote the use of household survey data for education monitoring purposes at the global, regional and national level, ensuring standardized analysis and reporting in order to complement evidence available through administrative data. The initial focus of the Group is on three indicators currently proposed to monitor Target 4.1: completion rate; out-of-school rate; and percentage of children over-age for grade. The group will address other objectives in the course of the next 3-5 years, including harmonising the processing of survey data, defining indicators, harmonising the definition of individual characteristics and documenting, evaluating and pooling survey data sources.

### **Task Force on measuring private expenditure on education**

In order to fill the gap on private expenditure on education, the UIS has established a Task Force for Education Spending Estimates Based on Household Survey Data with representatives from the UIS, IIEP-Pôle de Dakar, UNICEF, World Bank, and other organizations. The objectives of this task force are to: 1) map household surveys with education spending data; 2) extract education spending data from surveys and produce indicators; and 3) produce guidelines for expenditure data collection with household surveys.



### *3. Measuring the progress on science, culture and communication in the 2030 Agenda*

Monitoring target 9.5 on enhancing scientific research is implemented by two indicators included in the global framework. Those indicators are produced with data collected annually by UNESCO in its Research and Development (R&D) Survey.

The R&D survey is based on a well-established methodology presented in the Frascati Manual and the work with partners such as OECD, Eurostat, RICYT and AU-NEPAD makes possible an acceptable level of coverage in terms of number of countries. However, the main challenge is the absence of regular data collections in most developing countries. The development of a set of thematic indicators with the potential to better inform the 2030 Agenda is under consideration in this area, paying special attention to the need of including data on innovation and a gender perspective for those statistics.

For the LAC region, UNESCO has developed the LAC Science Policy Information Platform (SPIN LAC at <http://spin.unesco.org.uy> ) that allows Member States to monitor their development overtime and to compare their results with other countries in the region.

UNESCO's International Hydrological Programme (IHP) developed the Water Information Network System as an open source and open access platform that combines geolocalized data. It serves as a global reference in the design and support of operations, management, and decision support functions for sound water resources governance. It is also designed to assist Member States in monitoring and implementing the Sustainable Development Goal to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all” (SDG6).

In the field of culture, development work to produce the indicator on expenditure per capita spent on the preservation, protection and conservation of all cultural and natural heritage relevant for target 11.4 was initiated in 2016. The development is based on the existence of some international accepted definitions for many concepts (e.g. Cultural/natural heritage, conservation, preservation) in the 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics and is carried out in collaboration with other relevant organizations – including UNESCO World Heritage Convention Centre, UN Habitat, World Bank, IUCN.

In the area of communication, there have been actions to reinforce the statistics available on the existence of ICT infrastructure in schools for pedagogical purposes. This information is needed to monitor the target 4.a and it is planned that the Survey of Formal Education implemented in 2017 will include the necessary items to collect those data according to the methodological standards to produce internationally-comparable indicators based on the data reported by countries. There have also been efforts made to create indicators relating to safety of journalists and to the existence or not of laws on access to public information.

#### **References:**

UNESCO Institute for Statistics (2016): Sustainable Development Data Digest. August. Montreal, Canada.

### SDG drivers in the LAC region: a UNESCO perspective

The SDGs and targets can be seen as a network, in which links among goals exist through targets that refer to multiple goals. All SDG indicators need to be considered as an integrated package and must work in harmony with one another. Many important issues, such as gender equality, education, health, sustainable consumption and production, and nutrition, cut across goals and targets. The goals and targets are themselves interdependent, and must be pursued together, since progress in one area often depends on progress in other areas.

UNESCO is addressing the SDGs in a comprehensive and interconnected manner, while prioritizing the following SDGs directly related to its mandate: SDG 3 (health), SDG 4 (education), 5 (gender), 6 (water), 9 (innovation), 11 (cities) 13 (climate change), 14 (oceans), 15 (biodiversity), 16 (peaceful societies) and 17 (partnerships). UNESCO addresses these SDGs primarily through supporting the development of Member States' capacities and knowledge sharing on education, the environment, and society and culture. Due to the transversal character of the 2030 SDG Agenda, new actors and social partners are likely to emerge. UNESCO is therefore fostering strategies to encourage participation, dialogue and alliances.

#### Education (SDG 4)

Despite significant progress, LAC continues to be the region in the world with the highest levels of **inequality** in education. In the last 15 years, access to all educational levels has expanded and state financing has increased. Nevertheless, differences in access to quality education in LAC countries from early childhood through to adult learning reflects strong socio-economic inequalities across the region: people living in low-income households tend to have less than 8 years of schooling and hold manual and low-skilled jobs. These inequalities affect women the most. In other words, inequalities in education enhance and entrench inequality. Moreover, SDG 4 calls for the provision of quality learning opportunities that take place **throughout life and in different learning structures** - formal, non-formal or informal. Knowledge gained outside school should be recognized and linked with formal education. UNESCO supports Member States in developing learning paths at all levels and the recognition, validation and accreditation of learning needs in local and national qualification frameworks, to enable learners to progress towards higher levels of education as part of lifelong learning strategies.

Challenges persist in respect to the **quality of education** and learning outcomes, teacher performance, as well as in the coverage and length of time spent in secondary school (UNESCO, 2015). In the last evaluation (TERCE) conducted by the Latin American Laboratory for Assessment of Quality of Education (LLECE) coordinated by OREALC/UNESCO Santiago, the results of the 15 countries that participated revealed that levels of mastery in reading and mathematics of 3<sup>rd</sup> and 6<sup>th</sup> grade students were only at the most basic performance levels. The Laboratory is a regional monitoring mechanism for SDG 4, with the aim of supporting Member States to strengthen the evaluation of their national systems. Furthermore, given that multiculturalism and multilingualism are key characteristics of the region, it is essential that States develop their own approaches to an education that reinforces diversity and promotes inclusive societies.

Quality education ensures the acquisition of diversified knowledge, critical and analytical thinking, conflict resolution, creativity, entrepreneurial skills, respect and tolerance, digital skills and problem-solving aptitudes. In short, values and attitudes that enable citizens to lead responsible and healthy lives must be fostered. **Curriculum** must be enriched with contents and methods that address the development of 21st century skills for sustainable development and global citizenship. The curricular framework should have a more flexible, holistic approach, integrating different areas of knowledge and promoting active learning by students. This requires curricular policies that also address school regulations, especially the organization of school time and space so that pedagogical practices can be changed in

accordance with new knowledge requirements. In a recent comparative study by UNESCO that examined curricula in 78 countries around the world, including 18 countries in Latin America and the Caribbean (UNESCO, IBE, 2016). 14 of the 18 countries included the topic of Human Rights, while 11 did so for the topic of Peace, Non-Violence and Human Security. On the other hand, the topic of Sustainable Development was over 50% in 8 of the 18 countries, leaving Gender Equity as the least present topic, with only 3 out of the 18 countries reaching 50%.

**Teachers** play a key role in training students in skills for the 21st century and support student development from early childhood and throughout the learning process for children, youth and adults. The region still has some way to go in ensuring teacher certification; recent data shows that 83% of primary school teachers and 78% of secondary school teachers are certified (2011 to 2016). Teachers must also guide students in developing 21st century skills, and these should be considered in initial and continuous teacher education processes. UNESCO's Regional Strategy for Teachers supports Member States in developing and implementing teacher education and policy reforms.

One area of special concern is **preparation for the world of work**. Until now, job training in the region has taken the form of secondary and tertiary education or as an alternative for young people whose educational pathways were shortened because of economic or exclusion factors. UNESCO works with Member States to support the development of technical and vocational education and training (TVET), which plays a key role in promoting the connection, complementarity and updating of training offered by the education system with the demands of the labor market and demographic trends. LAC countries must also take initiatives to increase and strengthen scientific production and promote applied research through higher education that is linked closely to 'green' economic development.

### **Environment (including SDG 6, 9, 11, 13 and 15)**

**Science, technology and innovation (STI)** are a key driver for the sustainable development of the region. Middle income countries will need substantial investments in science and technology to ensure that the economic and social progress of the past ten years is not lost. UNESCO seeks to support governments in developing public policies in STI and achieve SDG 9 on innovation by promoting STI investment, STI policy making and capacity building in the sciences. The Organization also plays an important role in strengthening the interface between science, policy and society, fostering peaceful societies (SDG 16) and science diplomacy in multiple fields of science (water, biodiversity, climate change, disaster risk reduction, and scientific cooperation), and working with Member States to improve cooperation on sustainable management of transboundary natural resources.

One of the main challenges for the region is reversing the environmental degradation of its **natural resources** and loss of **biodiversity** caused by human activities and global changes, including population growth, strong urbanization, land use change for the agricultural sector, deforestation, mass tourism, mining and intensification of polluting emissions. UNESCO, through its Global Network of Biosphere Reserves and its Global Geopark network, provides Member States with important tools for achieving SDG 15. These UNESCO-designated sites, (125 biosphere reserves in 21 countries in LAC), aim to create new forms of land-use management that address the deterioration of resources and ecosystems, and promote solutions to reconcile biodiversity conservation with sustainable use, economic development, research and education.

**Climate change** presents a wide range of risks and opportunities for human and natural systems. Some of the challenges to the achievement of SDG 13 include: water availability, loss of biodiversity, and extreme events. The region must address climate change in an interdisciplinary manner and consider how decisions are taken. One key natural resources under threat in the region is water, despite its abundance in

the region. In LAC, 36 million people lack access to potable water and 106 million lack sanitation. One of the most pressing challenges to achieving SDG 6 is to build human, financial and institutional capacities. Knowledge transfer and exchange of experiences and good practices can be useful tools for countries to address national challenges and achieve improved freshwater management. UNESCO works with its multiple networks in the region, including International Hydrological national programme committees, as well as specialized centres and chairs, to achieve this.

In addition to being one of the regions most exposed to earthquakes and with significant volcanic activity, the El Niño-La Niña phenomenon occurs in most countries of the region, causing floods, droughts and other associated phenomena. Some of the key challenges to achieving the SDGs (not only goal 11, but also SDGs 4, 6, 13 and 15) are the need to generate public **risk management and reduction** policies, and to promote a paradigm change from disaster risk response to disaster risk management and reduction. Institutional fragmentation and institutions with poor capacity to cope with challenges and underdeveloped networks also impede progress in this area. UNESCO and its scientific networks are developing tools to help anticipate and mitigate the effects of climate change and disaster risk, and assisting its Member States to develop policies in line with the Paris Agreement and the Sendai framework, including on education for disaster risk reduction and management.

#### **Society and Culture (SDGs 10,11,16)**

The protection and promotion of human rights for all and the guarantee of good governance are key determinants to the achievement of all SDGs, notably SDGs 10, 11 and 16.

**Inequality** is the major socio-economic challenge for the Latin American and Caribbean region, and for this reason SDG 10 related to reducing inequality within and among countries will be one of the most difficult to achieve. Much progress has been made in creating spaces for citizen participation, especially of women, afro-descendants, indigenous people and youth, but efforts are required to ensure they participate in decision-making. UNESCO is working along with other UN agencies to not only eliminate discriminatory laws and policies, but also promote laws and policies of positive discrimination in favor of those traditionally excluded. UNESCO works on inclusive urbanization (SDG 11) through networks of cities against racism and discrimination, globally with the Network of Inclusive Cities - ICCAR and at regional level with the Latin American and Caribbean Network of Cities against Racism, Discrimination and Xenophobia. The UNESCO Global Network of Learning Cities supports and improves the practice of lifelong learning for all in cities across the world, including LAC.

Migration will be another key challenge under SDG 10. If the region continues to show low economic indexes, this will encourage migration between countries. In addition, in an increasingly interconnected world, safeguarding cultural heritage and the diversity of cultural expressions is essential to avoid weakening the sense of belonging and identity of communities. UNESCO also work with cities towards the preservation of quality of life, as well as **local identities and cultures** in the face of a globalized world.

Ensuring justice and equality for all is also very much dependent on the existence of an effective, empowered and autonomous justice system (SDG 16). Here the challenges for the region are significant and include the process of selecting judges, ensuring quality training of judges and access to justice for the most vulnerable. A major challenge to achieve effective and transparent institutions in LAC is the high degree of **corruption**, which today is one of the main issues on the political agenda of almost all countries in the region and profoundly undermines democratic legitimacy. While almost all countries have made an effort, with the collaboration of the UN system, to strengthen institutions, promote transparency initiatives such as open government programs, access to information laws, or increase penalties for crimes, corruption continues to be a major issue. Open government policies associated with

the possibilities offered by the technologies (Big Data, Smart Cities) can generate powerful tools to improve the efficiency of the state, as instruments to combat corruption and to ensure more effective public policies. UNESCO works to build capacity among key stakeholders such as judicial operators and regulators in LAC to implement international standards in these areas and to take advantage of the new opportunities offered by ICTs.

The promotion and protection of free, independent and plural media is central to good governance. The challenges are extensive, with increased tension between the press and states, as well as threats from actors such as organized crime. Access to public information is also a key driver for good governance and progress in this area in the region will need to be consolidated. UNESCO assists Member States in creating national mechanisms to protect journalists and to enhance public policies targeting access to information.

**UNFPA: FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS /  
UNFPA: UNITED NATIONS POPULATION FUND**

**DESAFÍOS DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE LA AGENDA 2030  
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAC**

El Fondo de Población de las Naciones Unidas en LAC, a partir del año 2015, ha trabajado de forma conjunta y alineada con CEPAL y con las Agencias Fondos y Programas de Naciones Unidas para el proceso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el área de medición de los ODS, una de las estrategias más importantes consiste en la colaboración la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en la construcción de las capacidades nacionales requeridas para la implementación de la Agenda.

En el marco arriba mencionado uno de los principales desafíos es enfrentar el crecimiento exponencial del volumen y del tipo de datos existentes, y por otra parte, el crecimiento de la demanda de la sociedad por contar con información cada vez más desagregada, actualizada y oportuna. Se precisa que este crecimiento de los datos ocurre tanto en fuentes de datos tradicionales como en nuevas fuentes. Es así, que para determinados indicadores relacionados con los ODS en el área de salud sexual y reproductiva, el aprovechamiento de los registros administrativos aparece como una veta importante de trabajo.

Se espera que esta explotación adecuada de los datos vaya de la mano con la apertura de las fuentes y bases de datos. Dicha transparencia permitiría que los datos sean utilizados, reutilizados y distribuidos libremente, bajo ciertos estándares, permitiendo así a la sociedad sacar un mayor provecho de ellos.

En este contexto, UNFPA y CEPAL, en el marco de la CEA, crearon un espacio para analizar cómo apoyar a los Estados miembros en el aprovechamiento de la revolución de los datos para monitorear y revisar la Agenda 2030.

Como consecuencia de las definiciones respecto a la implementación de la Agenda 2030, UNFPA concentró sus esfuerzos de colaboración en los aspectos de medición en el soporte a nivel nacional de los procesos requeridos en 2016 por parte de la CEA/CEPAL, a través del Grupo de Coordinación de la Implementación de la Agenda 2030.

El primer esfuerzo consistió en apoyar a nivel de varios países la respuesta a los formularios para determinar las capacidades estadísticas para la medición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Por otra parte, UNFPA participó de forma activa en el proceso liderado por CELADE CEPAL, en la definición de los indicadores para el Seguimiento Regional de los Indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, instrumento reconocido en 2016 por parte de los países de LAC, como un conjunto complementario de indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 700 (XXXVI) del 1 de Junio de 2016 que crea el Foro de los Países de ALC para el Desarrollo Sostenible.

Finalmente UNFPA, ha colaborado de forma directa con los procesos de fortalecimiento del enfoque de dos grupos de trabajo sobre los retos de la Agenda 2030, particularmente en cuanto a las desagregaciones requeridas para que “nadie quede atrás”.

Para el efecto, además de los seminarios realizados en 2015 y 2016 con el Grupo de Censos de la CEA/CEPAL, a fin de analizar la marcha de los procesos censales nacionales, así como la sistematización de lecciones aprendidas durante la Ronda 2010, UNFPA, el Grupo de Censos y CELADE, desarrollaron un Seminario con 20 países de la región en Noviembre de 2016, a fin de analizar las implicaciones para los Censos, de los indicadores de los ODSs y del Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el mismo que orientó la identificación de retos respecto a Contenido Censal, Cartografía, Uso de Tecnologías e Integración de Fuentes a fin de maximizar el aporte de la nueva Roda Censal a los procesos de medición del progreso de los Agenda 2030.

Por otra parte, UNFPA en LAC, ha contribuido con el nuevo Grupo sobre Registros Administrativos de la CEA, para la preparación de una nota conceptual para la operacionalización del grupo, en el contexto de los retos que la Agenda 2030 representa para el uso estadístico de los registros administrativos, apoyando en la preparación a Ecuador (País a cargo del grupo) de un proyecto que será puesto en el mes de febrero, ante las agencias, fondos y programas en el marco del sub-grupo de datos del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible del UNDG-LAC.

### **Los esfuerzos para la construcción de capacidades nacionales de implementación**

Finalmente, la oficina regional de UNFPA en LAC facilitó en el mes de Septiembre de 2016, un evento para la operacionalización de la Agenda 2030 y de CIPD después del 2014 en LAC. Este evento contó con la asistencia de representantes de 24 países y de 4 Agencias del SNU los que, durante un evento de 4 días conversaron sobre el estado de los dos procesos a nivel global y regional, los retos para la construcción y medición de los indicadores de los SDGs relacionados con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la revisión de los mecanismos de implementación a la fecha de los diversos países para la coordinación programática de la Agenda 2030 y la construcción de las capacidades nacionales para la medición de los indicadores de progreso, así como la presentación de los instrumentos globales (MAPS y las nuevas guías para los UNDAF) y de UNFPA, para alineamiento de los esfuerzos para apoyo a los países para la construcción de la Agenda 2030.

Cabe indicar que estos esfuerzos, coordinados también de forma permanente con CEPAL y otras Agencias, Fondos y Programas del SNU, han permitido contribuir a los procesos de abogacía y priorización de los esfuerzos para el alineamiento entre las prioridades nacionales y al Agenda 2030.

El proceso de medición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 a Diciembre 2016, mostraba ser todavía un proceso en marcha. De los 230 indicadores<sup>1</sup>, 83 correspondían al Tier 1, 59 al Tier 2, 83 al Tier 3 y 5 indicadores a múltiples Tiers.

En tal sentido, el primer reto de la medición de la Agenda 2030 consiste la culminación del esfuerzo global para el desarrollo conceptual de los indicadores del Tier 3 que representan el 37% de los indicadores de los SDGs.

---

<sup>1</sup> IAEG-SDGs: Tier Classification for Global SDG Indicators as 21 December 2016: “Tier 1: Indicator conceptually clear, established methodology and standards available and data regularly produced by countries; Tier 2: Indicator conceptually clear, established methodology and standards available but data are not regularly produced by countries, and Tier 3: Indicator for which there are no established methodology and standards or methodology/standards are being developed/tested”.

UNFPA, como agencia custodia, al momento solo mantiene un indicador en el grupo Tier 3 (5.6.2<sup>2</sup>) aunque participa en 3 grupos de trabajo de indicadores Tier 3 (3.8.1<sup>3</sup>; 11.a.1<sup>4</sup> y el 17.18.1<sup>5</sup>). Se espera que 3 de estos 4 indicadores cuenten con rigurosidad conceptual y metodológica en 2017, permitiendo que sean reclasificados al nivel de Tier 2.

No obstante, el mayor reto en la región y en el mundo constituye al momento construir las capacidades para la producción regular de información desagregada de los indicadores para los que ya se cuenta con claridad metodológica y que constituyen el otro 63% de los indicadores de los ODS.

Además, es necesario considerar que América Latina y el Caribe, mediante la resolución CEPAL No. 700 (XXXVI) del 1 de Junio de 2016 que crea el Foro de los Países de ALC para el Desarrollo Sostenible, reconoce la importancia de la incorporación de los indicadores de Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo –CMPD- al proceso de monitoreo de los avances regionales de la Agenda 2030, como un mecanismo de apoyo a la regionalización de la Agenda 2030.

Al respecto, cabe indicar que el trabajo de los indicadores para el seguimiento regional del CMPD ha identificado al momento 136 indicadores de los cuales 51 coinciden o son adaptaciones de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Tanto los indicadores ODSs como los indicadores complementarios para el seguimiento regional del CMPD, requieren la construcción de nuevas capacidades estadísticas acordes con la necesidad de producción frecuente de información desagregada por: i) ingreso, ii) género, iii) edad, iv) raza, v) etnicidad, vi) condición migratoria, vii) discapacidad, viii) localización geográfica y ix) otras relevantes a los contextos nacionales.

La estratificación múltiple de estas desagregaciones, no solo es fundamental para cumplir con el principio de la Agenda 2030 de que “nadie se quedará atrás y que el primer esfuerzo será llegar a los más rezagados”, sino además como un instrumento clave para que mejorar la efectividad de las políticas públicas, considerando que las desigualdades estructurales se encuentran en la base misma de los desafíos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, el rediseño progresivo de los sistemas estadísticos nacionales deberá basarse, de acuerdo con lo expresado por los países en el marco de las reflexiones en el seno de la CEA/CEPAL, en procesos sistemáticos y eficientes de producción de información basados en los pilares de los sistemas de cobertura universal que faciliten el acceso a información totalmente desagregada: los censos y los registros administrativos de calidad. Estos dos pilares, por su parte, serán complementados mediante encuestas especializadas que permitan combinar sus datos con modelos de estimación para áreas pequeñas.

---

<sup>2</sup> 5.6.2 Number of countries with laws and regulations that guarantee women [**and men**] aged 15- 49 years access to sexual and reproductive health care, information and education.

<sup>3</sup> 3.8.1 Coverage of essential health services (defined as the average coverage of essential services based on tracer interventions that include reproductive, maternal, newborn and child health, infectious diseases, non-communicable diseases and service capacity and access, among the general and the most disadvantaged population)

<sup>4</sup> 11.a.1 Proportion of population living in cities that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs, by size of city

<sup>5</sup> 17.18.1 Proportion of sustainable development indicators produced at the national level with full disaggregation when relevant to the target, in accordance with the Fundamental Principles of Official Statistics



El reto principal, por lo tanto, se basa en la capacidad de construcción de sistemas estadísticos que brinden información de calidad que vincule información geográfica, socio-demográfica, económica y ambiental en entornos políticos administrativos relevantes para el diseño, la gestión, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, manteniendo los principios de integralidad, universalidad y de que nadie quede atrás.

Main challenges for achieving universal access to sexual and reproductive  
Health and rights in LAC region

Prepared by Alma Virginia Camacho, MD, MPH

Attendees at the first Regional Conference on Population and Development held in Montevideo in 2013 agreed on important commitments to ensure universal access to sexual and reproductive health services. As a result, there is regional consensus among governments that sexual and reproductive rights are an integral part of human rights and that their exercise is essential for the enjoyment of other fundamental rights and to achieve international development and poverty elimination goals.

In September 2015 LAC countries signed on to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) including the goals that directly address reproductive health and rights. Goal 3, to Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, has specific targets for (1) reducing the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births; (2) ensuring universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes and (3) Achieving universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines all by 2030<sup>6</sup>. Goal 5, “Achieve gender equality and empower all women and girls,” includes the target 5.6 to ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences.

While there has been some progress in Latin American and Caribbean region (LAC) in expanding access to sexual and reproductive health services, except for Cuba and Uruguay, no country has reached the goal of universal access to sexual and reproductive health and rights. Throughout the region there are wide gaps that parallel economic inequalities among and within countries in making progress towards the goal.

Significant sectors of the population especially population groups that are most socially excluded, including individuals with low education status, indigenous and Afro-descendant populations, those in the lowest income quintiles, and people living in rural areas and on the periphery of large cities continue to face critical challenges that constrain their capacities to exercise their rights and access services. One important example is

---

<sup>6</sup> WHO defines that universal access to health and universal health coverage mean that all people and communities have access, without discrimination, to adequate, timely, quality, nationally determined comprehensive health services. As well as quality, safe, effective and affordable medicines, while ensuring that the use of such services does not expose users to financial difficulties, in particular vulnerable groups. (PAHO / WHO, 2014).

the lack or insufficient services to respond to reproductive health cancers in women, which is among the leading causes of deaths (83,000 new cases of cervical cancer and 36,000 deaths reported in 2012). In the same year, there were also 408,200 new cases and 92,000 deaths from breast cancer reported. The poorest and most excluded women have the least access to screening, detection, and treatment.

Similarly, lack of SRH education and services for adolescents puts them at greater risk of HIV. While HIV/AIDS has mostly been concentrated in key populations in LAC, recently there has been an increased number of infections in the general adolescent and youth population. Violence and discrimination based on gender intersects with other forms of discrimination to exacerbate poor sexual and reproductive health outcomes for the most at risk populations. As a result maternal mortality is about three times higher among indigenous than non-indigenous women.

Despite relatively high modern contraceptive prevalence 67% ranging from 34% Haiti to 79 Costa Rica % in (UNFPA, 2016) compared to other regions of the world, in LAC, unplanned pregnancies reached 56% which is the highest in the world. (Guttmacher, 2012). Unmet need ranges from 31% for women in the lowest income quintile to 19% for women in the highest income quintile. It is estimated that the region has the second highest unsafe abortion rate of 31 per 1000 (WHO) and 32% of pregnancies in LAC end in abortions (Guttmacher 2014), 36% of adolescent girls in LAC have unmet need for contraceptives (Guttmacher, 2016).

In the LAC region during the period covered by the MDGs, maternal mortality decreased by 50% (MMIG, 2015) to a current ratio of 67 per 100,000, which already meets the SDG of 70 per 100,000. This achievement masks great inequality in the region from a low MMR of 15 in Uruguay to a high 359 in Haiti. Thirteen countries Bahamas, Bolivia, Dominican Republic, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Suriname and Venezuela, have a MMR that is above the regional average - between 89 and 359 for every 100,000 live births (WHO, 2015). These countries show higher fertility rates, unequal coverage and access to services and economic, ethnic and racial inequalities. More generally, across the region, there are challenges in quality of care even in the countries with better and worse reproductive health outcomes. For instance, the C-section average rate in the region is excessive 40, 5 %, ( Betran et al, 2016) especially in better off countries, such as Brazil where it is as high as 55,6%, which far surpasses WHO recommended caesarean section rates of 10%, as rates higher than 10% are not associated with reductions in maternal and newborn mortality rates. In both wealth and less wealthy countries, many populations lack access to education, nutrition, clean water and sanitation, which are basic to ensuring quality antenatal and delivery (including post-partum) care, necessary for preventing maternal deaths. Maternal mortality is a reflection of how available economic resources are allocated, and of social policies and other determinants. Income inequality as expressed in Gini coefficient and social discrimination based on ethnicity, race, age, sexual orientation, correlate with higher than average maternal mortality and other reproductive poor health outcomes.

Adolescent fertility rates in LAC are unacceptably high, 66 per 1000, (UN, 2015) exhibiting the slowest decline in the world. Also, pregnancies in girls younger than 15 years old are increasing in the region largely owing to sexual violence and abuse. Very young adolescents are at a greater risk of dying from pregnancy-related causes and perinatal deaths are 50% more likely if newborns' mothers are younger than

20 compared to those in the 20–29 age range. In 2016, there was an estimated number of 3.6 million adolescent pregnancies in LAC, of which 1.7 million were births, 1.4 million (or 39%) resulted in abortions and 500,000 in miscarriages. (Guttmacher, Adding it Up, 2016).

Within the region, among the most frequent causes of maternal mortality for women of all ages, are hemorrhages (23.1%), pregnancy-induced hypertension (22.1%), indirect causes (18.5%), other direct causes (14.8%), complications associated to abortions under unsafe conditions (9.9%), and sepsis (8.3%)<sup>7</sup>. The indirect causes of maternal mortality have increased and this correlates with changes in lifestyles contributing to medical pre-existing conditions, insufficient coverage, and poor quality of care during pregnancy and childbirth, and poor access to counselling and modern contraceptives for women with medical conditions that contraindicate pregnancy.

In the face of these challenges, there is uneven commitment to addressing barriers through policy change and programmes. Some Latin American and Caribbean countries have put in place legal and normative frameworks based on international treaties, conventions and instruments of law. In others, however, policies continue to deny adolescents and young people the ability to exercise their sexual and reproductive rights, greatly limiting their access to SRH and HIV services. Similarly, there is high variability in the policy framework of emergency contraception (EC) among different countries. Most of the countries have legislation and technical standards that regulate access and provision of emergency contraception, but there are others, like Costa Rica and Honduras, where EC is totally prohibited based on the belief that is an abortifacient, even though is not based in evidence .

National regulations on HIV testing, in almost half of the countries in the region, require parental consent for minors to access HIV testing and its results even though adolescents 14 years and older legally can have sexual intercourse without parental consent. Other countries, such as Argentina and Uruguay, have made considerably more progress in reforming their regulations to allow a person of any age to request an HIV test from both public and private health services

Most countries in the region restrict or limit access to safe and legal abortion, but Chile, El Salvador, Honduras, Venezuela, Surinam, Dominican Republic and Nicaragua are the only countries where abortion under any circumstances is subject to criminal penalization. Uruguay, Cuba, Guyana and Mexico City are the only places in the region where women can voluntary seek termination of pregnancy.

Almost all countries in the region have legislation and / or programs, norms that regulate comprehensive sexuality education. Panama is the only country that has not legislated or does not have specific regulations on comprehensive sexuality education.

The danger of focusing solely on the progress made to date, is one of the potential complacency in the face of continuing challenges. To expand access and strengthen sexual and reproductive rights, is necessary to invest resources and reform the legal and policy framework to address inequalities, unequal distribution of services, discrimination against adolescents and youth, women, indigenous, afro descendants and LGTBI populations and strengthen health systems to appropriately respond to the diverse needs of these different populations.

---

<sup>7</sup> Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis Lancet 2016

## References

1. Banco Interamericano de Desarrollo (2010). Health of Indigenous Women: interventions to reduce maternal death. (Salud de la Mujer Indígena: intervenciones para reducir la muerte materna.) Cordero, L., Luna, A., Vattuone, M. Washington.DC.
2. ECLAC (2013). Implementation of the Program of Action of the International Conference on Population and Development. Examination of the period 2009-2013 and lessons learned (Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Examen del período 2009-2013 y lecciones aprendidas). Limited Distribution LC/L.3642. September 9 2013.
3. ECLAC 2015. Latin America and the Caribbean: looking ahead after the Millennium Development Goals: Regional monitoring report on the Millennium Development Goals in Latin America and the Caribbean (América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio: informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe.)
4. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis Lancet 2016
5. Guttmacher, Intended and Unintended Pregnancies Worldwide in 2012 and Recent Trends
6. Pan American Health Organization (2014b). Strategy for Universal Access to Health and Universal Health Coverage (Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud.) CD53/5, Rev. 2. Washington, DC: OPS, 2014.
7. The Lancet (2015) Health-system reform and universal health coverage in Latin America. Rifat Atun et al. Volume 385, No. 9974, p 1230–1247, 28 March 2015. Online/Series [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61646-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61646-9)
8. World Health Organization (2011). Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008. Sixth edition. Geneva. Available at: [http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501118\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501118_eng.pdf)
9. World Health Organization (2015) WHO statement on caesarean section rates (Declaración de la OMS sobre las tasas de cesáreas), OMS, Geneva, 2015
10. Guttmacher Institute. Sedgh G, Singh S, and Hussain, R. Intended and unintended pregnancies worldwide in 2012 and recent trends. September 2014. <https://www.guttmacher.org/news-release/2014/new-study-finds-40-pregnancies-worldwide-are-unintended>.
11. Guttmacher, Adding it up 2014. Singh S, Darroch E, and Ashford L. The costs and benefits of investing in sexual and reproductive health 2014. Disponible en: <https://www.guttmacher.org/report/adding-it-costs-and-benefits-investing-sexual-and-reproductive-health-2014>.
12. Sedgh, G, Bearak J, Singh S, et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: Global, regional, and subregional levels and trends. The Lancet; 2016; Vol 388, No. 10041, 258-267. Disponible en: [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(16\)30380-4/abstract](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30380-4/abstract).
13. United Nations (2015). Sustainable development goals. En: <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1481>

14. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fecundidad y maternidad adolescente en el Cono Sur. Binstock G. UNFPA, 2016. Disponible en: <http://lac.unfpa.org/sites/lac.unfpa.org/files/pub-pdf/Fecundidad%20y%20Maternidad%20Adolescente%20en%20el%20Cono%20Sur-Ultima%20version.pdf>
15. Guttmacher (2012) Intended and Unintended Pregnancies Worldwide in 2012 and Recent Trends.
16. WHO (2015). Trends in maternal mortality: 1990 to 2015: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Available at: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141\\_eng.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1)
17. Betran A et al (2016) The Increasing Trend in Caesarean Section Rates: Global, Regional and National Estimates: 1990-2014. Available at: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0148343>
18. UNFPA (2016). State of the world population report. Available at: [https://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/The\\_State\\_of\\_World\\_Population\\_2016\\_-\\_English.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/The_State_of_World_Population_2016_-_English.pdf)
19. UNFPA (2015) Universal access to reproductive health: progress and challenges. Available at: [http://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA\\_Reproductive\\_Paper\\_20160120\\_online.pdf](http://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA_Reproductive_Paper_20160120_online.pdf)
20. United Nations (2015) Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Population Prospects: The 2015 Revision, custom data acquired via web

**UNICEF: FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA /  
UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND**

**SUPPORTING COUNTRIES IN MEASURING PROGRESS TOWARDS THE SDG**

UNICEF is called to play a prominent role in supporting National Statistical Systems in the region in monitoring the 2030 Agenda and the SDGs. UNICEF is the custodian agency for 10 indicators and joint custodian for 6 indicators. UNICEF is also indicated as one of the additional agencies working with the custodian agency for another 5 indicators.

A recent review made by UNICEF shows that data availability for over half of child-related SDG indicators is posing challenges in terms of availability, quality and disaggregation. Despite the strong capacity in matters of statistics in most of the countries in Latin America and the Caribbean, significant data gaps still remain when it comes to monitoring the situation of children and adolescents, mainly in areas such as violence against children, sexual violence among adolescents, early childhood development or child disability.

UNICEF works closely with the Economic Commission for LAC (ECLAC) and other UN agencies (UNFPA, UN Women, UNDP, ILO, FAO) to coordinate efforts to support national statistical systems to prepare to respond to the SDG monitoring framework and the need for multiple data disaggregation. UNICEF also supports the Statistical Conference of the Americas through the Working Group on Children and Adolescents Statistics co-chaired by INEC (Panama NSO) and INEGI (Mexico NSO) with the participation of 14 NSOs and UNICEF exercising the technical secretariat. The group currently focuses its efforts in developing and promoting standard methodologies to measure child-related indicators with special focus on violence against children, early childhood development and child disability, as well as strengthening administrative data systems and promoting a more effective dissemination and use of child-related data.

Through the 24 UNICEF offices covering 36 countries and territories in the region, UNICEF supports Member States to identify suitable sources of data for collection of priority indicators for children and adolescents and for integrating the SDGs into national statistics systems and strategies. UNICEF in LAC is determined to harness the SDGs momentum to continue enlarging the national commitment of governments in the region to collect data for children through strengthening national capacities and provide opportunities to engage citizenry and promote adolescents and youth participation.

**1) STRENGTHENING NATIONAL CAPACITIES FOR A SUSTAINABLE DATA COLLECTION ON CHILDREN**

Over the last 6 years, 18 countries in LAC have implemented a child-focused survey supported by UNICEF under the Multiple Indicator Cluster Survey Programme. UNICEF has also contributed to six other national households surveys to ensure that comparable indicators on children is collected across the region. These efforts have helped enormously to increase the availability of disaggregated and quality statistics on children and adolescents. The newly generated data has been instrumental in helping countries to track progress towards national or international commitments such as the MDG as well as providing baselines for the SDGs.

For the launch of the Sixth round of MICS surveys (2016-2019), UNICEF is in the process of aligning the survey tools with the new development and monitoring agenda requirements, improving the timeliness of reporting and incorporating innovative measurement tools and technology. UNICEF has also partnered with a large number of UN entities, researchers, statistical offices and NGOs for the development of new measurement tools in areas such as early childhood development, violence against children, water quality testing, child disability, victimization, or social protection. Today MICS surveys collect up to 45% of all household survey-based SDG indicators and covers 11 out of 17 goals.

Besides providing technical support to survey implementation through workshops and direct technical assistance, UNICEF actively advocates for a more systematic generation and dissemination of information on children to ensure that children-related indicators are monitored and it is considered a priority by the National Statistical Systems and that surveys focused on children indicators are duly funded by the national governments. Thanks to these advocacy efforts, increasingly the responsibility of financing child-related surveys is assumed by the national governments, while UNICEF continues being a strategic partner that provides technical assistance and quality assurance.

Children with disabilities are often in a very disadvantaged position for a full participation in society. However, their situation tends to be invisible due to the lack of reliable statistics to account for the functional difficulties and participation restrictions that they are experiencing in their daily lives. UNICEF has developed in partnership with the Washington Group a survey module to measure child disability in data collection efforts. UNICEF also works on strengthening national capacities for data collection and analysis of child disability measurements. In October 2016, UNICEF and the Washington Group organized a Workshop on measurement of Child Disability with the participation of 26 country delegations from the region.

The potential of administrative systems to generate high quality and timely data on children is immense, but that potential is often untapped in many countries in the region. To date, administrative data systems are usually not integrated and usually lack the timeliness and the quality for being used for decision making. UNICEF support governments on strengthening national and subnational systems for collecting, analyzing and using administrative data in priority areas for children such as education, health, justice, disability or vital registration.

## **2) PROVIDING OPPORTUNITIES TO ENGAGE CITIZENRY AND PROMOTE ADOLESCENTS AND YOUTH PARTICIPATION**

Official data collection through civil registration systems, census surveys and other methods is essential to understanding the issues and challenges that the SDGs seek to address. However, this official data is only part of the picture. Perception data through participatory monitoring activities are an essential “reality check” and useful complement to official data and statistics. Perception data can provide essential insights and evidence for addressing barriers, bottlenecks and other challenges that prevent the SDGs from being achieved.

UNICEF has recently developed U-REPORT, a groundbreaking, text-message based innovation that amplifies the voices and views of young people in relevant topics. To date, several countries in the region are already using U-report such as Mexico with more than 50,000 young u-reports or Chile.

**UNISDR: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES / UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION**

**UNISDR**

**Resilience building for the poor: overcoming poverty and inequality.**

**1. Disaster risk reduction is a development issue**

This year, UN Member States gathered for the Third World Conference on Disaster Risk Reduction (14-18 March, Sendai, Japan), and adopted the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Ahead of the Framework adoption, States had reiterated their commitment to disaster risk reduction and resilience<sup>1</sup> through a political declaration: “disasters are to be addressed with a renewed sense of urgency in the context of sustainable development and poverty eradication and, as appropriate, to be integrated into policies, plans, programs and budgets at all levels and considered within relevant frameworks”. This sense of urgency was also reflected by countries in the SDG’s by including in the Goal to end poverty the need to “build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters”.

It is estimated that disasters have cost the world more than \$3.5 trillion since 1960<sup>2</sup>, with both developed and developing countries paying a huge price in terms of lost productivity and damaged infrastructure. National efforts to reduce poverty have been affected, as poverty is a factor in vulnerability to disasters and similarly disasters are a driver of poverty (see figure 1). Estimates for 89 countries find that if all disasters could be prevented next year, the number of people in extreme poverty- i.e those living on less than US1.90 a day would fall in 26 million.<sup>3</sup> The impact on poverty is large because poor people are exposed to hazards more often, lose more as a share of their wealth when hit, and receive less support from family and friends, financial systems, and governments. Disasters move people back into poverty and is one of the reasons of the difficulties faced by policies oriented to reduce inequality and overcoming poverty to succeed. Among Guatemalan households hit by tropical storm Agatha in 2010, per capita consumption fell 5.5% increasing poverty 14 percent<sup>4</sup>. Disasters can push people into poverty, and so disaster risk management can be considered a poverty reduction policy<sup>5</sup>. Only a strong high-level political commitment globally may pave the way towards a safer and more sustainable future by embedding resilience into the development plans, accounting for factors like seismic threats, flood plains, coastal erosion and environmental degradation.

---

<sup>1</sup> Resilience is defined as: “The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions”, UNISDR 2009 Terminology on Disaster Risk Reduction.

<sup>2</sup> Global Assessment Report 2015 : <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/index.html>

<sup>3</sup> World Bank Unbreakable. Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters. 2017

<sup>4</sup> Ibid. Baez, Lucchetti, Salazar Genoni. Gone with the Storm: Rainfall Shocks and Household Wellbeing in Guatemala”.

<sup>5</sup> Ibid.



## 2. Impact of disasters in the Americas

According to the last statistical report of loss and damages for 24 countries in the Americas<sup>6</sup> there have been nearly 100,000 disaster events for the period 1990-2013. Nearly 50% of these events have been small scale disasters, not often reflected in economic estimates or records that mainly affect small cities and communities. The disasters in the Americas have caused nearly 43,000 lives lost and 13 million people affected, 1.2 million houses destroyed and 6 million affected for the period 1990-2013. The impact of disasters is so vast that the accumulated number of people affected in some countries of Central America for the period 1990-2013 exceeds the total population of the country.

As stated in the GAR 2015, disaster risks in the Americas pose a direct threat for the national policies oriented to reduce poverty. Probability of economic losses likely to occur in a year due to disaster risks, sometimes double the budget allocations for social expenditure in many countries of the region. For example, the estimated Annual Average Losses due to multi-hazard disasters (AAL) in 10 Caribbean countries, exceeded in more than 100% the total social expenditure of the country, involving key poverty reduction areas such as education, infrastructure, agriculture and health<sup>7</sup>. Not integrating disaster risk considerations in the development process and planning, endangers government commitment to sustain development.

Disasters seriously affect economic growth, exacerbate poverty and threaten the livelihoods of vulnerable communities. Integrating disaster risk considerations into the main sectors leading the development process, constitutes a major challenge in Latin America and the Caribbean where disaster losses continue to increase, adversely impacting the development opportunities of the region. At the local level, frequently recurring small and medium-scale disasters, most of them associated with hydro-meteorological hazards, are causing the majority of losses in rapidly-growing small and mid-size cities that do not have proper development planning with due considerations to disaster risk reduction and environmental sustainability.

## 3. Some good practices and initiatives in the Americas

Countries in Latin America and the Caribbean are quite heterogeneous and vary significantly in terms of size, population as well as in their socio-economic conditions and environmental context. However, there have been important progress in various areas of disaster risk reduction in the three sub-regions (Central America, South America and the Caribbean), the reactive approach to disasters is moving towards a more comprehensive approach that is reflected in changes in the legislative frameworks for comprehensive disaster risk management in at least 12 countries in the region since 2005. DRR criteria has also permeated in the policies, strategies and plans of key development sectors (e.g. planning, infrastructure, economy & finance<sup>8</sup>, health<sup>9</sup>, education). In nearly all countries of the Americas, 1,400 local governments have committed to resilience building. Those experiences make the Americas region a global reference and constitutes an important base for South-South

---

<sup>6</sup> Impact of Disasters in Latin America and the Caribbean 1990-2013. UNISDR.

<sup>7</sup> Global Assessment Report 2015 : <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/index.html>

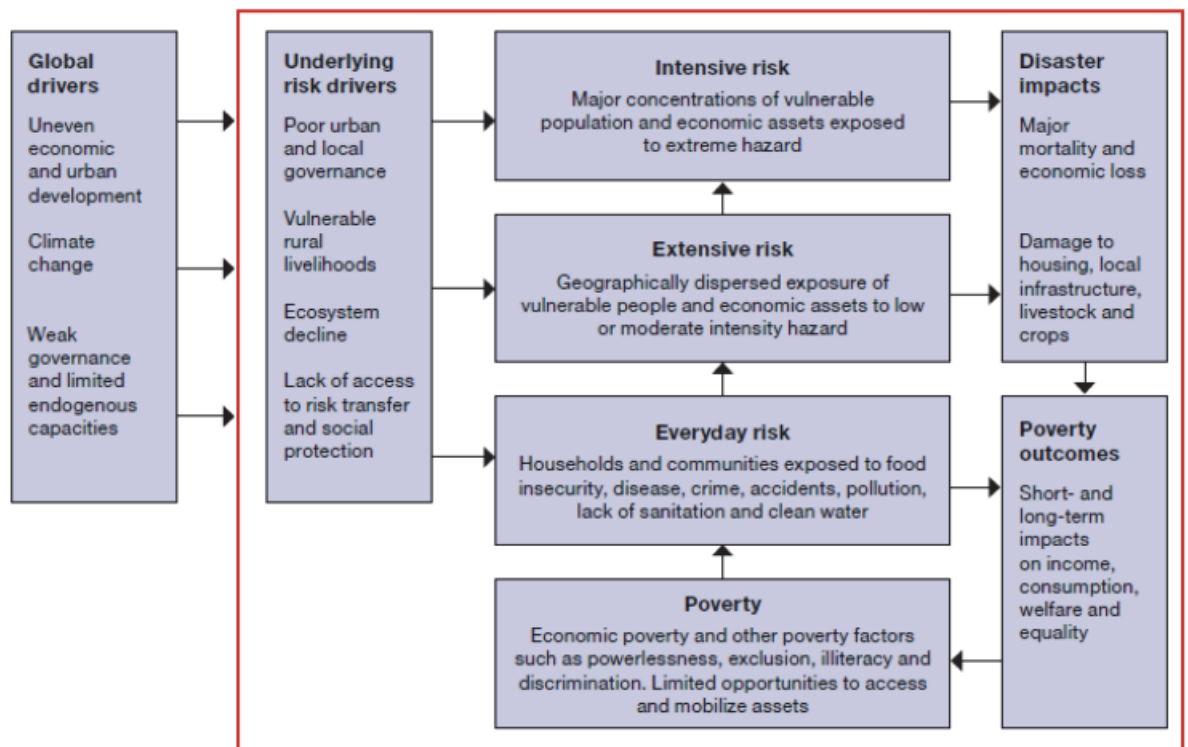
<sup>8</sup> Ministries of finance of 9 countries in Latin America now constitute a Regional Network of South South cooperation for mainstreaming disaster risk reduction considerations in public investment planning.

<sup>9</sup> In 2014 31 countries (89% of the total number of countries in the Americas) had evaluated the security of more than 2,900 hospitals using the Hospital Risk Index, 27 countries had formally incorporated disaster risk reduction as a responsibility of the ministries of health and 21 countries had formally approved safe hospital national policies.

cooperation towards resilience building as a key element for poverty reduction. The region faces a challenge to ensure that the application of these advances are broadened to more countries and applied effectively so new risks do not accumulate faster than the national efforts for reducing existing risks. Protecting development in the Americas by integrating disaster risk considerations is a key pillar to ensure that critical public infrastructure, housing and production – key pillars of growth and poverty reduction in low and middle-income countries of the region, are protected against disasters and thus ensuring a substantial reduction of disaster losses, in lives, and in the social, economic and environmental assets of the poor, communities and countries in the future. There is thus an important and positive trend of experiences that pave the way to continue supporting that disaster risk considerations are fully factored into social and economic investments or where risk knowledge is integrated into development plans and practice. The efforts need to continue expanding as a key step for protecting development gains that constitute the base for poverty reduction

Figure 1

**Figure 1.3:**  
The disaster  
risk–poverty  
nexus



- 
- <sup>i</sup> This document is based on: UNEP 2016. GEO-6 Regional Assessment for Latin America and the Caribbean. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.  
The topic is also relevant in the context of the regional process on Principle 10 implementation in Latin America and the Caribbean.
- <sup>ii</sup> This document is based on: UNEP 2016. GEO-6 Regional Assessment for Latin America and the Caribbean. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
- <sup>iii</sup> UNCOMTRADE (2015). United Nations Commodity Trade Statistics Database. <http://comtrade.un.org/db/>.
- <sup>iv</sup> UNEP-WCMC (2015). World database on protected areas. United Nations Environment Programme (UNEP), World Conservation Monitoring Centre. Cambridge, United Kingdom.
- <sup>v</sup> Romieu, I., Gouveia, N., Cifuentes, L.A., de Leon, A.P., Junger, W., Vera, J., Strappa, V., Hurtado-Díaz, M., Miranda-Soberanis, V. and Rojas-Bracho, L. (2012). ‘Multicity study of air pollution and mortality in Latin America (the ESCALA study)’. Research report (Health Effects Institute)(171), 5-86
- <sup>vi</sup> WWAP (2015). The United Nations world water development report 2015: Water for a sustainable world. United Nations World Water Assessment Programme, Paris, UNESCO <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf>
- <sup>vii</sup> World Bank (2015). World Bank Open Data. World Bank <http://data.worldbank.org>
- <sup>viii</sup> UNEP and CCAC (2016). Integrated Assessment of Short-Lived Climate Pollutants for Latin America and the Caribbean: improving air quality while mitigating climate change. Summary for decision makers. United Nations Environment Programme. Nairobi, Kenya
- <sup>ix</sup> IPCC (2013). Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.) (ed.). Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC), Cambridge [http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5\\_ALL\\_FINAL.pdf](http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf)
- <sup>x</sup> CIMNE and INGENIAR (2015). Update on the Probabilistic Modelling of Natural Risks at Global Level: Global Risk Model, Global earthquake and tropical cyclone hazard assessment. Disaster risk assessment of countries for seismic, cyclonic (wind and storm surge) and flood. Background Paper prepared for the 2015 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland. UNISDR <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/bgdocs/CIMNEINGENIAR,%202014a.pdf>
- <sup>xi</sup> FAO (2015). Regional Overview of Food Insecurity: Latin America and the Caribbean. <http://www.fao.org/3/a-i4636e.pdf>
- <sup>xii</sup> FAO (2015c). Global forest resources assessment 2015: Desk reference. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) <http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf>
- <sup>xiii</sup> Jackson, J., Donovan, M., Cramer, K. and Lam, V. (2014). Status and trends of Caribbean coral reefs: 1970-2012. Global Coral Reef Monitoring Network.
- <sup>xiv</sup> Pérez-Ramírez, M., Castrejón, M., Gutiérrez, N.L. and Defeo, O. (2015). ‘The Marine Stewardship Council certification in Latin America and the Caribbean: A review of experiences, potentials and pitfalls’. Fisheries Research [https://www.researchgate.net/profile/Nicolas\\_Gutierrez6/publication/284914338\\_The\\_Marine\\_Stewardship\\_Council\\_certification\\_in\\_Latin\\_America\\_and\\_the\\_Caribbean\\_A\\_review\\_of\\_experiences\\_potentials\\_and\\_pitfalls/links/565d8a6b08ae1ef92982c129.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Gutierrez6/publication/284914338_The_Marine_Stewardship_Council_certification_in_Latin_America_and_the_Caribbean_A_review_of_experiences_potentials_and_pitfalls/links/565d8a6b08ae1ef92982c129.pdf)
- <sup>xv</sup> FAO (2014). The state of world fisheries and aquaculture: Opportunities and challenges. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome <http://www.fao.org/3/d1eaa9a1-5a71-4e42-86c0-f2111f07de16/i3720e.pdf>
- <sup>xvi</sup> UNEP (2016a). A snapshot on the world’s water quality: Towards a global assessment. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi.